Mònica Bernabé

CRÓNICA DE UN FRACASO

Afganistán, la retirada



DEBATE

Crónica de un fracaso

Afganistán, la retirada

MÒNICA BERNABÉ FERNÁNDEZ

DEBATE

A mis padres, a mi hermano y a María,
por todo lo que me han ayudado

Podrán cortar todas las flores, pero no podrán detener la primavera.

PABLO NERUDA

Los nombres de los afganos que aparecen en este libro y siguen en Afganistán se han sustituido por nombres ficticios para proteger su identidad.

Provincias de Afganistán

Prólogo

Los encapuchados nos cerraron el paso y nos obligaron a salir del todoterreno con las manos en alto, mientras nos apuntaban con los fusiles. Tras cachearnos, nos tiraron al suelo y nos pusieron las esposas. Era noche cerrada, estábamos en medio de un bosque y no se veía nada. A pesar de eso, mantuve la calma. Tal vez porque ya me esperaba algo así. Lo único que me preocupó en ese momento es que mi anorak se ensuciara con el barro.

La cosa cambió cuando también nos cubrieron la cabeza con una capucha, nos metieron en otro vehículo y nos trasladaron a una casa abandonada. Durante el trayecto me mareé y llegué con mal cuerpo. Allí nos separaron. A mí me tumbaron en un colchón en el suelo, me patearon y me echaron agua fría por encima a pesar de las gélidas temperaturas. Era invierno. Aun así no solté ni un grito, ni una queja, ni un lamento. Nada. Pensé que cualquier reacción podía incitarlos a hacerme más daño.

En otra estancia estaba mi colega. A él también lo patearon, intentaron asfixiarlo con una bolsa de plástico, y lo quemaron con lo que parecían colillas de cigarro. Yo oía sus llantos y súplicas para que no lo maltrataran más. «Tal vez os estáis pasando un poco, ¿no? ¡Dejadlo!», grité. Pero entonces un hombre me agarró del pelo con fuerza y me susurró al oído: «Otra palabra y te saco fuera y te violo». No hizo falta que me dijera nada más. No volví a abrir la boca. A pesar de que en ningún momento me olvidé de que aquello era un simulacro de secuestro, de que no era real, aunque los llantos y los gritos de

mi colega sí lo eran.

El Mundo contrató los servicios de Tactical Training Institute, una consultora de seguridad especializada en la formación de reporteros en zona de conflicto, para que impartiera un curso de una semana a cuatro periodistas del diario que trabajábamos en países en guerra. Era enero de 2012 y fui a regañadientes. «¿Qué me van a enseñar estos a mí?», pensé. Entonces ya hacía cinco años que vivía en Afganistán.

Para mi sorpresa aprendí más de lo que esperaba, como que las desgracias en Afganistán eran una llovizna fina que me iba calando poco a poco y me había empapado sin darme cuenta. Me había construido una coraza para no sufrir. Era mi estrategia para seguir adelante. «Eres una persona especialmente sensible y es normal que hayas creado ese mecanismo de autodefensa, pero eres capaz de tener a alguien que se está muriendo a tu lado y no reaccionar», me dijo el responsable del curso. Para mí sus palabras significaban que me había convertido en una cretina, y en esos momentos me planteé si debía regresar o no a Afganistán. Lo cierto, sin embargo, es que no era una cretina sino que, más allá de la guerra que narraba en mis artículos, otra batalla en la que la tristeza ganaba cada vez más espacio se libraba dentro de mí, hasta que caí en una depresión.

A pesar de todo, volví a Afganistán y continué viviendo en Kabul cerca de tres años más, hasta octubre de 2014. Después he regresado en cinco ocasiones: en 2016, 2017, 2019, 2021 y 2023. Los capítulos de este libro se organizan en función de esos viajes. El relato arranca en el año 2012, cuando Barack Obama es reelegido presidente de Estados Unidos y comienza la retirada de la mayoría de las tropas internacionales de Afganistán. Acaba en abril de 2023, cuando los talibanes están en el poder y Afganistán ya no forma parte de la agenda de Estados Unidos ni de la OTAN. El país sencillamente cae en el

olvido.

Esta es una crónica periodística basada en mi experiencia sobre el terreno. De alguna manera es la continuación, al menos en el tiempo, de mi primer libro, *Afganistán. Crónica de una ficción*, que abarca el conflicto desde el 2000 hasta el 2012.

Como en aquella ocasión, esta vez también escribo en primera persona porque pretendo ir más allá de lo acaecido en Afganistán y visibilizar las consecuencias psicológicas devastadoras que supone vivir en un país en guerra. Mi intención es mostrar, a través de mi experiencia, las secuelas que arrastran los refugiados que huyen de Afganistán o de cualquier otro país en conflicto. Normalmente es una parte que no se tiene en cuenta y, por lo tanto, no se hace nada para ayudarlos.

A raíz del regreso de los talibanes al poder, los medios de comunicación hablaron mucho de las mujeres afganas e idealizaron su situación durante los años que las tropas internacionales estuvieron en el país. También deseo desmitificar esta idea y poner en evidencia que las afganas siempre han sido ciudadanas de segunda y sus derechos se pisoteaban mientras la comunidad internacional miraba hacia otro lado.

Por primera vez soy políticamente incorrecta. Critico a los periodistas que adulan el poder en vez de fiscalizarlo, y denuncio la precariedad económica y laboral en nuestra profesión. Esto es algo que debería hacernos reflexionar como sociedad: sin un periodismo de calidad somos fácilmente manipulables, y es imposible hacer buen periodismo si a los reporteros se les paga una miseria.

Ahora que vivo en Barcelona, la hipocresía internacional me resulta aún más evidente. No soporto los discursos grandilocuentes de la Unión Europea que defienden la justicia y

los derechos humanos porque en Afganistán, como en tantos otros países, no ha hecho nada para protegerlos. Predicamos una cosa cuando en realidad hacemos otra. Creemos ser los más civilizados, y tal vez solo seamos los más cínicos. Así pretendo demostrarlo en las páginas de este libro.

Mònica Bernabé
Barcelona, septiembre de 2023

Años 2012 y 2013
El repliegue de las tropas

El ataque me pilló dormida. Podría hacerme la heroína y explicar que temí por mi vida y que fue una experiencia traumática, pero lo cierto es que me cogió tan sumamente despistada que en un primer momento no supe discernir si era sueño o realidad. El ronroneo del motor, los crujidos metálicos del vehículo que avanzaba despacio y la imposibilidad de moverme a causa del cinturón de seguridad, el chaleco antibalas y el casco hacían que siempre me quedara frita cuando iba dentro de un carro de combate estadounidense en Afganistán. Daba igual si la zona en la que estaba era especialmente peligrosa. Tras varias horas metida allí, no podía evitar que los párpados se me cerraran. Ese día, sin embargo, la explosión de la mina antitanque me despertó de golpe.

El estruendo fue enorme y el blindado se llenó de polvo y arena a través de la escotilla del tirador. Parecía que una tormenta de tierra nos hubiera caído encima. «¡Agáchate, agáchate!», gritaron automáticamente los dos soldados estadounidenses que iban conmigo en la parte trasera del vehículo, mientras agarraban al tirador por las piernas para evitar que saliera despedido hacia fuera por la onda expansiva. El joven quedó recostado sobre la plataforma de tiro con semblante desencajado, y con la cara y las gafas cubiertas por completo de arena. Se le veía tan confundido como a mí.

Tras la explosión, se hizo un silencio sepulcral que duró algunos segundos. No se oía nada fuera y los militares estadounidenses también se quedaron mudos. «Que ningún vehículo avance, que nadie se mueva», ordenó el capitán Jonathan Nielsen al fin por radio. La tierra yerma por donde

avanzaba el carro de combate quedó desierta de repente. Los niños y los campesinos afganos que trajinaban en la zona desaparecieron como por arte de magia. «No es buena señal», comentó Nielsen con fastidio, dando a entender que tal vez había otra mina escondida o los talibanes merodeaban por ahí fuera. Vete tú a saber.

El artefacto explosivo había dado de pleno al blindado que nos precedía en el convoy. El chasis, un neumático, el radiador y buena parte del motor habían salido despedidos en forma de proyectil letal a más de cien metros de distancia, y algunas piezas enormes de metal habían impactado directamente contra la carrocería y el parabrisas de nuestro vehículo. Impresionaba ver que un artefacto de los talibanes tuviera tanta potencia, y que vehículos tan robustos como los de los estadounidenses quedaran hechos chatarra.

El carro de combate siniestrado era un MRAP, una especie de tanqueta de más de catorce toneladas de peso cuyas siglas en inglés significan precisamente *mine-resistant ambush protected,* o sea, «vehículo protegido resistente a las minas y a las emboscadas». Aun así quedó para el desguace. Y eso que no tenía nada que ver con los míticos Humvees, los blindados ligeros que los estadounidenses utilizaron inicialmente en las guerras de Afganistán e Irak y que después sustituyeron por otros vehículos más grandes y resistentes. En el caso de Afganistán, regalaron los Humvees a las fuerzas de seguridad del país aunque sabían que les servirían de poco porque no resistían las minas antitanque de los talibanes. Los nuevos carros de combate superacorazados que los estadounidenses utilizaron luego en Afganistán tampoco les permitieron reducir riesgos. Entonces, los talibanes empezaron a fabricar artefactos aún más potentes, aunque de forma rudimentaria: con ollas o garrafas de plástico rellenas de clavos y nitrato de amonio, un fertilizante que era ilegal en Afganistán pero que importaban

desde Pakistán y utilizaban como explosivo.

De hecho, los artefactos explosivos se convirtieron en la principal arma de guerra de los talibanes y en el mayor dolor de cabeza de las tropas internacionales. Eran la causa primordial de las bajas militares. En 2010 se llegó a una cifra récord: murieron 710 militares extranjeros, de los que 498 eran de Estados Unidos, una cantidad difícil de digerir para la opinión pública del país. Eso sin contar los innumerables soldados que quedaban mutilados, de los que ni se hablaba ni se difundían estadísticas oficiales.

El gran número de bajas militares hizo que el entonces presidente Barack Obama se decidiera a ordenar una retirada progresiva de los efectivos nacionales de Afganistán. También influyó que fuerzas especiales de élite de Estados Unidos hubieran abatido al terrorista saudí Osama bin Laden en una operación militar en Pakistán, el 2 de mayo de 2011. Si la razón inicial para invadir Afganistán en 2001 fue capturar a Bin Laden, considerado el cerebro de los atentados contra las Torres Gemelas de Nueva York, y a quien los talibanes daban asilo, no parecía que tuviera mucho sentido continuar en el país si el terrorista ya estaba muerto.

Además, en 2012 se celebraban elecciones presidenciales en Estados Unidos y Obama no tenía ninguna intención de que la guerra empañara su campaña de reelección. A todo esto hay que añadir que la misión en Afganistán le costaba un ojo de la cara a Washington: tener un soldado en el país asiático durante un año suponía una inversión de 850.000 dólares, según datos del Pentágono facilitados en marzo de 2012, y llegaron a desplegarse hasta noventa mil militares en el territorio de forma simultánea. El gasto anual era multimillonario. Todo eso contribuyó a que Estados Unidos y el resto de los países de la OTAN pusieran una fecha para la retirada de la mayoría de las tropas internacionales: sería a finales de 2014, fuese cual fuese

la situación en el país.

Un camión grúa se llevó el blindado estadounidense que había quedado medio volcado y con toda la parte delantera destrozada por la mina antitanque que me sacó de mi letargo. Asimismo, decenas de soldados se desplegaron para peinar el terreno en busca de otros posibles artefactos y recoger todas las piezas y pedazos de metal que habían quedado esparcidos por los alrededores. «No podemos dejar ningún rastro para no dar pistas a los talibanes. No nos interesa que sepan de qué material están hechos nuestros vehículos», argumentó el capitán Nielsen para justificar esa obsesión en que no quedara nada.

Cuando regresé al campamento Warrior, en la provincia de Ghazni, en el sudeste de Afganistán, recibí una llamada del coronel español Luis Cervera, que trabajaba en la oficina de prensa de las tropas estadounidenses en Kabul. Le habían informado de que una periodista española viajaba en el convoy atacado y enseguida se puso en contacto conmigo para saber si estaba bien y si quería someterme a una revisión médica. «Muchas gracias, no te preocupes, estoy bien», le contesté sin dar muchos detalles de lo que había sucedido, porque pensé que no era muy profesional explicar que me había quedado dormida en el blindado.

El ataque tuvo lugar en una fecha señalada: el 7 de noviembre de 2012, menos de 24 horas después de que se celebraran las elecciones presidenciales en Estados Unidos y se dieran a conocer los resultados. Obama fue reelegido. En su primer mandato, de 2009 a 2012, el presidente había apostado por enviar miles de soldados a Afganistán para combatir contra los talibanes. En cambio, en el segundo mandato hizo todo lo contrario: retiró casi todos los efectivos del país y se decantó por el uso masivo de drones hasta el punto de que Afganistán se convirtió en el país del mundo más bombardeado por este

tipo de máquinas, a pesar de que eran poco precisas y causaban la muerte de civiles inocentes.

En el campamento Warrior, sin embargo, los militares estadounidenses no parecían muy interesados ni en las elecciones ni en los resultados. De hecho, la mayoría confesaba que ni siquiera había votado. Lo único que les preocupaba en aquel momento era regresar vivos a casa.

Las tropas españolas

Esa fue la última vez que me «empotré» con las tropas estadounidenses en Afganistán, lo que en la jerga periodística significa acompañar a una unidad militar para informar sobre su labor. Fue algo que había hecho en reiteradas ocasiones, una decena, durante los años que viví en el país. Siempre seguía el mismo procedimiento: enviaba una solicitud formal a la OTAN indicando a qué tropas quería acompañar, en qué provincia y durante cuánto tiempo, y al cabo de un mes aproximadamente me contestaban aceptando o denegando mi petición. En general, los empotramientos duraban tres semanas, y me permitían llegar hasta zonas rurales especialmente peligrosas a las que me era imposible acceder por mis propios medios. Estar con las tropas internacionales me daba la posibilidad de ver en directo cómo los militares trataban a la población local y, sobre todo, si eran o no bienvenidos. De hecho, eso era lo más interesante de los empotramientos para mí: limitarme a observar y a escuchar. Los comentarios de los soldados eran a menudo reveladores, pues mostraban su desconocimiento total del país o su idea distorsionada sobre Afganistán.

En 2012, entonces, dejé de acompañar a las tropas estadounidenses, aunque después seguí empotrándome, hasta en cinco ocasiones, con las fuerzas españolas desplegadas en la

provincia de Badghis, al noroeste de Afganistán. Rompí así un maleficio que me había perseguido desde que me establecí como periodista en el país en 2006. Como reportera extranjera acreditada por la OTAN, me estaba permitido acompañar a los militares de cualquiera de los cincuenta países que operaban en Afganistán, así como entrar en sus bases, excepto en el caso de los militares y las bases españolas. Así lo estipulaba el Ministerio de Defensa en Madrid, que, durante el Gobierno socialista de José Luis Rodríguez Zapatero, solo permitía que los periodistas entraran en las bases españolas si había una visita oficial del ministro o ministra de Defensa de turno. Trasladaban a los reporteros con el político en un avión desde España hasta Afganistán para que informaran sobre el viaje y tomaran unas cuantas imágenes de la base militar. Pocas horas después los llevaban de vuelta a Madrid de la misma forma. Lógicamente, así era imposible informar con cierto rigor sobre el trabajo del contingente español y aún menos saber qué pasaba realmente en Afganistán.

Para mi sorpresa, el Ministerio de Defensa modificó esa política en 2012, con la llegada del Partido Popular a la Moncloa, y permitió que los periodistas tuvieran acceso a las tropas españolas. Yo no achacaría ese cambio a un mayor respeto al derecho a la información por parte del PP, sino al sentido común y a la apertura de miras de Joaquín Madina, el primer director de comunicación del entonces ministro de Defensa Pedro Morenés. Madina consideraba absurdo vetar el acceso a los periodistas si las fuerzas españolas no tenían nada que esconder, y todo el mundo sabía de sobra que en Afganistán había una guerra, a pesar de que durante años Rodríguez Zapatero intentó vender la idea contraria: que en Afganistán no existía ningún peligro y que la misión española era estrictamente humanitaria.

Los militares españoles podían ir en son de paz a Afganistán,

pero, les gustase o no, los talibanes los atacaban y no tenían más remedio que abrir fuego para defenderse. Eso explica que España, como la mayoría de los países con fuerzas en el país asiático, también sufriera bajas: 102 militares y policías murieron en la misión afgana. Una cifra elevada pero muy inferior a la de países como Estados Unidos, que perdió a 2.465 militares, o el Reino Unido, que sufrió 455 bajas. Además, la mayoría de los militares españoles murieron a causa de un accidente y no en combate. En concreto, 62 fallecieron en la tragedia del Yakolev-42, el avión que se estrelló en Turquía en 2003 cuando regresaba de Afganistán, y 17 más en una colisión de helicóptero que tuvo lugar en la provincia de Herat en 2005. España llegó a tener un contingente de 1.500 efectivos, que era relevado cada tres o cuatro meses. En total, más de 27.000 militares pasaron por el país en diecinueve años.

El contingente español, como el estadounidense, se encargaba de la formación del ejército afgano. Sus condiciones de vida eran espartanas en la mayoría de los casos. Me impresionó especialmente la situación en la base de patrullas «Bravo Papa», como ellos la llamaban, un campamento rudimentario que los españoles habilitaron al pie de la carretera que une el sur con el norte de Badghis para proteger de los ataques de los talibanes a los operarios afganos que trabajaban en las obras de mejora de la vía.

El campamento era una sucesión de grandes agujeros excavados en la tierra que parecían madrigueras, y donde los soldados se camuflaban. Había polvo por todas partes y durante el día hacía un calor infernal. La comida se reducía a raciones en lata, y la letrina era un taburete de madera con un agujero en medio donde los soldados colocaban una bolsa de plástico para defecar. Eso sin contar que estaban en alerta constante: los insurgentes podían atacar en cualquier momento. Lo que más me sorprendía es que la opinión pública española

no supiera todo eso. Aunque solo fuera para reconocer la labor de unos militares que, sin duda, se jugaban la vida.

«La gente en España piensa que venimos a Afganistán de vacaciones. No sabe lo que pasa aquí», me comentó con fastidio Gabriel Regalado, un soldado español de veintiocho años, a quien entrevisté en el puesto avanzado de combate Ricketts, en la localidad de Moqur. Efectivamente, la opinión pública española tenía una idea distorsionada sobre lo que ocurría en Afganistán a consecuencia de los años de veto informativo del Ministerio de Defensa, pero también porque los militares, como ellos mismos admitían, explicaban de la misa la mitad a los suyos mientras estaban destinados allí. Sobre todo para no preocuparlos.

Tal vez por eso, durante las semanas que acompañé a las fuerzas españolas en Afganistán, recibí infinidad de mensajes a través de Facebook de familiares de los militares que me agradecían que explicara cómo era su día a día. Por ejemplo, les interesaban detalles tan peregrinos como que el locutorio en el campamento de Moqur era una tienda de campaña dividida en pequeños compartimentos de madera donde los militares hablaban por teléfono de pie, o que el puesto avanzado de combate de Ludina estaba plagado de insectos alargados de color paja que se metían por todas partes durante la noche, o que en los lavabos de las bases militares había que lavarse los dientes con agua embotellada si uno no quería acabar con diarrea.

Los militares empezaron los trabajos de desmontaje del campamento Ricketts a principios de marzo de 2013, sudando la gota gorda y en manga corta, con temperaturas estivales que provocaron que diecisiete soldados cayeran enfermos en menos de 24 horas con vómitos y diarrea. Entonces se decretó el cierre de la cocina para evitar más riesgos y los soldados tuvieron que tirar de «ladrillos», como ellos llamaban a las raciones de

comida empaquetada.

Dos días antes del cierre definitivo de la base, las temperaturas cayeron en picado, por debajo de los cero grados. Nevó y las cañerías se congelaron a causa del frío. Los militares, que ya no tenían comida caliente ni electricidad, porque habían desconectado los generadores para llevárselos, por si fuera poco se quedaron sin agua. La última noche parecía que no acababa nunca. Muchos soldados durmieron dentro de los carros de combate para no morir de frío, otros se metieron en cuevas e, incluso alguno, en una cámara frigorífica fuera de uso.

El último vehículo militar salió del campamento el 9 de marzo de 2013 a las 11.30 horas, marcando un antes y un después en la misión española en Afganistán. Ricketts era el último puesto avanzado de España en el país. A partir de entonces las tropas estarían destacadas solo en dos grandes bases militares: la de Qala-e-Now y la de Herat, y tendrían como principal cometido recoger sus bártulos para regresar definitivamente a casa. España iniciaba así la retirada progresiva de su contingente, de la misma manera que Estados Unidos y el resto de los países aliados.

Traductores afganos

Me escribió a través de Facebook y se presentó como «intérprete de las tropas españolas». Quería reunirse conmigo en la base militar de Qala-e-Now, donde entonces aún se concentraban parte de las fuerzas españolas y donde yo pasaba unos días para informar sobre el repliegue. Era agosto de 2013. Debo admitir que en un principio le di largas. No conocía a ese afgano de nada y no quería buscarme problemas, ahora que por fin el Ministerio de Defensa me dejaba entrar en las bases

militares españolas e informar sobre el trabajo de las tropas. Pero insistió tanto que accedí.

Quedamos a las diez de la noche al lado de un asta donde ondeaba una gran bandera española. No había ninguna luz excepto la de la luna. En Qala-e-Now, como en todas las bases de tropas internacionales en Afganistán, estaba prohibido encender luces exteriores por la noche para evitar que el campamento se convirtiera en un objetivo para los talibanes. En la penumbra era mucho más difícil atacarlas.

Distinguí la silueta de una decena de jóvenes al lado del asta, en vez de la de uno solo, que es lo que yo esperaba, y eso me contrarió. Así que me aproximé con recelo. Los chicos, en cuanto me vieron, se acercaron con educación y se presentaron uno a uno estrechándome la mano. Todos eran intérpretes afganos de las fuerzas españolas y querían hablar conmigo para que informara sobre su situación desesperada: con la retirada de los militares españoles de Qala-e-Now estaban a punto de ser despedidos y temían por su vida. Según decían, los propios militares les aconsejaron contactar con «la periodista», o sea, conmigo, para hacer ruido en la prensa y evitar que el Ministerio de Defensa español los dejara en la estacada.

Los intérpretes vivían en las bases españolas, acompañaban a las tropas a todas partes y asumían los mismos riesgos. De hecho, eran su boca y sus oídos. Sin ellos, los militares no podían comunicarse con las autoridades, ni con las fuerzas de seguridad ni la población afganas. A pesar de eso, el Ministerio de Defensa pretendía deshacerse de ellos de la noche a la mañana, sin ningún tipo de indemnización y sin preocuparse por el futuro que les esperaba. Los talibanes los consideraban traidores e infieles por haber colaborado con las tropas extranjeras.

Algunos intérpretes eran estudiantes de Filología Hispánica de la Universidad de Kabul que habían dejado las aulas

seducidos por la atractiva oferta laboral de los militares españoles. Les llegaron a pagar hasta mil euros al mes por trabajar para ellos, toda una fortuna en Afganistán. Años después, su sueldo se fue reduciendo a medida que la crisis económica irrumpía en España. Otros traductores eran chicos de la localidad de Qala-e-Now que habían empezado a trabajar como operarios en la base militar y que luego, cuando chapurrearon algo de español, fueron contratados como intérpretes. Sea como sea, todos eran jovencísimos. Algunos todavía tenían cara de adolescente, y verlos suplicándome ayuda en la oscuridad me conmovió.

Otros países sí que habían dispuesto una salida para los intérpretes de sus tropas. Por ejemplo, el Gobierno estadounidense abrió un programa especial para la concesión de visados, y el Reino Unido dio asilo a más de medio millar. En cambio, España no había previsto absolutamente nada.

Solicitud de asilo

«No nos interesa publicar más artículos sobre los traductores afganos», me dijo por teléfono Rafael Moyano, que era entonces el jefe de la sección de Nacional del diario *El Mundo*. El Ministerio de Defensa tenía previsto dejar a su suerte a una cuarentena de intérpretes afganos y yo apenas había escrito un par de artículos sobre el tema. ¿Cómo era posible que a *El Mundo* no le interesara que continuara informando sobre eso? El propio Moyano me dio la respuesta: el Ministerio de Defensa se puso en contacto con la dirección del diario y les proporcionó documentación que supuestamente desmentía mi versión, aseverando que, por el contrario, los traductores afganos no corrían ningún peligro con la retirada de las tropas. Su explicación me dejó atónita.

¿Qué documentación era esa? ¿Y por qué *El Mundo* daba más credibilidad a la versión oficial del Gobierno que a la mía? Yo llevaba años trabajando para el diario, publicando artículos cada semana. Era autónoma, es decir, no estaba en plantilla, y cobraba en función del número de crónicas, fotos y vídeos que publicaba; aun así, el periódico siempre me había pagado muy bien, había confiado en mi profesionalidad y me había promocionado como reportera. Incluso apoyó mi candidatura a uno de los galardones más prestigiosos de la prensa española: el Premio Cirilo Rodríguez a la mejor corresponsal española en el extranjero, que gané en mayo de 2013. Sin embargo, pocos meses más tarde, el diario cuestionaba mi trabajo dando credibilidad a la versión del Ministerio de Defensa. Lo peor es que yo era la única reportera española que vivía en Afganistán, no había más periodistas que pudieran rebatir la versión oficial del Gobierno. Era mi palabra contra la suya.

Por aquel entonces, Joaquín Madina ya no era el director de comunicación de Defensa. Lo sustituyó Diego Mazón, un periodista que había trabajado como redactor jefe en *La Razón*. «No puedo enviarte la documentación por e-mail porque es confidencial. Cuando vengas a Madrid, si quieres, te pasas por el Ministerio de Defensa y te la enseñamos», me contestó cuando le reclamé los papeles que el ministerio había facilitado a *El Mundo* y que cuestionaban mi versión. El problema es que yo estaba en Kabul, a miles de kilómetros de distancia.

A raíz de los artículos que publiqué sobre los traductores afganos, Arsenio García Cores, un abogado gallego experto en derecho de asilo, me contactó y se ofreció a asesorar a los intérpretes de forma gratuita para que pudieran solicitar protección internacional. Arsenio me envió por correo electrónico el formulario que los traductores debían rellenar, el modelo de carta que tenían que adjuntar y el listado de documentos que debían incluir para formalizar la petición. Los

pasos, en teoría, eran fáciles de seguir; lo difícil fue hacerlo en la práctica.

Los intérpretes afganos hablaban perfectamente castellano, pero a duras penas escribían el idioma y no tenían ni idea de burocracia. Eran incapaces de rellenar una petición de asilo porque ni entendían el formulario, ni sabían qué contestar en algunos apartados básicos. Por ejemplo, el de la fecha de nacimiento: la mayoría de los afganos no saben qué día han nacido porque las familias no acostumbran a registrarlos. Los cumpleaños tampoco suelen celebrarse, y ese dato a veces ni aparece en los documentos de identidad. Rellenar el formulario, entonces, se convirtió para ellos en un auténtico quebradero de cabeza, así que María Cilleros y yo decidimos arremangarnos y ayudarlos.

María es una buena amiga mía que se había instalado en Kabul hacía cuatro meses para gestionar los proyectos de cooperación de la Asociación por los Derechos Humanos en Afganistán (ASDHA), la ONG de ayuda a mujeres afganas que yo presidía desde el año 2000. Compartía casa conmigo en la capital del país, por lo que durante algunas semanas nuestra vivienda se convirtió en una especie de central de solicitudes de asilo.

Allí rellenábamos los formularios a mano a partir de la documentación que los intérpretes nos enviaban, redactábamos las cartas de petición de asilo e imprimíamos todos los documentos necesarios: contratos de trabajo que demostraban la vinculación de los traductores con las fuerzas españolas, diplomas de reconocimiento que los militares les habían dado e incluso fotografías en las que se les veía vestidos con el uniforme del ejército español. Un par de intérpretes venían cada día para traducir y ordenar documentos, o reclamar a sus compañeros por teléfono el material que faltaba. Durante semanas el salón de nuestra casa se llenó de carpetas y más

carpetas con todo tipo de papeles. A la mayoría de los traductores no los conocíamos, pero nos aprendimos sus nombres de memoria y nos familiarizamos con sus caras de tanto verlas en las fotos. En total preparamos cuarenta solicitudes de asilo que supusieron varias semanas de trabajo. Cada petición era un expediente de al menos una quincena de páginas, que después los intérpretes entregaban en la embajada española en Kabul.

Paralelamente, desde Barcelona, la investigadora experta en Asia Central Ana Ballesteros impulsó una campaña de recogida de firmas en la plataforma Change.org para que se concediera asilo a los traductores. Consiguió 66.000 firmas en tan solo dos semanas. Ella se convirtió en la cara visible de la campaña junto a Arsenio: eran los que hacían declaraciones ante los medios de comunicación en España. El activista de Amnistía Internacional Alberto Estévez también se unió a la movilización y propuso redactar una carta para enviarla directamente al rey Juan Carlos. Desde luego, las redes sociales también nos sirvieron de altavoz, de manera que continuamos haciendo ruido en la prensa a pesar de que *El Mundo* no me permitiera publicar más artículos sobre los traductores afganos.

CHANTAJES

Según Hamid Rahimi, los militares españoles le ofrecieron trabajar para ellos en la base de Herat, después del cierre de la de Qala-e-Now, si a cambio firmaba un documento en el que se comprometía a retirar la petición de asilo que había presentado en la embajada española de Kabul. Su solicitud era uno de los muchos expedientes que preparamos María y yo. De ser cierto lo que me explicaba Rahimi, significaba que los militares le estaban haciendo chantaje. Le pedí ver una copia del

documento en cuestión. «No me lo quieren dar», se lamentó el chico, que estaba entre la espada y la pared: necesitaba trabajar para mantener a su familia, pero no podía renunciar a la petición de asilo porque se jugaba la vida. Los talibanes ya le habían enviado un par de cartas amenazándolo de muerte por trabajar para las fuerzas extranjeras.

Le propuse a Rahimi que grabara con el móvil, a escondidas, la conversación que mantuviera con los militares. Si ellos se negaban de nuevo a darle una copia del famoso documento, al menos tendría una prueba de la supuesta extorsión. Para mi sorpresa, me hizo caso. Escondió el móvil en un bolsillo, registró la conversación con los militares de principio a fin y después me envió la grabación. Cuando la escuché no daba crédito. En la grabación se oía perfectamente cómo los militares coaccionaban al chico con la excusa de que ellos cumplían órdenes del Ministerio de Defensa en Madrid. Rahimi no firmó el documento. Lo despidieron de inmediato, y sin ninguna indemnización a pesar de haber trabajado para las tropas españolas durante tres años y medio y ser uno de sus mejores traductores. Era el 19 de septiembre de 2013.

Resultaba evidente que el Ministerio de Defensa había cometido un posible delito de coacción, y yo tenía la grabación que lo demostraba. Seguro que *El Mundo* sí querría publicar eso, pensé. Pero me dijeron que no, que esa información tampoco les interesaba. Si su primera negativa me dolió, la segunda me hundió por completo. No entendía por qué continuaban cuestionando mi profesionalidad. Como yo no podía publicar nada, el periodista y fotógrafo Gervasio Sánchez, que casualmente estaba en Kabul esos días, me propuso publicarlo él en los medios para los que trabajaba (la Cadena SER y el diario *Heraldo de Aragón*), con el objetivo de denunciar lo que estaba pasando.

El 24 de septiembre, la Cadena SER emitió en su programa

de la mañana un fragmento de la grabación que había hecho Rahimi. Tuvo tanta repercusión que *El Mundo* se vio obligado a hacerse eco de la noticia. El Ministerio de Defensa también tuvo que pronunciarse ante el escándalo: intentó salir del paso argumentando que la cadena de mando había malinterpretado sus órdenes. Asimismo, Rahimi fue readmitido en el trabajo con la promesa de que se le concedería el asilo. A raíz de aquel episodio, el asunto de los traductores afganos llegó al Congreso de los Diputados y el Gobierno tuvo que dar explicaciones sobre las supuestas irregularidades que estaba cometiendo con esos chicos.

A finales de 2013 regresé a España y viajé a Madrid expresamente para ver la documentación confidencial que el Ministerio de Defensa había entregado a *El Mundo* y que contradecía mi versión de los hechos. Diego Mazón me convocó a una reunión con el almirante Teodoro López Calderón, que en aquel momento era jefe del Mando de Operaciones, es decir, el responsable de todas las tropas españolas en el extranjero. El almirante me mostró un informe que analizaba la situación de una larga serie de afganos que habían trabajado con las fuerzas españolas. Según el escrito, la vida de ninguno de ellos corría peligro tras la retirada de las tropas. Leí el documento en diagonal y me percaté de que no mencionaba a ninguno de los traductores afganos, y así se lo hice notar a López Calderón. El almirante se mostró contrariado con mi observación, revisó el informe sorprendido y empezó a hacerme preguntas. No recuerdo exactamente qué me preguntó, solo sé que estuve mucho tiempo respondiendo y que, al final de la reunión, se comprometió a revisar aquel material y a comprobar si habían cometido algún error.

En 2014 el Ministerio de Defensa cambió radicalmente su postura: si al principio había dejado tirados a los intérpretes, a partir de entonces les permitió elegir entre quedarse en

Afganistán y cobrar una indemnización, o recibir asilo en España. Un total de treinta y cinco traductores, algunos con sus familias, optaron por la protección internacional. La campaña de denuncia, la presión de la prensa y la preparación de los expedientes fueron clave para conseguirlo, pero quien realmente hizo posible que los traductores llegaran a España fue el almirante López Calderón. El jefe del Mando de Operaciones revisó todos los expedientes y no cejó hasta conseguir que los chicos obtuvieran asilo.

Con el repliegue de las tropas españolas de Qala-e-Now, la base fue transferida al ejército afgano. Para ello se celebró un acto institucional al que asistió el ministro de Defensa, Pedro Morenés, que se desplazó a Afganistán expresamente, acompañado por un grupo de reporteros, tal y como hacían sus predecesores socialistas en el cargo. Yo fui la única periodista a la que no invitaron a la ceremonia. Tras la polémica sobre los traductores, se me volvió a vetar la entrada a las bases españolas.

Año 2014
Se multiplican los atentados

Andrés era un trozo de pan. Era un boliviano que trabajaba en proyectos agrícolas en Afganistán y siempre hacía lo que estuviera en su mano para ayudar a los demás. Sin embargo, su cuerpo grandullón, su tez oscura y su abundante barba gris le conferían un aspecto que daba miedo: a simple vista parecía un talibán. Cuando llegué a su casa en Kabul aquella noche, lo primero que hizo fue enseñarme los cachivaches que había instalado en el lavabo para destilar alcohol. En la capital afgana cada vez era más difícil encontrar whisky, ginebra o cualquier otra bebida alcohólica, y los pocos lugares autorizados para venderlas —básicamente los restaurantes reservados a extranjeros— las comercializaban a precios prohibitivos. Por aquel entonces una simple lata de cerveza Heineken costaba diez dólares. Así que Andrés se las había ingeniado para garantizar su propia producción en casa, y lo mostraba con orgullo a los invitados.

Vivía a unos doscientos metros de mi casa, en una calle paralela, en la zona de Qala-e-Fathullah. Aquella noche varios extranjeros nos habíamos reunido en su domicilio para cenar y celebrar la entrada del año nuevo persa en Afganistán: era el 20 de marzo de 2014 y los afganos festejaban el inicio del año 1393. Apenas empezábamos a cenar cuando nos enteramos de la noticia: unos terroristas habían asaltado el hotel Serena, un cinco estrellas, el más lujoso de Kabul, y se habían atrincherado dentro. La televisión difundía imágenes de coches de policía haciendo sonar las sirenas en el exterior del hotel, en el centro de la capital, pero la información era confusa y no se sabía exactamente qué ocurría. Eso sí, ya se hablaba de muertos.

El Serena no era un lugar que frecuentaba: era demasiado caro, y no conocía a nadie que estuviera alojado allí. Los talibanes ya lo habían atacado en otras dos ocasiones, en 2006 y 2008, y el edificio se había ido fortificando a base de atentados. Unos bloques de hormigón muy altos rodeaban todo el perímetro para proteger la fachada, y la entrada era una doble compuerta de hierro macizo donde hombres armados con kaláshnikov hacían guardia. Además, había que pasar por un arco detector de metales y colocar tus pertenencias en un escáner para poder acceder al recinto. Parecía increíble que los talibanes hubieran conseguido burlar tantas medidas de seguridad.

Los terroristas eran cuatro chicos muy jóvenes, de entre diecinueve y veinticinco años, según detalló el Gobierno afgano una vez que acabó el ataque. Habían entrado en el hotel tranquilamente por la puerta principal, camuflando las pistolas dentro de los zapatos. El vigilante que los cacheó a la entrada no revisó el calzado y el arco detector de metales tampoco identificó las armas. Así que los chicos pasaron sin levantar sospechas y estuvieron paseando por el hotel buena parte de la tarde hasta que llegó la hora de servir la cena en el restaurante. Entonces irrumpieron en el comedor disparando a bocajarro a todos los comensales. Sin piedad. Entre las víctimas había una niña de seis años y un niño de cuatro. En total murieron nueve personas.

Aquella noche yo no sabía que los dos niños eran hijos del periodista afgano Ahmad Sardar, y que él también era una de las víctimas mortales. De hecho, ni siquiera sabía que Sardar —que es como lo conocía todo el mundo en Kabul— estuviera casado y tuviera una familia. Para mí, Sardar era el novio de Courtney, una de las extranjeras con las que yo compartía casa en Kabul.

Vivíamos en un inmueble de dos plantas subdividido en tres

apartamentos, cada uno con su propia cocina y lavabo. En 2014 residíamos allí cinco extranjeros: yo compartía uno de los apartamentos con mi amiga María y su marido, Mario; Jake, un periodista australiano, vivía en otro; y Courtney, una reportera de Estados Unidos, ocupaba el tercero. En concreto, el apartamento de Courtney estaba en la segunda planta, y su habitación se situaba justo encima de la mía. Sardar venía a menudo a verla y pasaba la noche con ella. Desde mi dormitorio podía oír perfectamente, y debo decir que con bastante frecuencia, el chirrido de los muelles de la cama cuando mantenían relaciones sexuales.

Tras el atentado no se volvió a escuchar ningún chirrido. Lo único que se oía era el sollozo desconsolado de Courtney, que lloraba día y noche por la muerte de Sardar. Según decía, el periodista afgano estaba casado y tenía hijos, pero a quien realmente amaba era a ella. Courtney también intentó ahogar las penas en el alcohol, aunque no tenía una fábrica de producción casera como Andrés y debía pagar una fortuna por cada botella. Cayó en tal depresión que era difícil ayudarla. A pesar de eso, continuó en Kabul dos años más, y acabé acostumbrándome a oír su llanto de fondo, como quien se habitúa al sonido de una televisión encendida.

Courtney no era la única que lloraba la muerte de Sardar. El asesinato de él y sus dos hijos generó una reacción sin precedentes. Tras el ataque, decenas de reporteros, artistas y activistas afganos, y también algún político, se manifestaron durante días delante del hotel Serena al grito de «¡muerte a los talibanes!». Por primera vez, la reducida clase intelectual afgana salía a la calle y levantaba su voz contra los radicales. El atentado fue la gota que colmó el vaso.

El 17 enero de 2014 los talibanes habían utilizado el mismo *modus operandi* para atentar contra otro restaurante que también frecuentaban los extranjeros, y al que yo iba a

menudo: La Taverna, situado en el barrio de Wazir Akbar Khan, especializado en comida libanesa. Los talibanes irrumpieron en el establecimiento y asesinaron a los comensales uno a uno, a la mayoría con un tiro en la cabeza. En total murieron veintiún personas, trece de ellas extranjeras.

En Kabul había muchos otros restaurantes como La Taverna, destinados principalmente a una clientela extranjera. Se caracterizaban por ser caros —los precios eran equiparables a los de un restaurante en España, por lo que estaban fuera del alcance de la mayoría de la población afgana— y por sus muchas medidas de seguridad: su perímetro solía estar protegido con bloques de hormigón, sacos de tierra y concertinas, y en la entrada tenían dobles compuertas y guardias armados. Entrar allí era casi como acceder a un búnker. Muchos de esos establecimientos vendían bebidas alcohólicas, a pesar de que el alcohol estaba prohibido en Afganistán. En La Taverna lo intentaban disimular sirviendo la cerveza dentro de una tetera y en tazas de cerámica.

Tras los atentados contra el restaurante La Taverna y el hotel Serena, este tipo de establecimientos se quedaron sin clientela. Las Naciones Unidas, la Unión Europea y la mayoría de los organismos y ONG internacionales prohibieron a su personal extranjero frecuentarlos, aunque eran una de las poquísimas opciones de ocio que existían en la capital afgana. Años atrás sí que hubo piscinas reservadas a extranjeros e incluso algún bar con pista de baile, pero todos fueron cerrando a medida que se multiplicaban los atentados en Kabul.

«Hemos contratado una empresa británica para que se encargue de la seguridad, y ahora tenemos guardias armados apostados en el tejado y cámaras de vigilancia dentro del establecimiento», me explicó Bariale, el mánager de Le Jardin, un bonito restaurante francés que había en el barrio de Qala-e-Fathullah y que de esta manera intentaba recuperar la clientela

perdida. El restaurante Table Talk, ubicado muy cerca de mi casa, al que yo iba a menudo, optó por otra solución: «Querido cliente, el restaurante está cerrado para los extranjeros por razones de seguridad, pero podemos llevarle la comida a casa llamando a los siguientes teléfonos», decía un cartel en la entrada. Los extranjeros habíamos gozado durante años de lugares exclusivos en Kabul donde no se permitía la entrada a los afganos y ahora, paradójicamente, nosotros éramos los excluidos porque nuestra simple presencia podía convertir cualquier lugar en un objetivo.

DESCONFIANZA HACIA LAS FUERZAS DE SEGURIDAD AFGANAS

Un par de años antes, en 2012, más de medio centenar de militares extranjeros murieron, no por fuego enemigo, sino en manos de quienes teóricamente eran sus amigos: las fuerzas de seguridad afganas. A partir de entonces se hicieron habituales los ataques de policías y soldados afganos contra las tropas internacionales. No estaba claro si los agresores eran agentes a quienes se les cruzaban los cables de un día para otro y se liaban a tiros, o si eran talibanes infiltrados. Fuera como fuera, ese tipo de ataques se convirtieron en una de las principales amenazas de los efectivos extranjeros, hasta el punto de que algunos países empezaron a tomar medidas especiales de seguridad.

Las tropas regulares de Estados Unidos, por ejemplo, dejaron de compartir campamentos con el ejército afgano. Se alojaban en bases adyacentes, pero separadas por una pared y con constante vigilancia armada. En la mayoría de las bases estadounidenses se prohibió que los soldados y los policías afganos entraran armados, y se creó la figura de los «ángeles de la guarda»: militares extranjeros cuya única misión era estar

alerta, preparados para disparar y proteger a sus compañeros en caso de que algún afgano abriera fuego contra ellos.

Sin embargo, no se hizo nada para solucionar el problema de fondo: que en Afganistán se formaban soldados como quien hace churros. Mil cuatrocientos reclutas se graduaban cada semana en el centro de entrenamiento militar de Kabul, el más grande del país. Así era difícil garantizar ciertos estándares de calidad y evitar que se infiltraran insurgentes. Pero el tiempo apremiaba: las tropas internacionales habían iniciado su retirada y había que formar el máximo número de soldados afganos antes de que la mayoría de los militares extranjeros se fueran de forma definitiva.

En 2014, esos ataques de las fuerzas de seguridad afganas, que hasta entonces solo habían tenido como objetivo las tropas internacionales, también empezaron a perpetrarse contra civiles extranjeros. El 4 de abril un policía afgano disparó deliberadamente contra dos reporteras: la fotógrafa alemana Anja Niedringhaus y la periodista canadiense Kathy Gannon, que se encontraban en el asiento trasero de su vehículo en la provincia de Khost, al este de Afganistán, cerca de la frontera con Pakistán. Habían llegado hasta allí con un convoy institucional escoltado por policías y soldados afganos que en teoría debían protegerlas. Sin embargo, uno de ellos abrió fuego contra ellas. La fotógrafa murió casi al instante, mientras que la periodista resultó gravemente herida. Ambas trabajaban para la agencia de noticias Associated Press (AP) y tenían una larga experiencia en Afganistán.

Semanas antes, otro periodista, el experimentado corresponsal de la Radio Sueca en Asia, Nils Horner, de cincuenta y un años y doble nacionalidad sueca y británica, fue asesinado de un tiro en la cabeza en Kabul, cuando iba a entrevistar a uno de los supervivientes del ataque a La Taverna. A pesar de eso, yo continuaba creyendo que los civiles no

éramos un objetivo y que la muerte de estos tres reporteros había sido pura casualidad.

Sin embargo, mi percepción cambió radicalmente a partir del 24 de abril de 2014: ese día un policía que custodiaba el hospital privado Cure International de Kabul mató a tiros a tres médicos estadounidenses que trabajaban en el centro. Los médicos siempre han sido los extranjeros más respetados por la población afgana. Todos quieren que los atienda un facultativo extranjero, porque consideran que están mucho mejor preparados que los locales. Así que si habían disparado a tres doctores significaba que cualquier civil extranjero podía ser un objetivo. Era la primera vez que sucedía algo así desde que las tropas internacionales llegaron a Afganistán en 2001.

No podía fiarme ni de los policías ni de los soldados afganos, y me convenía no cruzarme con ellos. El problema es que en Kabul estaban por todos lados. Tenían controles en gran parte de las travesías, y paraban a los vehículos uno a uno o les hacían reducir la marcha para comprobar quién viajaba dentro, con el objetivo de evitar posibles atentados suicidas. También había policías delante de todos los edificios gubernamentales, centros comerciales, universidades, hospitales...

EXTREMANDO LAS MEDIDAS DE SEGURIDAD

En Afganistán me había acostumbrado a cubrirme el cabello con un pañuelo negro cuando salía a la calle y a vestir un *chapán* del mismo color. Era una especie de bata que llegaba hasta los pies y se abotonaba por delante para no marcar las formas del cuerpo. Nadie me había obligado a hacerlo, pero yo sabía que con esa indumentaria islámica pasaba totalmente desapercibida, y eso me facilitaba los movimientos. Podía caminar con toda tranquilidad por la calle sin que nadie se

diera cuenta de que era extranjera y, en consecuencia, sin que los hombres se giraran a mirarme, los conductores tocaran el claxon o los niños me persiguieran pidiendo limosna. Ahora mis precauciones debían ir mucho más allá: tenía que evitar abrir la boca en público si no era estrictamente necesario, más aún hablar con un policía o un soldado afgano. Aunque parezca extraño, lo incorporé en mi día a día como ya antes había normalizado muchos otros comportamientos que, de normales, no tenían nada.

Por ejemplo, me acostumbré a cambiar de itinerario cuando regresaba a casa para que nadie pudiera prever mi recorrido y evitar así un posible secuestro. Si volvía en taxi nunca paraba delante de mi domicilio, sino una calle antes o después, de manera que el conductor no supiera dónde residía. También me habitué a llevar siempre encima dos móviles y unos seiscientos dólares en efectivo. Los teléfonos, para tener una alternativa si uno de ellos dejaba de funcionar, y el dinero, por si las cosas se ponían muy feas de repente y tenía que huir precipitadamente del país. En Afganistán no funcionan las tarjetas de crédito y solo había un par de cajeros automáticos en toda la capital.

Unos años antes los talibanes atacaron un supermercado de la cadena Finest, en Kabul. Un terrorista suicida se inmoló dentro del establecimiento y nueve personas murieron, entre ellas algunas extranjeras. Los Finest vendían productos occidentales y eran mucho más caros que un supermercado convencional, por lo que su clientela era principalmente extranjera. Yo compraba allí aceite de oliva, mozzarella o Nutella, que se convirtió en uno de mis mayores vicios en Afganistán. A raíz de aquel atentado, también me acostumbré a hacer la compra en no más de cinco minutos. Entraba en el supermercado con el corazón en un puño, iba rápidamente a las estanterías donde estaban los productos que quería adquirir, y después me dirigía a la caja a toda velocidad, sin

entretenerme en mirar nada más, con el objetivo de pagar cuanto antes. A medida que pasaron los meses, me tranquilicé e ir al supermercado dejó de ser tan angustioso, pero aun así continué haciendo la compra en un tiempo récord. Por su parte, los Finest se bunkerizaron tras el ataque: colocaron puertas de acero en los accesos de todos los supermercados, y vigilantes de seguridad cacheaban a los clientes antes de entrar.

En casa también aumentamos las medidas de seguridad en 2014, debido al incremento de los atentados. La entrada era una especie de puerta de garaje, que estaba bastante destartalada y era fácil echar abajo. Así que decidimos cambiarla por otra mucho más robusta, de acero, con unas barras pesadas que podían colocarse de través por la parte de dentro para evitar que cediera en caso de que alguien intentara derribarla. Asimismo, instalamos la puerta antigua en el vestíbulo, de manera que a partir de entonces había que pasar por dos puertas para acceder a la casa. En teoría eso aumentaba la seguridad de la vivienda, pero la realidad era que, a pesar de mis insistentes súplicas, los dos porteros que custodiaban la entrada nunca se acordaban de cerrar con llave esa segunda puerta, con lo cual era como si no existiera.

María y yo habíamos ensayado qué hacer si unos terroristas atacaban nuestra casa. El plan inicial era saltar, con ayuda de una escalera de madera, la tapia que separaba nuestro jardín de la casa del vecino, con el objetivo de resguardarnos allí porque él disponía de un búnker subterráneo. Pero descartamos esa opción: era imposible que tuviéramos el temple necesario para saltar la pared en pleno ataque. Otra alternativa que yo había previsto era esconderme en el armario ropero de mi habitación. Lo había probado y cabía perfectamente porque soy delgada y baja. Pero después de que el 28 de marzo los talibanes lanzaran cócteles molotov contra la vivienda de la ONG estadounidense Roots for Peace en Kabul, y la incendiaran, pensé que esa

tampoco era la mejor solución. Al final María y yo optamos por inspeccionar la buhardilla del inmueble: era un espacio enorme, lleno de porquería y con un montón de recovecos para esconderse. Además, tenía una ventana que daba al tejado, por la que siempre podíamos escapar si la situación se complicaba demasiado. Acordamos que ese sería nuestro plan de emergencia, aunque éramos conscientes de que si los terroristas atacaban la casa con un coche bomba, como ya habían hecho en otros atentados, no nos salvaría absolutamente nada. Era mejor no obsesionarse demasiado.

En el tejado había un gran depósito de agua que los porteros rellenaban al menos dos veces al día. Extraían agua de un pozo del jardín con una bomba eléctrica, de modo que, si el depósito no estaba lleno, cuando nos quedábamos sin electricidad, algo que ocurría bastante a menudo en Kabul, también nos quedábamos sin agua. Por suerte disponíamos de un generador que encendíamos en esos casos, y también para tener luz por la noche. Así que se podía decir que éramos unos auténticos privilegiados: la mayoría de la población afgana no tenía ni generador ni pozo.

Otros inconvenientes eran la basura y las aguas fecales. Kabul no disponía de un servicio regular de recogida de basura, a pesar de que en la ciudad vivían unos cinco millones de habitantes. Había contenedores en algunas calles, y de vez en cuando pasaba un camión de recogida, pero en general cada vecino tenía que deshacerse de sus propios residuos como pudiera, lo cual ocasionaba que a menudo se acumularan montañas de desechos. En la capital había niños basureros que pasaban por las casas con un carro tirado por un burro y se llevaban los residuos a cambio de dinero. Esa era la opción que nosotros utilizábamos. ¿Qué hacían esos niños con la basura? No lo sabía nadie, pero posiblemente la tiraban de forma incontrolada en cualquier sitio.

En cuanto a las aguas fecales, nuestra casa, como muchas otras en Kabul, no estaba conectada a un sistema de alcantarillado, de manera que las aguas negras se iban acumulando en una fosa séptica que era necesario vaciar con un camión cuba una vez al año. Lógicamente, nosotros nos encargábamos de contratar los servicios del camión.

En 2014 empezamos a tener ratones en la cocina del apartamento que María, Mario y yo compartíamos en la planta baja. No era la primera vez que aparecían roedores porque la cocina estaba ubicada en el jardín, al lado del cuarto de la leña. Sin embargo, en aquella ocasión no había manera de deshacerse de ellos. Hasta que encontramos el foco del problema: en el armario de debajo del fregadero se había formado un charco enorme de agua pestilente, que no sabíamos de dónde procedía. Un fontanero vino a inspeccionar el desagüe y, tras buscar el origen de aquella inmundicia durante horas, encontró un pozo negro de dimensiones descomunales en el jardín de la casa que ni nosotros ni el propietario de la vivienda sabíamos que existía. Las aguas residuales de la cocina se habían acumulado durante años, y el pozo estaba lleno.

Intentamos vaciarlo con un camión cisterna, pero la inmundicia estaba tan solidificada que fue imposible sacarla. Así que el fontanero propuso una solución más expeditiva: sellar el pozo con cemento y abrir un canal en el jardín desde la cocina hasta el exterior de la casa para que las aguas sucias fueran a parar a la calle. No era la solución más limpia, desde luego, pero sí la más fácil. En casi todas las calles de Kabul hay una zanja a cada lado de la calzada por donde corren las aguas residuales al aire libre. No hay un sistema de cloacas subterráneo. Por lo tanto, se trataba de que nuestras aguas sucias se sumaran a las que ya había fuera.

Aquel pozo negro que encontramos de forma inesperada en mi casa me parecía la mejor metáfora de lo que había ocurrido en Afganistán desde la llegada de las tropas internacionales en 2001. Tras los atentados del 11-S contra las Torres Gemelas de Nueva York, el Pentágono y Washington, Estados Unidos financió y facilitó armas a la denominada Alianza del Norte para que sus hombres lucharan en Afganistán contra los talibanes. Su objetivo era derrocar su régimen y capturar a Osama bin Laden, el terrorista saudí que vivía asilado en el país asiático, supuesto cerebro de los atentados en territorio estadounidense.

La Alianza del Norte estaba formada por las denominadas facciones muyahidines que tomaron las armas en los años ochenta para luchar contra las tropas soviéticas que invadieron Afganistán entre 1979 y 1989. Los muyahidines se hacían llamar «combatientes por la libertad», pero muchos de ellos eran islamistas radicales. A pesar de eso, Washington no tuvo ningún reparo en facilitarles dinero y armas para combatir al entonces enemigo comunista. De esta manera, Afganistán se convirtió en un campo de batalla más de la Guerra Fría. De hecho, en aquella época se idealizaba tanto a los muyahidines que incluso la trama de la mítica película *Rambo III*, estrenada en 1988, se basó en eso. Su protagonista, interpretado por Sylvester Stallone, iba a Afganistán a luchar a su lado contra los soviéticos.

Las tropas soviéticas se retiraron de Afganistán en 1989, pero el conflicto continuó porque los muyahidines empezaron a luchar entre ellos para hacerse con el control del Gobierno de Kabul. Es decir, las facciones que habían combatido unidas se convirtieron en rivales en una guerra sin cuartel en la que bombardeaban zonas civiles, saqueaban viviendas y violaban

mujeres. Cometieron tantas atrocidades que en el sur de Afganistán surgió un movimiento de oposición para pararles los pies. Los correligionarios de este movimiento se hacían llamar talibanes.

Los talibanes eran estudiantes del islam con una ideología tan radical como la de los muyahidines pero con un objetivo claro: querían garantizar un cierto orden y paz en Afganistán, aunque eso supusiera recurrir a métodos expeditivos. De hecho, en las zonas bajo su dominio ejecutaban públicamente a quienes consideraban criminales y cortaban la mano a los supuestos ladrones. Las mujeres tenían prohibido trabajar fuera de casa, con la excusa de que la situación era tan peligrosa a causa de los muyahidines que era mejor que no salieran a la calle. Si lo hacían, debían cubrirse de pies a cabeza con el burka. También les prohibieron estudiar e incluso recibir asistencia médica.

Los talibanes aparecieron por primera vez en la ciudad afgana de Kandahar en 1994 y en tan solo dos años ya controlaban el 90 por ciento de Afganistán. Recibieron apoyo de Pakistán, Arabia Saudí y Emiratos Árabes Unidos, tres países aliados de Estados Unidos. Washington no los respaldó abiertamente, pero tampoco condenó su llegada al poder e incluso se planteó hacer negocios con ellos. Quería exportar gas de la ex república soviética de Turkmenistán, frontera con Afganistán por el noroeste, y uno de los países con la mayor reserva de gas del mundo. Hasta los años ochenta ese gas se exportaba básicamente a Rusia, pero con la desintegración de la Unión Soviética ya era posible venderlo a cualquier país del mundo. La manera más fácil de exportarlo era construir un gasoducto que cruzara Afganistán de norte a sur y conectara Turkmenistán con Pakistán, donde hay salida al mar. El proyecto resultó inviable durante la época de los muyahidines, por la guerra abierta en Afganistán, pero parecía factible con la

«paz» impuesta por los talibanes. De esta manera, la Alianza del Norte se fue debilitando poco a poco y quedó acorralada en una pequeña zona del norte del país hasta que los atentados del 11-S cambiaron totalmente el tablero internacional e hicieron que Estados Unidos les pidiera ayuda.

Washington se negó de entrada a enviar tropas a Afganistán y prefirió recurrir a la Alianza del Norte para derrocar al régimen talibán, porque temía que el país se convirtiera en un cementerio para sus militares. No conocía su complicada orografía, ni había planificado operaciones bélicas allí, así que un despliegue de efectivos sobre el terreno era un suicidio. Por eso se limitó a bombardear lugares estratégicos, mientras los hombres de la Alianza del Norte avanzaban hacia Kabul. Y dio resultado: el régimen talibán se desmoronó en cuestión de semanas y los muyahidines entraron triunfantes en la capital afgana a mediados de noviembre de 2001.

Unas semanas más tarde, el 5 de diciembre, la ONU convocó una conferencia internacional en la ciudad alemana de Bonn para consensuar la formación de un gobierno interino en Afganistán y poner los cimientos del nuevo Estado. En esa conferencia, la Alianza del Norte reclamó ser recompensada por la ayuda prestada y exigió formar parte del nuevo ejecutivo. Así los muyahidines pasaron a encabezar algunos de los principales ministerios, a pesar de su pasado de crímenes de guerra. Por ejemplo, el Ministerio de Defensa, el de Interior, el de Asuntos Exteriores o el de Educación fueron a parar a sus manos.

Los muyahidines también tomaron el control del Parlamento y otras instituciones del Estado, y se enriquecieron con las ayudas millonarias que la comunidad internacional envió a Afganistán para la reconstrucción del país tras más de dos décadas de guerra. De esta manera, bajo el nuevo Gobierno afgano se fue abriendo un pozo negro de dimensiones

descomunales, como la fosa séptica encontrada en mi casa. En 2014 había tanta corrupción, inseguridad e impunidad en Afganistán que las instituciones ya no tenían ningún crédito y los atentados de los talibanes se hicieron habituales. La comunidad internacional, en vez de resolver el problema de fondo y apartar del poder a todos esos criminales de guerra, optó por la solución más fácil: retirar a la mayoría de sus tropas y vender la idea de que Afganistán ya era un país democrático y estable. De la misma manera que nosotros habíamos hecho en la cocina de mi casa: desviando las aguas pestilentes a la calle y sellando el pozo negro como si allí no hubiera pasado nada.

Las elecciones

En ese intento por aparentar que todo iba bien en Afganistán, en 2014 se celebraron elecciones presidenciales. Se trataba de unos comicios históricos porque Hamid Karzai, el único presidente que había tenido el país desde la caída del régimen talibán en 2001, no se presentaba a las votaciones ya que había completado los dos mandatos electos que marcaba la Constitución afgana. Los principales candidatos para sustituirlo eran Ashraf Ghani, que había sido su ministro de Finanzas y había trabajado para el Banco Mundial, y Abdullah Abdullah, que también había formado parte del Gobierno de Karzai como titular de Exteriores entre 2001 y 2006. Además, en 2009 se había presentado a las presidenciales, unas elecciones marcadas por el fraude en las que quedó segundo.

En las presidenciales del 2014 Ghani y Abdullah recurrieron a la misma carta que Karzai había jugado en los comicios de 2004 y 2009: se aliaron con los muyahidines de la Alianza del Norte para ganarse el favor de sus correligionarios y neutralizar

una posible oposición armada. Ghani incluso formó candidatura con uno de los señores de la guerra más detestados de Afganistán, el uzbeko Abdul Rashid Dostum, sobre el cual pesan serias acusaciones de crímenes de guerra. De hecho, su participación en los comicios generó tal escándalo que el propio Dostum se vio obligado a emitir un comunicado pidiendo perdón por los «errores» del pasado, o sea, por los crímenes de guerra. Sorprendentemente Estados Unidos, la Unión Europea y el resto de los países con tropas en Afganistán dieron por buena esta tímida disculpa y aceptaron que Dostum concurriera a las elecciones, que financiaba la comunidad internacional. Se escudaban en que Dostum y el resto de los líderes muyahidines no habían sido juzgados por un tribunal y, por lo tanto, no se les podía considerar culpables ni ser excluidos de la carrera electoral, cuando la razón por la cual no se les había juzgado era que en 2007 los propios muyahidines aprobaron una ley de amnistía en el Parlamento afgano que les daba inmunidad e impedía que fueran procesados en Afganistán.

Poco antes de las elecciones, entrevisté a Abdullah Abdullah y a Ashraf Ghani. Abdullah me pareció una persona insulsa, que repetía como un papagayo un discurso aprendido y que vivía de los réditos de haber sido la mano derecha de uno de los principales líderes de la Alianza del Norte, Ahmad Sha Masud. En cambio, Ghani me sorprendió: era un auténtico erudito, con un don de palabra extraordinario que me dejó fuera de juego en cuanto le planteé una cuestión incómoda. «¿Cómo pretende poner fin a la impunidad en Afganistán si ha incluido a Dostum en su candidatura?», le pregunté. Su respuesta fue la siguiente: «Usted debería ser la última persona en Afganistán que me hiciera esa pregunta. Su país, España, escogió la amnesia [durante la transición], y miró hacia el futuro en vez de hacia el pasado. Si España encontró su

camino, nosotros también lo encontraremos».

Las presidenciales se celebraron en dos vueltas, y sin un censo electoral, a pesar de que en las votaciones del 2009 los observadores internacionales ya habían advertido que la falta de censo había facilitado el fraude. Una semana antes de la primera vuelta, viajé a Lashkar Gah, la capital de la peligrosa provincia de Helmand, en el sur del país, y yo misma comprobé cómo funcionaba la compra de votos. Allí cada día decenas de mujeres acudían a la oficina de la Comisión Independiente Electoral, que organizaba las elecciones, para obtener el carné de voto necesario para participar en los comicios. Llamaba la atención que la mayoría de ellas eran viudas o campesinas analfabetas, con manos de piel agrietada y ropas humildes, que nunca habían visto una papeleta en su vida, pero que ahora de repente querían votar. El carné que se les expedía era una tarjeta plastificada que indicaba su nombre de pila, el de su padre y abuelo, su año de nacimiento y lugar de residencia, pero no incluía una fotografía que las identificara. En consecuencia, el carné lo podía utilizar cualquiera. Era evidente que solo lo querían para venderlo y obtener un beneficio económico.

Se calculaba que en Afganistán había unos doce millones de electores. Sin embargo, el número de carnés de voto en circulación superaba los veinte millones. Además, en 2014 la presencia de observadores internacionales en las votaciones fue casi nula. Muchos de ellos se alojaban en el Serena y fueron evacuados del país en cuanto los talibanes atacaron el hotel dos semanas antes de la primera vuelta de los comicios. A falta de observadores internacionales, los candidatos contrataron a miles de interventores para intentar que las elecciones fueran mínimamente limpias, pero no lo consiguieron.

A mediados de agosto, cuando ya hacía dos meses que se había celebrado la segunda vuelta, continuaba el recuento de

votos en cuatro hangares a las afueras de Kabul. El recuento ya no solo consistía en saber cuántos votos tenía cada candidato, sino también en detectar cuáles eran falsos. En el interior de los hangares apenas había luz, hacía un calor asfixiante y decenas de personas discutían alrededor de mesas de plástico donde se extendían montones de papeletas desordenadas. Los interventores de Ashraf Ghani y Abdullah Abdullah incluso llegaban a las manos, porque los votos que para unos eran falsos para los otros no lo eran.

Finalmente el 21 de septiembre Ghani fue proclamado ganador de las presidenciales en una rueda de prensa en la que la Comisión Independiente Electoral no especificó ni por cuántos votos ni por qué porcentaje había superado a su rival en las urnas. «Anunciaremos los resultados electorales en un futuro cercano, pero no puedo especificar cuándo», fue lo único que dijo el portavoz de la comisión, Noor Mohammad Noor, dejándonos a los periodistas de piedra tras meses esperando los resultados y sin permitir que hiciéramos ni una sola pregunta.

En los días previos, el entonces secretario de Estado de la Casa Blanca John Kerry había hablado reiteradamente con Ghani y Abdullah. Se deduce que la intención era presionarlos para que pusieran fin a la crisis electoral y aceptaran una solución pactada. La solución propuesta por Estados Unidos era que formaran un gobierno de unidad, a pesar de que no se podían ver ni en pintura. Ghani sería el nuevo presidente de Afganistán y Abdullah una especie de primer ministro, aunque la Constitución afgana no preveía ese cargo en el Gobierno. Además, los dos candidatos se repartirían las carteras del ejecutivo. Nadie sabía qué eficacia ni operatividad tendría ese nuevo Gobierno, pero al menos se daba carpetazo a unas elecciones que habían sido un caos y habían costado 230 millones de euros a la comunidad internacional y centenares de muertos a la población afgana.

En abril de 2014 María empezó a encontrarse mal. Decía que tenía vértigo y se pasaba los días tumbada en la cama. Al principio me preocupé, pero después, debo confesar, empecé a pensar que era cuento. Como ya he mencionado, María se encargaba de gestionar los proyectos de ASDHA, la ONG nuestra para ayudar a las mujeres afganas. Durante este tiempo, la asociación se había profesionalizado hasta gestionar un presupuesto medio de unos 250.000 euros anuales. Teníamos seis personas contratadas, una oficina en Barcelona y otra en Kabul. María se encargaba de la sede en la capital afgana. Su trabajo era fundamental para que todo el engranaje funcionara.

La examinaron en el hospital militar que las tropas internacionales tenían en Kabul y también en el que los militares españoles gestionaban en la ciudad de Herat. En ninguno de los dos supieron concretar qué le pasaba. También la visitaron en otros centros, e incluso viajó a Dubái para someterse a una infinidad de pruebas médicas, pero los facultativos no encontraron ninguna razón para su vértigo. Solo un médico de origen indio que tenía consulta en Kabul se arriesgó a hacer un diagnóstico inequívoco: según él, lo único que María sufría era estrés. Pura tensión por vivir en un país donde había que estar siempre en alerta. Ella consideró el diagnóstico una tomadura de pelo, pero el tiempo le dio la razón al médico indio. Cuando María regresó a España en junio de 2014, tras más de un año en Afganistán, empezó a mejorar paulatinamente después de varias sesiones de terapia. Yo achaqué esa recuperación «milagrosa» a que lo de María no eran más que pamplinas, hasta que poco después yo misma caí en el pozo. Entonces empecé a ver las cosas de otra manera.

«Yo no tengo depresión», le dije al psiquiatra llorando a

lágrima viva, totalmente descompuesta, en su consulta. Si de veras no tenía depresión, lo disimulaba muy mal. Como cada verano, en julio de 2014 regresé a Barcelona para tomarme unas semanas de vacaciones. Siempre que volvía a España tras meses en Afganistán me sentía especialmente cansada, sobre todo durante los primeros días, hasta el punto de que a las diez de la noche ya me quedaba dormida en cualquier parte a pesar de que siempre he sido supernoctámbula. Yo achacaba ese cansancio repentino a la diferencia de altura entre Barcelona y Kabul, porque la capital afgana está a 1.800 metros. Era normal que mi cuerpo notara el cambio. Pero ese verano el cansancio me superó por completo. Parecía que me hubiera atropellado un camión: solo quería dormir, me dolía la espalda, sentía la cabeza pesada y no me apetecía ver a nadie ni hacer nada. El psiquiatra y mi psicóloga no tuvieron ninguna duda: según ellos, había caído en depresión.

En ese momento yo ya era consciente de que mi etapa en Afganistán llegaba a su fin: el interés informativo por el país se había reducido drásticamente con la retirada gradual de las tropas internacionales, y cada vez me resultaba más difícil vender noticias. Además, *El Mundo* empezó a ponerme pegas para viajar por Afganistán en busca de información, después de que uno de sus mejores reporteros, Javier Espinosa, fuera secuestrado en Siria en septiembre de 2013 junto al fotógrafo Ricard Garcia Vilanova y al periodista de *El Periódico de Catalunya* Marc Marginedas. En el diario temían que a mí me pudiera pasar lo mismo, y preferían que me quedara siempre en Kabul, aunque eso fuera en detrimento de mi trabajo.

Así que, sin poder viajar y con dificultades para vender artículos, parecía evidente que no podría continuar ganándome la vida en Afganistán. El problema es que no tenía una alternativa laboral: ni disponía de un contrato, ni sabía qué otro país podía tener suficiente interés informativo para residir

ahí y sobrevivir como periodista. De repente sentí que los casi ocho años de trabajo como reportera en Afganistán no me garantizaban una salida laboral ni una estabilidad económica en una profesión tan volátil y precaria como el periodismo. En definitiva, creía que había sacrificado mi vida personal para nada.

El psiquiatra me recetó antidepresivos. «Si usted se encuentra deprimido y/o sufre un trastorno de ansiedad, puede en algunas ocasiones tener pensamientos de autolesión o suicidio. Estos podrían ir aumentando al tomar antidepresivos por primera vez, puesto que todos estos medicamentos requieren un tiempo para empezar a hacer efecto», decía el prospecto del fármaco. Y añadía: «Puede ser de ayuda para usted decirle a un pariente o a un amigo cercano que usted está deprimido o que tiene un trastorno de ansiedad y pedirle que lea este prospecto». En cambio, yo apenas dije a nadie que tenía depresión. Solo lo sabían mi hermano, María y otra amiga que estaba en Barcelona. Sin embargo, a principios de agosto regresé a Kabul. Mi intención era hacer las maletas y volver a España definitivamente al cabo de pocas semanas.

Mi retirada

La unidad de cuidados intensivos del hospital de Kandahar, en el sur de Afganistán, era una habitación normal y corriente, salvo porque había un respirador y un par de monitores para controlar las constantes vitales de los pacientes. Fui allí en septiembre de 2014 con el periodista catalán Josep Morell y el cámara madrileño Fernando Martín, que se habían trasladado a Afganistán para filmar un documental sobre la situación del país, en el que yo era la protagonista. Mi testimonio servía como hilo conductor para mostrar el drama humanitario en

Afganistán, pero también la situación de las mujeres, la actuación de las tropas internacionales o la violación de los derechos humanos.

Al principio el documental me hizo ilusión, aunque me preocupaba que dos personas me siguieran a todas partes con una cámara durante dos semanas. Digamos que no era la mejor manera de pasar desapercibida en Afganistán en un momento en el que lo más conveniente para mi propia seguridad era que nadie me identificara como extranjera. De hecho, les pedí que viajaran con un equipo de filmación mínimo y que, una vez instalados, se intentaran mimetizar con la población. Para Fernando fue relativamente fácil porque es de tez morena y cabello oscuro, así que vistiendo un *shalwar kameez,* es decir, el tradicional blusón ancho y pantalones bombachos que llevan los musulmanes, pasaba por un auténtico afgano. En cambio Josep lo tenía más complicado porque se notaba a la legua que era extranjero, pero se metió tanto en el papel de alguien local que llamaba menos la atención que el propio Fernando.

Cuando llegó el momento de filmar el documental, yo no tenía ningunas ganas. Solo me apetecía seguir durmiendo todo el día, tumbada en la cama. Así que tuve que actuar por partida doble: para hacer de hilo conductor en el documental, pero también para simular que estaba en mis mejores condiciones. Sin embargo, en el hospital de Kandahar ya no pude continuar con el teatro.

En la unidad de cuidados intensivos había media docena de pacientes, entre ellos un niño de unos ocho años a quien los médicos empezaron a hacer todo tipo de maniobras. Le conectaron a no sé cuántos aparatos y le hicieron compresiones torácicas para reanimarlo, pero las constantes vitales del pequeño no respondían y yo no podía dar crédito de que Josep, Fernando y yo estuviéramos plantados allí delante presenciando esa escena tan dantesca. Al final los médicos se

dieron por vencidos, cubrieron el cuerpo del pequeño con una sábana y pidieron al celador que se lo llevara en una camilla. No sé cómo se llamaba el niño, ni cuántos años tenía exactamente, ni de qué había muerto, pero aquel episodio me impresionó sobremanera. Yo había visto muertos y personas malheridas en Afganistán, pero se puede decir que aquello fue la gota que colmó el vaso y no pude evitar romper a llorar. Era la primera vez que me desmoronaba en público. Estaba harta, ya no podía más.

El documental se estrenó en TV3 el 27 de enero de 2015 con gran éxito de audiencia. Josep lo tituló *Vestida de negre*, en referencia a la indumentaria de color negro que yo siempre vestía en Afganistán. A él y a Fernando les tengo que agradecer que fueran tan respetuosos, que no me filmaran mientras lloraba y obviaran ese episodio en el documental. «Estar aquí y ver las cosas que he visto me han cambiado como persona. En algunos aspectos para mejor, en otros quizá para peor», declaro yo en *Vestida de negre*. En lo que había cambiado para peor es en que me había vuelto muy pesimista: creía que Afganistán no tenía ningún futuro.

Lo preparé todo para que mi partida del país fuera lo más ordenada posible. Ya había trasladado a España parte de mis pertenencias, y lo que me quedaba en Kabul solo tenía que regalarlo o destruirlo, como hice con varias baterías viejas de ordenador, que no convenía que se quedaran por allí perdidas. Los talibanes utilizaban cualquier componente para fabricar artefactos explosivos.

Regalé buena parte de mi ropa a Shakiba, la mujer que teníamos contratada para que limpiara la casa. Y distribuí entre ella, los porteros y mi traductor los muebles y los electrodomésticos del apartamento. Repartí mis pertenencias, que se podrían llevar en cuanto yo saliera por la puerta de la casa para tomar el vuelo de vuelta a Barcelona, según sus

necesidades. Por ejemplo, Mama Jan, que era uno de los porteros, se quedaría con la nevera porque él no tenía una en casa. El otro portero, Jalad Khan, con mi cama porque su familia era muy numerosa; Jawad, mi traductor, con el armario ropero…

Pasé mis últimas noches en Kabul en vela, escuchando una y otra vez un disco de Ahmad Zahir, considerado el Elvis Presley de Afganistán. Sus canciones se caracterizan por ser tristes y melancólicas. La música me hundía cada vez más y me hacía sentir como una traidora. Yo, que había criticado insistentemente que las tropas internacionales se retiraran de Afganistán y dejaran el país a su suerte, ahora hacía lo mismo. Me iba en un momento en que la presencia de periodistas extranjeros era más importante que nunca en un país donde cada vez había más corrupción e impunidad.

La noche antes de mi partida decidí tomarme un tranquilizante para intentar conciliar el sueño. Lo que no sabía era que con esa pastilla dormiría tan profundo que a la mañana siguiente no oiría el despertador. Me desveló un gran bullicio dentro de casa: los dos porteros, el traductor y la mujer de la limpieza charlaban y reían animadamente mientras esperaban a que me fuera para llevarse los muebles y los electrodomésticos. Salí tan aprisa en dirección al aeropuerto que casi no me despedí de ellos. Conseguí coger el vuelo en el último minuto. Tras siete años y ocho meses en Afganistán, me marché sin apenas decir adiós.

Año 2015
Crisis de refugiados

No podía soportar el intenso olor a quemado que desprendía su cuerpo, hasta el punto de que me daban arcadas cuando entraba en la habitación del hospital donde Fátima yacía moribunda. Tenía veinticinco años, se había intentado suicidar quemándose a lo bonzo y llevaba casi un mes ingresada en el hospital de Herat, en el noroeste de Afganistán. A pesar de eso, sorprendentemente seguía consciente e incluso podía hablar, aunque le era imposible moverse. Su hermana Anisa, que pasaba con ella noche y día, intentaba reconfortarla secándole el sudor de la frente con un pañuelo o haciéndole masajes en los pies. Los médicos afirmaban que la joven no tenía cura: tarde o temprano moriría. Tenía el 72 por ciento del cuerpo quemado con heridas de tercer grado. Era imposible salvarla, y aún menos en un hospital de Afganistán.

Suena mal decirlo, pero yo deseaba que Fátima muriera cuanto antes, para así ahorrarme el mal trago de verla cada día. Iba al hospital a diario con el fotoperiodista Gervasio Sánchez para documentar su caso y el de cualquier otra mujer ingresada por la misma razón. Nuestro objetivo era publicar un libro y hacer una exposición fotográfica que pusieran en evidencia la violencia brutal que sufren las mujeres en Afganistán. Una violencia que suele empezar en el seno de la propia familia y que es endémica: existe independientemente de que los talibanes estén o no en el poder.

Afganistán es el único país del mundo donde se suicidan más mujeres que hombres. Al menos así lo corroboraban datos del 2012 del Ministerio afgano de Salud Pública. Aquel año dos mil quinientas mujeres se quitaron la vida, una cifra que equivalía

al 95 por ciento de los suicidios registrados en el país. La mayoría eran chicas jóvenes de entre catorce y veintiún años que sufrían malos tratos en casa o a las que obligaban a casarse con un hombre al que no querían. Estos eran los principales motivos para suicidarse. Los médicos explicaban que el procedimiento era siempre el mismo: se rociaban la barriga con gasolina y se prendían fuego. Muchas veces no pretendían morir, sino solo llamar la atención sobre su situación desesperada, pero el fuego se extendía con tal rapidez por el vestido y el cabello que en pocos segundos quedaban envueltas en llamas. Cuando la familia las llevaba al hospital solía decir que habían tenido un accidente en la cocina. Sin embargo, los médicos detectaban al instante si se trataba de un caso de suicidio: las chicas que habían intentado quitarse la vida quemándose a lo bonzo llegaban al centro con un fuerte olor a gasolina.

Fátima admitía haberse tirado gasolina encima. «Pero solo un vasito pequeño», musitaba, dando a entender que no sabía cómo se le había ido de las manos. En su caso, su suegra era la persona que le hacía la vida imposible. Convivía con ella en una misma casa desde que la habían casado a la fuerza con solo quince años. Su matrimonio fue por *badal*, así es como se llama en Afganistán el intercambio de mujeres entre familias. Es decir, a Fátima la habían casado con un hombre a cambio de que la hermana de él contrajera matrimonio con el hermano de Fátima. De esta manera los hijos y las hijas de ambas familias quedaban desposados. Poco importaba lo que quisieran ellos.

«Pues si tienes ganas de vomitar, ponte colonia en la nariz y así no notarás el olor a quemado», me dijo Gervasio, que resolvía las pegas que yo le ponía para ir al hospital cada día con esa facilidad. Me admiraba su forma de trabajar: tenía soluciones para todo, y una paciencia y un tesón infinitos. De él fue la idea de hacer el proyecto de mujeres afganas que tantos

dolores de cabeza nos dio, y la de pasarnos jornadas enteras en el hospital esperando a que llegara un caso de suicidio para poder fotografiarlo. Y la de regresar un día y otro, y otro, hasta conseguirlo. Él nunca tiraba la toalla. Por eso era el autor de trabajos de referencia sobre las víctimas de minas antipersona o las desapariciones forzadas y se había convertido en uno de los periodistas españoles más reconocidos en la cobertura de conflictos.

Tardamos casi seis años en hacer la exposición y el libro, del 2009 al 2014, y en total recopilamos los testimonios de doscientas mujeres: chicas que se habían intentado suicidar quemándose vivas, pero también otras que lo habían probado ingiriendo matarratas o grandes dosis de medicamentos. O adolescentes a las que habían obligado a casarse con un anciano, o que estaban encerradas en un correccional por huir de casa para evitar un matrimonio forzado; o diputadas del Parlamento que sufrían malos tratos por parte de sus maridos. Todos eran casos tremebundos. Todas ellas vivían en las grandes ciudades de Afganistán: Kabul, Herat, Mazar-e-Sharif y Kandahar, donde en teoría la situación de la mujer era mejor que en el resto del país porque había más recursos y más ayuda extranjera. Gervasio tomaba las fotografías y yo me encargaba de hacer las entrevistas y de obtener los permisos y consentimientos necesarios.

Fátima murió el 16 de mayo de 2012, cuando ni Gervasio ni yo estábamos en el hospital. Su hermana me llamó llorando de madrugada para darme la fatal noticia. Inauguramos la exposición en el Palau Robert de Barcelona casi dos años y medio más tarde, el 28 de octubre de 2014, cuando yo ya había regresado definitivamente de Afganistán. La visitaron cincuenta mil personas, fue todo un éxito, y después la llevamos a otras ciudades de España. En noviembre de ese mismo año también presentamos el libro *Mujeres. Afganistán* en Barcelona, Madrid,

Zaragoza y Vitoria, a pesar de que en esos momentos yo ya me sentía totalmente sobrepasada: hablar sobre Afganistán me alteraba, y a la mínima rompía a llorar. Mi amiga María, que se encargó de la relación con la prensa para la promoción de ambos trabajos, alucinaba con mi capacidad de actuación: cuando tenía que presentar el libro o conceder entrevistas a los medios de comunicación me mostraba lúcida y enérgica, pero en cuanto los focos se retiraban me volvía a sumir en la depresión más profunda. Me convertí en una actriz excelente y aprendí a disimular mis emociones en público.

Sentía tristeza y rabia. Recuerdo que a finales de 2014, cuando viajaba en metro por Barcelona, observaba una a una a las personas que iban en mi vagón y me irritaba verlas tan tranquilas, ensimismadas mirando el móvil. No entendía su inacción e indiferencia frente a todas las desgracias que sucedían en Afganistán y en tantas otras partes del mundo. Pensaba que la situación era tan crítica que la humanidad debía movilizarse de forma inmediata para evitar toda aquella tragedia. También entonces empecé a tener alucinaciones: veía ratones por todas partes. Un papel tirado en el suelo o una paloma que se posara en cualquier lugar me sobresaltaban, pues pensaba que eran roedores.

Corresponsal en Roma

En diciembre de 2014 me visitó una nueva psiquiatra, que no dudó en aumentarme la medicación. También me recomendó que cogiera la baja y no me fuera a vivir a Italia, al menos de momento. «Allí no tienes un entorno social y a ti lo que te conviene ahora es estar acompañada de familia y amistades», argumentó. Sin embargo, yo hice todo lo contrario. Tras regresar de Afganistán, *El Mundo* me ofreció establecerme en

Italia como periodista freelance en sustitución de la corresponsal en plantilla que el periódico había tenido hasta entonces en Roma, Irene Hernández Velasco. Con la crisis económica, el diario no podía disponer de una periodista con contrato y prefería recurrir a una autónoma a quien pagar por artículo publicado, porque le salía mucho más barato.

A mí en ese momento no me motivaba ir a Italia. De hecho, era tal mi desgana que no me apetecía ir a ninguna parte. *El Mundo* me había propuesto otras dos alternativas: establecerme en Marruecos o en México, pero estos dos países tampoco me convencían. No quería volver a vivir en un país musulmán, ni en uno con tan altos índices de violencia. Otra opción era trabajar en Cuba, en un momento en que Fidel Castro estaba en la última etapa de su vida y se esperaban cambios en la isla. Pero las autoridades cubanas nunca me concedieron un visado de periodista para establecerme allí.

Así que finalmente, en febrero de 2015, me instalé en Roma. Una de las ventajas era que estaba a menos de dos horas de vuelo de Barcelona y me sería fácil regresar para mis citas con la psiquiatra y la psicóloga. Lo que tenía claro es que no podía pedir una baja y quedarme en Barcelona, como me recomendaba la psiquiatra, pues sin contrato ni cobertura laboral me arriesgaba a que *El Mundo* prescindiera de mí en cuanto quisiera reincorporarme. De hecho, antes de irme a la capital italiana, el diario me redujo hasta un 70 por ciento las tarifas que me pagaba por artículo: de abonarme 255 euros brutos por página entera publicada en la edición impresa pasó a pagarme solo 70. Las tarifas de los artículos publicados solo en la web eran aún más irrisorias: 35 euros brutos. «Ahora ya no trabajarás en un país en conflicto», argumentaron para aplicarme una reducción tan drástica, que emocionalmente aún me desestabilizó más. A partir de entonces ni siquiera sabía si podría ganarme la vida.

En Roma no conocía a nadie, no estaba familiarizada con la ciudad y no tenía ni idea de la situación sociopolítica de Italia en aquel momento. Debía empezar de cero. Tampoco sabía hablar italiano, que es un idioma que parece idéntico al español cuando pides una birra en un bar, pero que me resultaba incomprensible cuando tenía que seguir una rueda de prensa del primer ministro. Me instalé en un apartamento minúsculo, aunque muy luminoso, de la via Furio Camillo, ubicada relativamente cerca del centro de la capital en metro, y lo primero que hice fue apuntarme a un curso intensivo de italiano. Empecé a disfrutar de pequeños placeres que en Afganistán eran imposibles, como por ejemplo caminar sola por la calle de noche tranquilamente, ponerme minifalda, ir al supermercado con un carrito de la compra y entretenerme el tiempo que quisiera mirando los productos de las estanterías, o ver películas por internet. En Afganistán la velocidad de internet era tan lenta que era inviable ver vídeos en *streaming*.

El 24 de marzo de 2015 un vuelo de pasajeros de la compañía alemana Germanwings que había despegado de Barcelona en dirección a Düsseldorf se estrelló en los Alpes franceses con ciento cincuenta personas a bordo. Aunque el incidente había tenido lugar en territorio francés, *El Mundo* me pidió que me trasladara hasta allí para informar sobre la tragedia. También envió a dos reporteros más: la periodista Irene Hernández Velasco, que entonces estaba radicada en París, y el fotógrafo Carlos García Pozo, que viajó desde Madrid. Los tres nos encontramos en Seyne-les-Alpes, un pequeño pueblo de mil quinientos habitantes del sudeste de Francia, situado a pocos kilómetros del siniestro.

Allí se concentraron decenas de periodistas venidos de todo el mundo, a pesar de que el lugar de la tragedia era de difícil acceso incluso para los equipos de rescate, y no se nos permitía hablar con los familiares de las víctimas. Se puede decir que lo

único que podíamos hacer allí era recoger alguna que otra declaración de las autoridades competentes y observar desde la distancia cómo los helicópteros de rescate despegaban y aterrizaban en un prado a las afueras del pueblo, algo que me pareció un sinsentido. ¿Qué hacíamos allí tantos periodistas si apenas teníamos acceso a la información, cuando en Afganistán había tanto que explicar y casi ningún reportero?

Horas más tarde el entonces presidente español, Mariano Rajoy, el presidente francés, François Hollande, y la canciller alemana, Angela Merkel, también se trasladaron a Seyne-les-Alpes, y llegaron todavía más periodistas. Eso me perturbó aún más. ¿De verdad nuestra función era ser los altavoces de los políticos? Llamé al periódico fuera de mí, quejándome del espectáculo mediático, y suplicando que por favor me dejaran regresar a Italia. Estar allí me generaba tal ansiedad y decepción por la profesión que no podía soportarlo. En *El Mundo* no entendieron ni mi petición, ni las razones que esgrimí, pero aceptaron que volviera a Roma.

Rajoy, Hollande y Merkel hicieron una declaración institucional en la que dijeron lo que era obvio: que trabajarían juntos para aclarar por qué el avión se había precipitado fatalmente contra los Alpes. Cuando se descubrió que la causa del siniestro había sido que el copiloto sufría una depresión y estrelló el avión intencionadamente con el objetivo de suicidarse, decidí mantener en secreto la depresión que yo misma atravesaba, para que nadie, y aún menos *El Mundo*, pudiera poner en duda mis capacidades.

FARKHUNDA MALIKZADA

Pocos días antes del accidente de Germanwings había sucedido algo en Afganistán que me había conmocionado por completo.

El 19 de marzo, una turba de hombres enfurecidos lincharon y quemaron viva a una joven afgana de veintisiete años en Kabul, a plena luz del día. Se llamaba Farkhunda Malikzada, y la acusaban de haber quemado un ejemplar del Corán. Los agresores la patearon, la golpearon brutalmente con piedras y palos, la arrastraron por el suelo e incluso la atropellaron con un vehículo en pleno centro de la ciudad, ante la presencia de todo el mundo, incluida la policía, que no hizo nada para evitar el linchamiento. Después tiraron el cuerpo al cauce seco del río Kabul, que pasa por la capital afgana. Lo cubrieron con cartones y maderas y le prendieron fuego, mientras decenas de curiosos miraban y filmaban la macabra escena con sus teléfonos móviles.

Las imágenes corrieron como la pólvora por las redes sociales, al principio sin ningún tipo de censura ni filtro. Eran espeluznantes: se veía a Farkhunda con la cara ensangrentada intentando huir de una muchedumbre que gritaba «¡Matadla, matadla!». La salvajada duró más de una hora. ¿Cómo era posible que las tropas extranjeras que continuaban en Kabul no hubieran intervenido, y que la policía afgana en la que la comunidad internacional había invertido tanto dinero y tantas horas de instrucción también se quedara de brazos cruzados? Farkhunda vestía de negro riguroso, al estilo islámico, y no pude evitar identificarme con ella. Yo también vestía así cuando vivía en el país, pensando que ese atuendo hacía que la gente me tratara con más respeto y deferencia. Pero, tras aquello, se hizo evidente que la barbarie más absoluta era posible, y que la vida de una mujer no valía nada en ese país.

El linchamiento de Farkhunda generó tal conmoción que marcó un antes y un después en Afganistán. A dos semanas de su muerte continuaban las protestas en el país, incluso en provincias conservadoras como Nangarhar, Kunduz o Baghlan, para exigir que su asesinato no quedara impune. En Kabul se

erigió un monumento en su memoria, justo en el lugar donde los agresores prendieron fuego a su cuerpo. Asimismo, el Gobierno afgano constituyó una comisión de investigación, que llegó a la conclusión de que Farkhunda nunca quemó el libro sagrado del islam. Un hombre la había acusado falsamente.

En total detuvieron a cuarenta y nueve personas, entre ellas diecinueve policías, por el asesinato. Inicialmente cuatro de los acusados fueron condenados a la pena capital, ocho más a dieciséis años de cárcel y once policías a un año de cárcel por incumplimiento del deber. Lo que significa que no tuvieron que ingresar en prisión y pudieron continuar patrullando en la misma zona de Kabul donde habían linchado a Farkhunda. Además, meses más tarde, el Tribunal de Apelaciones revocó la pena de muerte de los principales culpables y los condenó a entre diez y veinte años de cárcel, demostrando una vez más que los tribunales en Afganistán no servían para hacer justicia y eran fácilmente sobornables. De hecho, poco después los padres y los hermanos de Farkhunda se vieron obligados a huir del país por las amenazas de muerte que recibieron de los familiares de los condenados.

Bacha posh

Azita Rafat también deseaba huir de Afganistán, pero no quería hacerlo sin sus cuatro hijas. Ella era mi mejor amiga en Kabul, la persona que siempre me daba consejos y me proporcionaba contactos cuando tenía que desplazarme por el país para hacer algún reportaje. Azita aparece en mi libro *Afganistán, crónica de una ficción*, con el nombre ficticio de Roya Ahmad, ya que en ese momento ella todavía vivía en el país y lo que yo explicaba podía ponerla en peligro. Había sido diputada en el Parlamento afgano en la primera legislatura, tras la caída del régimen

talibán, pero perdió el escaño en las elecciones legislativas de 2010, que una vez más estuvieron marcadas por el fraude. Era una persona con estudios universitarios, que hablaba seis idiomas y que era respetada y reconocida a nivel público. Sin embargo, en su casa vivía un auténtico infierno.

Su padre la había forzado a casarse a los veinte años con un primo hermano suyo, un hombre analfabeto que la maltrataba y que ya tenía una primera esposa y una hija. Paradójicamente el padre era una persona muy instruida, había sido profesor de Historia en la universidad durante veinticuatro años y siempre había abogado por la educación, pero consideró que, con los talibanes en el poder, su hija estaría más protegida casada que soltera. Era a finales de los años noventa.

Azita recuerda haber llorado sin parar durante doce días cuando supo que debía casarse con aquel hombre. Sus llantos, sin embargo, no sirvieron de nada porque el matrimonio al final se consumó. «¿Crees que fuiste violada en tu noche de bodas?», le pregunté en una ocasión. Y su respuesta fue: «Cualquier relación sexual en contra de tu voluntad es una violación. Pero es una violación contra la que no puedes levantar la voz, porque en Afganistán la gente no considera que te estén violando si la persona que lo hace es tu marido y quiere mantener relaciones sexuales. Como esposa, debes obedecer y aceptar. A mí me han violado toda la vida».

La primera mujer de su marido, a la que también habían casado a la fuerza, la recibió en casa tras la celebración de la boda con las siguientes palabras: «Estoy contenta, porque ahora tú sufrirás más que yo». Y así fue: Azita se convirtió en el blanco de toda la violencia. Su marido la despreciaba, la golpeaba y le ponía condiciones para trabajar fuera de casa. Por ejemplo, siendo ya parlamentaria, debía pagarle una mensualidad y encargarse de todos los gastos del hogar para que él, a cambio, la dejara ejercer su profesión. Su imagen

pública, sin embargo, era la de una mujer afortunada y exitosa.

Su marido estaba obsesionado con tener un hijo varón. Para la mayoría de las familias afganas, los hijos tienen más valor que las hijas porque el hombre es quien tiene derecho a la herencia y se queda en el hogar paterno cuando se casa. Las hijas, en cambio, se van a vivir con la familia política. Azita había tenido cuatro hijas y dos abortos, y no tenía ninguna intención de volver a quedarse embarazada, pero su marido la coaccionaba para engendrar el ansiado hijo.

Así que, acosada y desesperada, decidió recurrir a una práctica que en Afganistán se conoce con el nombre de *bacha posh*, que en darí significa «vestido como un niño» y que consiste en vestir a una niña como si fuera un varón. Las familias pobres recurren a esta práctica cuando solo tienen hijas, con el objetivo de enviarlas a mendigar por la calle sin temor a que puedan abusar de ellas. Otras lo hacen por pura superstición: creen que, si visten a sus hijas como a un niño, Dios se apiadará de ellas para concebir un varón en el siguiente embarazo.

Azita convirtió a su hija pequeña de cuatro años en un hijo, simplemente para sacarse a su marido de encima. Le cortó el pelo, la vistió de niño y le cambió el nombre. Se llamaba Mahnush, pero a partir de entonces la niña utilizaría el nombre masculino de Mehram. Cuando vi a la pequeña transformada me quedé estupefacta. En cambio, la criatura estaba encantada de la vida con su nueva identidad. Ahora la dejaban salir a la calle a jugar o la enviaban a hacer recados, algo que sus hermanas no tenían permitido. Sorprendentemente el marido de Azita quedó conforme con aquella metamorfosis, y paseaba por la calle orgulloso con su hijo ficticio cogido de la mano.

En 2015, la periodista sueca Jenny Nordberg publicó el libro *The Underground Girls of Kabul*, que años más tarde fue editado en español con el título *Las niñas clandestinas de Kabul*, donde

hablaba de la práctica del *bacha posh* y explicaba el caso de la hija de Azita, entre otros ejemplos. Por eso, cuando presentó el libro en Estocolmo en marzo de ese año, invitó a Azita al acto.

«Es imposible que te den visados para tus cuatro hijas», le dije a Azita mientras preparaba el viaje. Porque eso es lo que ella pretendía: ir a Suecia con sus cuatro hijas y no volver a Afganistán nunca más. Era su oportunidad de oro para huir del país en un momento en que, además, tres de sus hijas ya eran adolescentes y por lo tanto su marido podía casarlas a la fuerza. Azita no podía permitir de ninguna manera que sus hijas vivieran su mismo calvario.

Para mi sorpresa, la embajada sueca les concedió los visados. Azita viajó con sus cuatro hijas a Estocolmo y una pequeña maleta de equipaje de mano, fingiendo que solo estarían allí unos días. Tras la presentación del libro, solicitó asilo y no regresó a Afganistán. Su marido entró en cólera: tiró a la basura algunas de sus pertenencias y las de sus hijas, y vendió el resto. Su hija pequeña, que llegó a Suecia vestida de niño, al cabo de unas semanas quiso volver a vestirse con ropa femenina porque, argumentó, en ese país las niñas y los niños tenían las mismas libertades.

Avalancha de refugiados

Azita tuvo suerte de llegar a Suecia en marzo porque, pocos meses más tarde, la avalancha de refugiados que intentaron entrar en Europa fue histórica. De hecho, 2015 se conoce como el año de la crisis de los refugiados. Según cifras del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR), más de un millón de personas llegaron a Grecia e Italia arriesgando su vida en embarcaciones precarias a través del mar Mediterráneo. En total 3.735 personas murieron en el

intento, entre ellas el niño sirio de tres años Alan Kurdi, cuyo cuerpo sin vida apareció en una playa de Turquía después de ser arrastrado por las olas hasta la orilla. Su imagen se convirtió en el símbolo de aquella tragedia humana y conmocionó a la opinión pública. La mayoría de los refugiados que intentaban llegar a Europa eran sirios, pero la segunda nacionalidad más numerosa era la afgana.

Los afganos huían de su país porque vivir allí era imposible. La Administración estaba prácticamente paralizada. La solución salomónica de Estados Unidos de crear un gobierno de unidad nacional en el que los dos candidatos rivales en las elecciones, Ashraf Ghani y Abdullah Abdullah, se repartieran el poder a partes iguales dio como resultado un desgobierno total.

La retirada de la mayoría de las tropas internacionales también incrementó la inestabilidad del país. Por una parte, tuvo un gran impacto económico, ya que su presencia generaba miles de lugares de trabajo, y, por otra, dio lugar a una inseguridad aún mayor. Hasta entonces habían existido dos operaciones militares extranjeras en Afganistán: la denominada «Operación Libertad Duradera», liderada por Estados Unidos, que tenía como objetivo capturar vivo o muerto a Osama bin Laden y acabar con el movimiento talibán y otros grupos terroristas que operaran en el país, y la conocida como «Fuerza Internacional de Asistencia para la Seguridad» (ISAF en sus siglas en inglés), formada por tropas de los países de la OTAN. Esta última contaba con el mandato de las Naciones Unidas y tenía como finalidad mejorar la seguridad en el país, pero también contribuir a su reconstrucción y a la capacitación de las fuerzas de seguridad afganas. La ISAF llegó a tener más de 130.000 efectivos desplegados en Afganistán en 2011 y, aun así, nunca consiguió controlar todo el territorio ni garantizar su seguridad al cien por cien.

En 2015, Estados Unidos sustituyó la «Operación Libertad

Duradera» por otra de nombre también muy poético, «Centinela de la Libertad», cuyos objetivos eran igual de violentos: detener y matar terroristas. Por su parte, la OTAN disolvió la ISAF e inició una nueva operación llamada «Apoyo Decidido», que, como su nombre indica, se limitaba a apoyar a las fuerzas de seguridad afganas con instrucción y asesoramiento. Eso significó en la práctica que las tropas internacionales dejaron de patrullar o de tener puestos de vigilancia. De hecho, quedaron tan pocos militares extranjeros en el país, apenas una fuerza de quince mil efectivos, que se puede decir que su contribución era casi simbólica.

La policía y el ejército afganos tuvieron entonces que asumir la seguridad de todo el territorio, o al menos intentarlo. La primera consecuencia de eso fue que las tropas internacionales disminuyeron drásticamente sus bajas –en 2014 murieron 75 militares extranjeros en Afganistán y en 2015 la cifra se redujo a 26–, mientras que las de las fuerzas afganas se multiplicaron exponencialmente. Y la segunda fue que los talibanes empezaron a ganar terreno. En septiembre llegaron a ocupar la ciudad de Kunduz, en el norte del país, que hasta entonces había sido una zona relativamente segura. Esta ocupación supuso un shock total para la opinión pública local porque era la primera vez, desde el inicio de la intervención internacional en 2001, que los talibanes ganaban poder más allá de las zonas rurales y, además, lo hacían en una provincia especialmente alejada de su área tradicional de influencia en el sur del país.

La captura de Kunduz llevó a las fuerzas especiales y a las fuerzas aéreas de Estados Unidos a intervenir a la desesperada para intentar recuperar la ciudad. Actuaron de forma indiscriminada, hasta el punto de que, el 3 de octubre de ese año, bombardearon deliberadamente un hospital de Médicos sin Fronteras porque, según justificaron después, les habían informado de la presencia de talibanes en el centro. Pero en el

hospital solo había pacientes y personal médico que estuvieron atrapados allí, como en una ratonera. Murieron 24 personas y 37 resultaron heridas. El hospital quedó completamente destruido. Aquel impactante episodio puso de manifiesto que en la guerra afgana no se respetaba nada, ni tan siquiera las ONG ni los centros sanitarios.

Los talibanes, entonces, no solo ganaron terreno, sino que multiplicaron sus atentados terroristas en todo el país. Además, un nuevo actor irrumpió en Afganistán: el denominado Estado Islámico Provincia de Jorasán (ISIS-K), una organización filial del grupo terrorista casi homónimo que operaba en Siria e Irak y que se nutría básicamente de talibanes desencantados. Debía su nombre a una región histórica de la antigua Persia, el Gran Jorasán, que en tiempos antiguos englobaba el actual territorio afgano, pero también el de Irán, Tayikistán, Turkmenistán y Uzbekistán. El ISIS-K era rival de los talibanes, pero su estrategia también consistía en cometer atentados.

Así que si el 2014 ya había sido un año funesto en Afganistán, el 2015 lo fue todavía más. La población afgana no se sentía segura en ninguna parte, y no veía ningún futuro económico ni político. Por ese motivo todos los que podían huir del país lo hacían.

Atentado contra la embajada española

Mientras viví en Afganistán, estuve suscrita a un servicio de alertas permanente que me avisaba con un correo electrónico de cualquier ataque que tuviera lugar en Kabul o en las inmediaciones. Cuando me trasladé a vivir a Roma en 2015, mantuve el servicio activo para continuar informada de lo que sucedía en la capital afgana. Cada día recibía diversos e-mails: los atentados eran constantes, sobre todo contra las fuerzas de

seguridad afganas o instituciones gubernamentales, pero irremediablemente también se llevaban por delante la vida de civiles.

En la tarde del 11 de diciembre de ese año recibí un correo electrónico que me advertía de un ataque en el barrio de Shirpur, sin especificar cuál era el objetivo. Shirpur se conocía popularmente en Kabul como el barrio de los señores de la guerra, porque algunos comandantes militares usurparon sus terrenos tras la caída del primer régimen talibán en 2001 y construyeron allí sus mansiones, a cuál más fastuosa. Por ejemplo, allí vivía el por entonces vicepresidente del Gobierno afgano, el temido señor de la guerra Abdul Rashid Dostum, pero también estaba la embajada española.

Cuando recibí el e-mail de alerta, lo primero que pensé es que el objetivo más fácil en ese barrio era, sin duda, la legación española. A diferencia de las embajadas de otros países de la Unión Europea, como Italia, Alemania o Francia, la embajada española estaba fuera de la denominada zona verde, el área de seguridad de Kabul donde solo podían transitar vehículos autorizados y cuyos accesos estaban controlados por agentes de policía. En concreto, se ubicaba en la calle principal de Shirpur, que era una de las más transitadas de la ciudad, donde cada día se formaban largas colas de vehículos a la hora de la salida del trabajo.

La embajada constaba de tres casas donde vivía y trabajaba el personal. Los funcionarios a duras penas salían de allí, por razones de seguridad. Los tres edificios estaban rodeados por un doble muro de unos tres metros de alto, pero estaban tan cerca de la calle que eran un objetivo muy fácil de atacar con un coche bomba que explotara justo delante del recinto. Y eso es lo que ocurrió el 11 de diciembre: un terrorista suicida detonó un coche bomba delante de la embajada, destruyó la puerta de entrada y dañó gravemente los edificios.

La onda expansiva levantó las baldosas del suelo de alguna de las casas y arrancó de cuajo la barandilla de una terraza. Además inutilizó el sistema eléctrico, por lo que el personal de la legación se quedó a oscuras sin saber cuántos terroristas los atacaban ni dónde estaban. La agonía duró horas. El ataque se prolongó hasta bien entrada la noche y dos policías españoles y cinco afganos murieron. Más tarde los talibanes reivindicaron el atentado.

Aquella noche en España, el entonces presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, compareció ante los medios de comunicación para dar explicaciones sobre lo ocurrido: «Todos podemos ser objetivo del terrorismo, pero en este caso España no lo era. No era contra nosotros», declaró atribuyendo el asalto a una simple casualidad. Según él y su ejecutivo, los terroristas habían atentado contra una casa de huéspedes para extranjeros que había justo al lado de la embajada y, en el fragor de la batalla, la sede diplomática también había resultado afectada. Pero conociendo el barrio de Shirpur y las características de la legación, era difícil creer esa versión.

Además, se da la circunstancia de que dos meses antes de aquel terrible atentado coincidí en una conferencia en Mallorca con uno de los funcionarios de la embajada. Ya entonces me expresó su temor por la localización del edificio y la escasa protección del recinto. Una de las pocas medidas que se habían tomado para mejorar la seguridad fue tapiar todas las ventanas de la casa donde vivía la mayoría del personal, lo cual dejaba las estancias sin luz natural, con el objetivo de reducir los efectos de la onda expansiva en caso de un atentado. «Parece que vivamos en una cueva», ironizó el funcionario entonces, intentando quitar hierro a un asunto que era un secreto a voces y para nada baladí. La única persona que no vivía en la embajada era el propio embajador, Emilio Pérez de Ágreda, cuya residencia, como la de todos sus predecesores, era una

casa de dos plantas que sí estaba dentro de la denominada zona verde de Kabul.

Tras el atentado, los familiares de algunos de los trabajadores de la sede diplomática asesinados presentaron una querella contra el embajador y su entonces número dos, Oriol Solá, por homicidio imprudente por la falta de medidas de seguridad en la legación. El juez de la Audiencia Nacional Santiago Pedraz admitió la querella a trámite, pero después la acabó archivando, a pesar de que la Dirección Nacional de Policía hizo un informe que decía literalmente: «Un factor determinante para que los terroristas decidiesen atacar la embajada de España fue la inadecuada ubicación de la misma en un entorno desprovisto de un cinturón exterior de seguridad». El magistrado llegó a la conclusión de que no podía recaer ninguna responsabilidad criminal en el embajador ni en su número dos, porque no eran expertos en seguridad y, en consecuencia, «carecían de los debidos conocimientos». Sin embargo, de lo que no había duda era de que el Gobierno español había vuelto a mentir a la opinión pública sobre lo que ocurría en Afganistán.

Mi propio atentado

Con la aparición del Estado Islámico, los atentados se extendieron a los países de la Unión Europea. El 13 de noviembre de 2015 unos terroristas suicidas irrumpieron en la sala de conciertos Bataclan, en París, en plena actuación de un grupo de hard rock, y abrieron fuego indiscriminadamente contra el público. Durante los primeros segundos, los espectadores pensaron que el ruido de los disparos formaba parte del espectáculo, pero después se percataron de que en realidad se trataba de un ataque. Los terroristas remataron en

el suelo a algunos de los asistentes. Otros fueron retenidos como rehenes hasta que la policía consiguió liberarlos. Paralelamente, diversos bares y restaurantes de la capital francesa también fueron tiroteados. En total 130 personas murieron y 415 resultaron heridas. Aquella cadena de atentados conmocionó a Francia y al mundo entero. Nunca había pasado algo así, tan bestia, en el corazón de Europa.

Desde Roma, yo viví aquello como si fuera la cosa más normal del mundo. No entendía que la gente se alarmara tanto por algo que en Afganistán era el pan de cada día. Tampoco comprendía que en Europa nos rasgáramos las vestiduras con lo que había ocurrido en París si después cerrábamos las puertas a los refugiados afganos, que, si de algo huían, era de atentados así.

De hecho, casi un año antes, el 11 de diciembre de 2014, había tenido lugar un ataque muy similar al de la sala Bataclan en un teatro de Kabul. Un terrorista se inmoló en el Centro Cultural Francés de la capital afgana durante la representación de una obra de teatro que pretendía precisamente condenar los atentados suicidas. Como en París, los espectadores en Kabul también creyeron que la gran deflagración que interrumpió la función y dejó el escenario completamente a oscuras formaba parte de la actuación. Hasta que empezaron a oír los llantos y los gritos de las personas que habían quedado malheridas en las primeras filas del patio de butacas.

Por aquel entonces yo estaba muy afectada por la depresión y creía que, si en Europa hubiéramos mostrado un cierto interés por lo que ocurría en Afganistán, los atentados en París no nos habrían sorprendido tanto, porque los terroristas en la sala Bataclan repitieron el mismo patrón que en Kabul. ¿Por qué los muertos franceses eran más importantes que los afganos?, me preguntaba. En ese momento, la disociación con mi entorno era tal que llegué a pensar que los europeos nos

merecíamos, en cierta manera, sufrir atentados como los de la sala Bataclan para darnos cuenta del calvario por el que pasaban los afganos al vivir en un país en guerra.

A finales del 2015, yo ya no tomaba antidepresivos. Tras una leve mejoría, la psiquiatra me había retirado toda la medicación, aunque yo continuaba con la misma sensación que tenía desde que me marché de Afganistán. Me imaginaba nadando contracorriente en un río, sin poder evitar que el agua me arrastrara y me cubriera, a pesar de mis esfuerzos por mantenerme a flote. También seguía cansada, con constante dolor de cabeza y de espalda, y sin ganas de hacer nada. Escribir artículos me suponía un esfuerzo sobrehumano. Me pasaba horas delante de la pantalla del ordenador en blanco, angustiada, sin ser capaz de redactar ni un solo párrafo. Necesitaba descansar cada dos por tres: tumbarme y dormir.

En septiembre de 2015 viajé a Madrid para suplicar una vez más al director de *El Mundo*, que por aquel entonces era David Jiménez, que me subiera las tarifas. Con lo que me pagaban por artículo, apenas conseguía ganar unos 700 u 800 euros al mes. El diario me sufragaba el coste del alquiler del piso en Roma, pero yo tenía que pagar la conexión a internet, la electricidad, el agua, el gas, la comunidad, el transporte público, además de la cuota de autónomos, que ya ascendía a más de 300 euros, y las sesiones de terapia para salir de la depresión, con las que se me iban unos 500 euros más al mes. No podía continuar así, no me salían los números.

Me reuní con David en dos ocasiones. Él había sido corresponsal en Asia, había hecho algún viaje puntual a Afganistán y años más tarde escribió el libro *El director*. Yo lo admiraba como reportero y pensé que, como él también había trabajado en lugares difíciles, sería capaz de ponerse en mi piel y deducir que yo sufría estrés postraumático después de vivir tantos años en Afganistán. En la primera reunión me prometió

que intentaría mejorar mis condiciones económicas. En la segunda me dijo sin ningún tipo de empatía: «Te subiré las tarifas cuando demuestres que puedes ser tan buena periodista en Italia como en Afganistán». Para mí esa fue la confirmación de que era una fracasada y de que había perdido mis capacidades como periodista.

Si ya no sabía escribir ni tenía olfato periodístico, ¿qué me quedaba? Había malgastado en Afganistán los años en los que podría haber sido madre. En Roma tenía pocas amistades y, en mi estado depresivo, me era imposible encontrar pareja. Encima no ganaba lo suficiente para mantenerme. Me sentía sola, incomprendida, y creía que mi vida no tenía ningún sentido. Desde que había llegado a la capital italiana pensaba que solo había una manera de acabar con ese sufrimiento, y era suicidándome. A finales de 2015 esa idea se volvió una obsesión.

Cuando alguien visita Roma, admira su valioso patrimonio arqueológico y arquitectónico, en cambio yo solo me fijaba en los lugares donde me podía quitar la vida, como los puentes que cruzan el río Tíber, que recorre la capital italiana de norte a sur. Otro lugar ideal era la galería del piso donde vivía de alquiler. Estaba en una novena planta que daba a un patio interior cuyas vistas me recordaban las de la película *La ventana indiscreta*, de Alfred Hitchcock. Pensé muchas veces en tirarme desde allí. Solo me frenaba una cosa: hacer sufrir a mi familia aún más con los trámites de repatriación del cadáver. Me sentía culpable. Si me quería suicidar, lo tenía que hacer en Barcelona.

Regresé a Barcelona por Navidad. Aunque ya no tomaba medicación, tenía una caja de antidepresivos que me había sobrado del tratamiento. Se trataba de ingerir el máximo número de pastillas y esperar a que hicieran efecto. En Afganistán lo había visto infinidad de veces, todas esas

jovencitas que se atiborraban a medicamentos o que ingerían matarratas para acabar con su vida porque no querían que sus familias las casaran a la fuerza con un hombre que no deseaban. Cuando las encontraban, las trasladaban de urgencia al hospital para que les hicieran un lavado de estómago. Lo fundamental es que a mí no me llevaran a ningún hospital o que, si lo hacían, ya fuera demasiado tarde y los médicos no pudieran hacer nada para salvarme la vida.

Temía que mis padres fueran las primeras personas que encontraran mi cadáver si me suicidaba en mi casa. No les podía hacer eso: ya eran demasiado mayores y habían sufrido demasiado durante los años que viví en Afganistán. Tampoco deseaba que mi hermano tuviera ese shock. Entendí entonces por qué la gente se suicida tirándose a la vía del metro: al menos allí los que te ven morir son desconocidos.

Planeé hartarme a antidepresivos el día que regresara a Roma. Iría al aeropuerto de Barcelona, pero no tomaría el vuelo de regreso a la capital italiana. Me encerraría en un lavabo público a esperar que las pastillas me provocaran un paro cardiaco o alguna otra disfunción física. Así nadie me echaría de menos, porque todo el mundo pensaría que estaba en el avión, y mi familia tampoco tendría el trauma de encontrar mi cuerpo sin vida.

Cuando faltaban pocas horas para el viaje, no podía dejar de llorar. Quería morir para no seguir sufriendo, pero me sentía culpable por el disgusto que le iba a dar a mis seres queridos. Llamé sollozando a mi terapeuta, Sonia Vicente, suplicándole que por favor me ayudara. Sonia insistió en lo que ya me había dicho mil veces: ella me podía ayudar, pero primero debía volver a un psiquiatra para que me medicara porque era imposible hacer terapia conmigo en el estado en el que estaba.

Cuando llegó el momento de embarcar, no cogí el vuelo de regreso a Roma. Me quedé en tierra en Barcelona.

Año 2016
Secuelas psicológicas

Me negaba a tomar más antidepresivos. El hecho de medicarme me hacía sentir que estaba loca. Tampoco me apetecía volver a explicarle mi vida a otro psiquiatra. Sin embargo, allí estaba yo, en la consulta de Enric Armengou respondiendo a todas las preguntas con monosílabos. La verdad es que no se lo puse nada fácil. «Por tu postura corporal, es evidente que tienes una depresión», me dijo. Su comentario me descolocó. ¿Cómo era esa postura que tanto denotaba mi estado?, pensé mientras me erguía. Por primera vez lo escuché con atención.

Como era de esperar, el doctor Armengou me recetó antidepresivos, además de medicamentos contra la migraña. Debía tomar un total de cinco pastillas al día, que al principio me mareaban y me dejaban medio zombi. Aplacé mi regreso a Roma más de una semana. A mis colegas en Italia les expliqué que tenía gastroenteritis y que por eso había retrasado la vuelta, una versión que creyeron a pies juntillas porque adelgacé muchísimo durante la Navidad. Mi desgana general había llegado a tal punto que apenas comía.

Las pastillas me estabilizaron un poco, y las sesiones con Sonia Vicente, mi terapeuta, empezaron a surtir cierto efecto. Aun así yo seguía cansada, desmotivada, y me sentía incomprendida. En ocasiones también perdía los papeles. Eso es lo que ocurrió el 10 de marzo de 2016. Ese día el expresidente español José María Aznar viajó a Italia para conceder el Premio de la Libertad de la fundación que preside, FAES, al escritor conservador Giovanni Sartori. La ceremonia de entrega, para la cual convocaron a todos los corresponsales españoles de la capital italiana, se celebró en la embajada de España. Eso ya

me desconcertó: ¿por qué el premio de una fundación privada se entregaba en la embajada? ¿Y qué interés informativo tenía?

Ir allá me generaba ansiedad. No soportaba estar en un lugar tan fastuoso, que tanto contrastaba con la pobreza de Afganistán, y que además se financiaba con dinero público. A pesar de eso acudí al acto. En ese momento, en España se discutía la formación de un nuevo gobierno tras unas elecciones generales en las que Mariano Rajoy, del Partido Popular, había ganado en número de votos y escaños, pero no disponía de suficientes apoyos para ser investido presidente. Interpreté que la embajada nos convocaba porque Aznar quería hacer algún anuncio al respecto. Pero no fue así.

De hecho, al llegar a la legación, la responsable de prensa de FAES nos advirtió que el expresidente no haría declaraciones. ¿Entonces por qué convocaban a los periodistas? Me indigné. Me sentía utilizada y decepcionada, una vez más, con la profesión. No entendía que hubiera tantos periodistas para informar sobre un premio que no interesaba a nadie y en cambio no hubiera ni uno solo en Afganistán, donde había tanto que contar.

Al final del acto, los periodistas nos acercamos a Aznar para sonsacarle alguna declaración, a pesar de que la responsable de prensa de la Fundación insistía en que no lo molestáramos. «¿Por qué una fundación privada entrega un premio en la embajada, que es un lugar público?», pregunté. Aznar me miró fijamente pero no contestó. Así que volví a formular la misma pregunta, pero más alto. El expresidente siguió callado. «He dicho que ¿por qué una fundación privada entrega un premio en la embajada, que es un lugar público?», insistí por tercera vez ya a voz en grito y a pocos centímetros de Aznar.

Se hizo un silencio sepulcral, y me convertí en el blanco de todas las miradas. Alguien, no recuerdo quién, me apartó de allí. Entonces me di cuenta de que tal vez me había excedido.

«¿Qué clase de periodista eres?», me recriminaron desde el equipo de José María Aznar. Más tarde, el Partido Popular contactó con la dirección de *El Mundo* en Madrid para quejarse de mi comportamiento.

Para mi sorpresa, ningún otro periodista me apoyó ni pidió explicaciones al expresidente. Nadie excepto Gonzalo Sánchez, de la Agencia EFE, que se acercó a mí y, con el sarcasmo que le caracteriza, me dijo para tranquilizarme y quitarle hierro al asunto: «Pensaba que le ibas a tirar el zapato». Hacía alusión al conocido episodio que tuvo lugar en Bagdad en 2008, cuando un periodista iraquí le lanzó los zapatos al entonces presidente de Estados Unidos George W. Bush durante una rueda de prensa.

El 18 de julio de 2016, un afgano de diecisiete años que había llegado solo a Alemania solicitando asilo agredió con un hacha y un cuchillo a cuatro pasajeros que viajaban en un tren regional cerca de la localidad bávara de Wurzburgo, en el sur del país. Cuatro personas resultaron heridas. Al día siguiente, el Estado Islámico (ISIS) reivindicó el ataque, aunque el ministro de Interior de Baviera, Joachim Herrmann, aseguró que no había indicios de que aquel joven tuviera una relación directa con el grupo terrorista. Cuando leí la noticia, pensé que aquel afgano sufría un trastorno mental.

En agosto de 2014 viajé a la provincia de Nimroz, situada en el vértice sudoeste de Afganistán. Es la única del país que hace frontera con Pakistán e Irán, y en Afganistán Nimroz se considera «el fin del mundo». Está a más de un día de viaje en coche de Kabul, y por aquel entonces solo había un vuelo comercial a la semana a Zaranj, su capital. Allí, sin embargo, se concentraban centenares de jóvenes afganos que se alojaban en pensiones de mala muerte durante semanas mientras esperaban la posibilidad de cruzar la frontera. Aspiraban a llegar a Europa y tener un futuro mejor.

Viajaban amontonados en la parte trasera de furgonetas tipo *pickup* tras pagar una gran cantidad de dinero. Primero, cruzaban la frontera entre Afganistán y Pakistán y se adentraban en el desierto, donde los vehículos apenas podían avanzar y las tormentas de arena dificultaban la visibilidad. Desde el desierto, sin embargo, era más fácil cruzar la frontera con Irán y burlar la vigilancia. Una vez en Irán, recorrían el país de sur a norte hasta llegar a Turquía. Desde allí intentaban entrar en territorio europeo a través de Bulgaria o Grecia.

Si aquel chico que había agredido a los pasajeros del tren había hecho todo ese recorrido él solo siendo tan joven, no era de extrañar que perdiera el juicio. Si me pasaba a mí, que únicamente había sido una observadora de la guerra en Afganistán, ¿cómo no iba a ocurrirles a los refugiados afganos, que habían perdido a seres queridos en el conflicto y habían dejado atrás a su familia, su casa y su país? Lo que me sorprendía es que nadie en Europa pensara en las graves secuelas psicológicas que arrastraban todas esas personas.

Regreso a Kabul

En septiembre de 2016 se conmemoraba el quince aniversario de los atentados del 11-S contra Estados Unidos, y Afganistán se convirtió de nuevo en foco de atención mediática. El periodista Pedro García Cuartango era el nuevo director de *El Mundo*, el tercero en poco más de dos años. Cuartango sí valoraba mi trabajo y se sorprendió mucho al ver las tarifas ridículas que cobraba. «Es una vergüenza», dijo, y se comprometió a hablar con el director financiero para que revisaran mis honorarios. De entrada aceptó que trabajara unas semanas en Afganistán, para cubrir la efeméride del 11-S, y pidió que me pagaran unas tarifas más altas por esos artículos.

Aunque la propuesta de regresar a Kabul se la hice yo, debo confesar que no tenía ningunas ganas. Lo cierto es que me convenía para sanear mi malograda economía doméstica, y consideraba que era importante estar allí en una fecha tan señalada. También me serviría para ponerme a prueba y constatar hasta qué punto Afganistán me alteraba. Además de los antidepresivos y los medicamentos contra la migraña, mi psiquiatra me recetó ansiolíticos. Temía que el viaje me desestabilizara.

Aterricé en Kabul el 8 de agosto de 2016. El día antes, dos profesores de la Universidad Americana de Kabul, una institución privada de gran prestigio, fueron secuestrados en la avenida Darulaman, una de las principales arterias de la ciudad. Se trataba del estadounidense Kevin King y el australiano Timothy Weeks. Al anochecer, pocos minutos después de que salieran del campus universitario, unos hombres con kaláshnikov y vestidos con el uniforme de la policía afgana pararon su vehículo como si fuera un control de seguridad rutinario. Los secuestradores rompieron el cristal de una de las ventanillas del coche y se los llevaron.

King y Weeks estuvieron secuestrados durante más de tres años. Fueron liberados en noviembre de 2019, después de que el Gobierno afgano anunciara un acuerdo con los talibanes para intercambiar a los dos extranjeros por tres combatientes islamistas encarcelados.

Tal vez esa era la principal diferencia en Afganistán respecto a cuando yo me marché en el 2014: el secuestro de extranjeros y empresarios afganos adinerados se había disparado, y la criminalidad iba en aumento. Los robos y los atracos, antes insólitos, se habían convertido en algo habitual con el declive económico del país a raíz de la retirada de la mayoría de las tropas internacionales.

La inseguridad creciente hizo que se fueran más extranjeros.

Se produjo una auténtica desbandada. En consecuencia, el alquiler de la vivienda en Kabul, antes por las nubes, cayó en picado. El alquiler de mi casa era de 1.800 dólares al mes, un precio desorbitado con el que el propietario se aprovechaba de los extranjeros, y que solo era asumible porque cuatro o cinco personas compartíamos la vivienda. En cambio, cuando regresé a Kabul en 2016, el alquiler había bajado a 250 dólares mensuales. Courtney, la periodista estadounidense cuyo novio había muerto en un atentado contra el hotel Serena, seguía viviendo en la casa, ahora completamente sola. Todavía estaba muy afectada por el asesinato de su pareja, pero al menos ya no lloraba día y noche, ni se emborrachaba. Por cierto, mi antiguo apartamento estaba irreconocible. Los afganos que trabajaban para mí se lo llevaron todo. Incluso arrancaron los muebles de la cocina.

Los edificios oficiales en Kabul se fortificaron aún más. Llamaba particularmente la atención la sede de la Comisión Independiente de Derechos Humanos en Afganistán (AIHRC), que aquel año parecía una base militar en lugar de las oficinas del máximo organismo que debía velar por los derechos humanos en el país. Habían levantado un nuevo muro de protección y colocado varias garitas de vigilancia en torno al edificio. El personal, además, tenía dificultades para trabajar. La presidenta de la AIHRC, Sima Samar, se quejaba de que la inseguridad en Afganistán les impedía llegar a buena parte del territorio para recopilar datos sobre la violación de los derechos humanos. Por ejemplo, en 2015 solo habían tenido acceso al 58 por ciento del país. Y este problema, sostenía Samar, a la comunidad internacional le traía sin cuidado.

El norte de Afganistán, antes relativamente seguro, se había convertido en una zona crítica. Milicias del vicepresidente del Gobierno afgano Abdul Rashid Dostum y efectivos de Jamiate-Islami, el partido del primer ministro Abdullah Abdullah, se

lanzaron a hacer la guerra por su cuenta contra los talibanes. Los atropellos contra la población civil se multiplicaron y en Kabul se acumularon los expedientes con fotografías de casas quemadas y cuerpos amoratados, mutilados o con un tiro en la cabeza.

«No sé qué voy a hacer con todos estos expedientes, ni dónde los voy a llevar», se lamentaba el abogado Lal Gul, a quien entrevisté en la capital afgana. Su oficina también estaba fuertemente protegida, con rejas e infinidad de cámaras de vigilancia. Lal Gul era consciente de que se la jugaba denunciando a miembros del Gobierno afgano y de que era imposible ganar un juicio contra ellos, pues el ejecutivo contaba con el apoyo de la comunidad internacional, y la corrupción caracterizaba a los tribunales afganos.

En julio de 2016, la organización Human Rights Watch también denunció al vicepresidente Dostum por los excesos de sus milicias contra población civil indefensa de la etnia pastún. Unos meses antes, Estados Unidos había solicitado diplomáticamente al Gobierno afgano que suspendiera el viaje que Dostum tenía previsto hacer a Nueva York y Washington. Una cosa era que el país norteamericano financiara un gobierno formado por criminales de guerra, y otra que uno de esos criminales pisara territorio estadounidense.

La sensación en el país era de «sálvese quien pueda». Nadie confiaba en las autoridades ni en que la situación mejorara. Los funcionarios arramblaban con todo lo que podían, y quien tenía la posibilidad de huir de Afganistán lo hacía. «¿Conoces a algún extranjero que me pueda dar trabajo?», era la pregunta recurrente de los afganos durante los años que viví en Kabul. En cambio, en 2016, la petición era otra: «¿Cómo puedo conseguir un visado?». Todo el mundo quería irse a Europa, Estados Unidos o Canadá.

A las pocas horas de aterrizar en Kabul, yo también me

quería ir. Me estresaban los helicópteros militares que sobrevolaban la ciudad a baja altura provocando un ruido ensordecedor, las aguas residuales que corrían por las calles al aire libre con un olor pestilente y que solo hubiera desgracias y más desgracias. No podía entender cómo había vivido allí tantos años.

Del todo a la nada

En el hospital de Herat había una veintena de pacientes con quemaduras graves que necesitaban una operación urgente. Era el hospital donde Gervasio Sánchez y yo habíamos pasado tantas horas esperando a mujeres que se habían intentado suicidar quemándose a lo bonzo para documentar sus casos. En 2016 el hospital continuaba abierto, pero faltaba todo tipo de material médico y habían clausurado el quirófano. Era imposible operar sin bisturís ni agujas, sin una luz y una camilla en condiciones. «Desde hace una semana ni siquiera tenemos vendas», me dijo la doctora Saida Sadeq.

Entre los que esperaban para operarse, había un niño de dos años. Tenía las manos en carne viva. Lo habían vendado de la cabeza a las rodillas para que las heridas no se le infectaran. Parecía una momia. Verlo rompía el corazón. «Se quemó con aceite hace once días. Dio un manotazo a la sartén y se volcó», me explicó la madre, una joven de veinte años que lo consolaba acunándolo en los brazos. Pero el pequeño no dejaba de berrear. Su llanto resonaba en buena parte del hospital. El aceite le cayó encima como si fuera el agua de una ducha.

La unidad de quemados del hospital de Herat era la única que existía en Afganistán. Había otra en Kabul, pero apenas tenía media docena de camas. La de Herat se había construido en 2007 como uno de los buques insignia de la ayuda

internacional. La Unión Europea y la ONG francesa HumaniTerra la financiaron, y se decía que había costado dos millones de dólares. Sin embargo, con el paso de los años, aquel buque había empezado a ir a la deriva por falta de mantenimiento. Y en 2016 estaba a punto de naufragar.

«Estuvo muy bien todo lo que se hizo. Pero hemos pasado del todo a la nada», lamentaba el doctor Jamal Afshar, director de la unidad de quemados. Y tenía toda la razón. Afganistán había pasado de ser un país prioritario para la comunidad internacional en cuestión de ayudas a casi no figurar en la agenda mundial. El hospital de Herat era un ejemplo pero, por desgracia, había muchos más.

La disminución de la ayuda internacional también disparó el número de bebés con parálisis cerebral por complicaciones en el parto. En muchas ocasiones la criatura no venía en la posición correcta, o la pelvis de una madre aún adolescente no era suficientemente ancha para dar a luz. Eso hacía que los pequeños sufrieran lesiones irreparables en el momento de nacer. Las cifras eran de espanto. El Comité Internacional de la Cruz Roja (CICR) atendió 1.882 menores con parálisis cerebral en Kabul en 2012. En 2015 el número ascendió a 2.910. Y en 2016 el responsable del programa ortopédico de esta organización en Afganistán, el fisioterapeuta italiano Alberto Cairo, calculaba que se superarían de largo los tres mil casos. Eran los pacientes que crecían más cada año, por encima de las víctimas de minas antipersona o los heridos de bala.

Alberto Cairo es toda una institución en Afganistán. Tanto es así que el Gobierno de Ashraf Ghani le concedió la nacionalidad en 2019. Trabaja de forma ininterrumpida en el país desde agosto de 1989. Por lo tanto ha vivido bajo el régimen soviético de Mohammad Najibulah, el de los muyahidines, el de los talibanes y el Gobierno apoyado por la comunidad internacional. Habla darí perfectamente y trabaja a

diario con los afganos codo con codo. Nadie conoce la sociedad afgana como él. Por eso cada vez que viajo al país voy a verlo al centro ortopédico del CICR para que me ponga al día sobre la situación local y para echarme unas risas. Porque si una cosa no le falta a Alberto es sentido del humor. Se ríe hasta de su propia sombra. Supongo que por eso ha sido capaz de aguantar tanto tiempo en ese rincón del mundo.

En 2016 Alberto me presentó a una fisioterapeuta española, Lorena Enebral, que había sido destinada a Afganistán por el CICR para tratar precisamente a bebés con parálisis cerebral. Lorena era especialista en discapacidad infantil y tan dicharachera como Alberto. Coincidí con ella pocas horas, pero enseguida me contagió su entusiasmo. Le encantaban los niños y ayudar, y tenía una ternura especial para tratar a los pequeños.

Lorena fue asesinada el 11 de septiembre de 2017 en el centro de rehabilitación del CICR en Mazar-e-Sharif, en el norte del país. Tenía treinta y ocho años. Uno de sus pacientes le disparó a bocajarro con una pistola que escondió en la silla de ruedas en la que estaba postrado. Sin mediar palabra y sin razón alguna. «Era un chico de veinte años a quien tratábamos desde que tenía uno. ¿Tú crees que eso es normal?», decía Alberto sin dar crédito a lo que había ocurrido. A partir de entonces el CICR aumentó las medidas de seguridad en la entrada de sus centros y Alberto colgó un retrato de Lorena en su despacho de Kabul para recordarla siempre.

Decadencia en Qala-e-Now

Desde Herat viajé a Qala-e-Now, la capital de la provincia de Badghis, donde las tropas españolas estuvieron destinadas casi ocho años hasta 2013. Fui por carretera, con burka, y con el

conductor de confianza con quien había hecho ese trayecto en ocasiones anteriores. Como siempre, me recogió la primera y después al resto de los pasajeros. Íbamos un total de siete personas, como sardinas en lata, en un turismo Toyota Corolla. Ninguno de los pasajeros sabía que yo era extranjera, ni convenía que lo supieran para que no me delataran si los talibanes o cualquier otro criminal paraba el vehículo durante el trayecto. Para los afganos, todos los extranjeros éramos dólares con patas. Cubierta con el burka y sin abrir la boca pasaba por local.

La carretera seguía sin asfaltar, y el coche levantaba una gran polvareda. Entre Herat y Qala-e-Now hay 150 kilómetros, pero el viaje duró cinco horas, nada fuera de lo habitual. No encontramos talibanes por el camino, pero sí una patrulla de la policía afgana que dio el alto a nuestro vehículo. Los agentes se plantaron con sus kaláshnikov en medio de la carretera. Su camioneta había pinchado y pretendían robarnos la rueda de recambio.

«Menudos perros», masculló el conductor antes de bajar del coche y abrir el capó. Cuando estaba a punto de entregarles la rueda, un todoterreno pasó por la carretera y los policías también lo pararon. Prefirieron la rueda de repuesto del otro vehículo, que era más grande que la nuestra. Eso nos salvó *in extremis* de quedarnos sin recambio. Por esa razón la policía afgana tenía tan mala fama. Su presencia era sinónimo de problemas.

En Qala-e-Now fui recibida con entusiasmo. «¡Vuelven los españoles, vuelven los españoles!», repitieron ilusionados los trabajadores de la oficina del gobernador provincial cuando me vieron entrar. Como si hubiera llegado una gran comitiva y yo tuviera capacidad para revertir la degradación de la localidad.

En el hospital de Qala-e-Now, que la Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo (AECID) había

financiado durante tantos años, la situación era igual o peor que en el de Herat. Era el único para una provincia de casi medio millón de habitantes. «No tenemos medicinas y los pacientes lo tienen que sufragar todo de su bolsillo. Incluso si se operan, deben comprar la anestesia, los guantes, las gasas y los antibióticos en la farmacia», lamentaba el director, el doctor Abdul Latif. En consecuencia, no había pacientes. El hospital estaba vacío. La gente no tenía dinero para pagar el tratamiento.

Badghis se había convertido en la segunda provincia de Afganistán con más hectáreas de opio cultivadas, según datos de la Oficina de las Naciones Unidas para la Droga y el Crimen (UNODC). La decadencia caracterizaba el Departamento de Antinarcóticos, encargado de la erradicación de los campos de adormidera. La oficina en Qala-e-Now era un lugar cochambroso, con sillones gastados y un escritorio cubierto de una gruesa capa de polvo, señal de que nadie trabajaba allí desde hacía tiempo.

«Tenemos siete tractores para destruir los cultivos de opio, pero cuatro están averiados y no disponemos de gasolina para los otros», se justificaba el responsable, Mohammad Ibrahim, un hombre con turbante que mataba el tiempo bebiendo té sentado en un sillón y a quien no parecía quitarle el sueño que Badghis se hubiera convertido en un paraíso del opio. «Si tuviéramos recursos, nadie estaría dispuesto a jugarse la vida», aclaraba. Los campos estaban en zonas controladas por los talibanes.

Hasta 2014, las fuerzas extranjeras y las afganas tenían puestos de control en las carreteras. En las zonas más inseguras había controles cada cinco o diez kilómetros. En las más estables a mucha más distancia. A pesar de eso, nunca controlaron todo el territorio. Con la retirada de la mayoría de las tropas internacionales, el número de *check points* se redujo.

La policía y el ejército afganos no disponían de suficientes efectivos para estar en todas partes. Eso hizo que los talibanes ganaran terreno en la provincia de Badghis y en todo Afganistán.

La situación en algunos puestos de control era surrealista. Los soldados afganos se quejaban de no tener suficiente munición y debían dosificar las balas cuando combatían contra los talibanes. Otros aseguraban que ni siquiera disponían de agua potable. La retirada de los extranjeros también afectó a la cadena logística.

Lo único que parecía continuar en perfectas condiciones en Qala-e-Now era la base militar que las tropas españolas construyeron y traspasaron al ejército afgano en 2013. Eran unas instalaciones inmensas, con una capacidad para 1.200 personas. Sin embargo, en 2016 solo había destinados unos 450 militares y la mayoría de las dependencias y hangares estaban vacíos.

La base ya no se llamaba Ruy González de Clavijo, como la habían bautizado los españoles. Su nuevo nombre era Nariman, en homenaje a un soldado afgano que murió luchando contra las tropas británicas en Badghis en el siglo XIX. En la pared que protegía el centro de mando tampoco estaban ya el escudo de la OTAN, uno de los símbolos característicos de la base, ni el del mando de operaciones español. La habían repintado con tres banderas afganas y la leyenda: «Dios, patria y deber». Así, por este orden.

También se hicieron otras pequeñas reformas: construyeron un taller para vehículos y cuatro zonas de aparcamientos, pusieron moqueta y televisor en las habitaciones de los soldados y plantaron césped y parterres con flores. De hecho, la base parecía más un jardín que una instalación militar. Las flores eran muy bonitas, pero no servían para ganar la guerra a los talibanes.

Para regresar a Herat también viajé con un burka y compartí coche con otros pasajeros que tampoco sospecharon que yo era extranjera. Desde Herat tomé un vuelo de vuelta a Kabul. El avión aterrizaría en la capital afgana cuando hubiera oscurecido y eso me preocupaba. A los dos profesores de la Universidad Americana de Kabul los secuestraron de noche. No era conveniente moverse por la ciudad a esas horas. Wahid, un afgano que conocía desde 2008 y siempre me ayudaba cuando lo necesitaba, me aseguró que él se encargaría de que no me pasara nada. Se presentó en el aeropuerto acompañado de sus dos hijos pequeños. En Kabul, cuando la policía ve un coche con mujeres y niños, no lo para. Así que no detuvieron nuestro vehículo. Vestida de afgana, yo pasaba por la madre de los niños.

El 25 de agosto volví por fin a Barcelona. Tenía unas ganas tremendas. Contaba las horas que faltaban para regresar. Esta vez me despedí como Dios manda de todo el mundo y llegué con mucha antelación al aeropuerto. Horas antes, un terremoto de intensidad 6,4 había sacudido el centro de Italia y provocado decenas de muertos. Mis padres pensaban que estaba en Roma. No les dije que me iba a Kabul para no preocuparlos. Como pasaban las horas y no tenían noticias mías se temieron lo peor, hasta que por fin aterricé en Barcelona, tras casi diez horas de vuelo, y los llamé. Por primera vez en su vida se alegraron de que estuviera en Afganistán.

Año 2017
Deportaciones forzosas

En diciembre de 2016 disolvimos ASDHA, la asociación de ayuda a las mujeres afganas que fundamos en el año 2000, y que presidí durante todo ese tiempo. Había una razón de peso: nos quedamos sin fondos. Cada vez era más difícil conseguir subvenciones para financiar proyectos en Afganistán. Ya no era un territorio prioritario para la ayuda internacional. Por otra parte, con el aumento de los secuestros, tener a una persona contratada en el país suponía una mayor responsabilidad, y no disponíamos de una logística suficiente para garantizar cierta seguridad a nuestro personal. Durante dieciséis años, ASDHA contribuyó a que me implicara en Afganistán más allá del periodismo. Su desaparición cortaba, de alguna manera, mi cordón umbilical con el país.

En 2017 también me di de baja del servicio de e-mails de alerta que me avisaba de todos los atentados en Kabul. Los mensajes mantenían mi mente en Afganistán a pesar de que ya hacía dos años que vivía en Italia. Sin embargo, el cambio más importante para mí en ese momento fue dejar de trabajar para *El Mundo*. Después de mi viaje a Afganistán en agosto de 2016 me reuní dos veces más con Pedro García Cuartango, el director del periódico, para rogarle que me subieran las tarifas. Incluso le llevé un gráfico comparativo de mis ingresos y gastos mensuales, que ponía en evidencia que tiraba de ahorros para sobrevivir en Roma. Cuartango reconocía que lo que me pagaban era una miseria, pero aseguraba que no tenía capacidad de decisión para aumentar mis honorarios.

Poco después de mi última reunión con él, tuve la suerte de que la directora del diario *Ara*, Esther Vera, se pusiera en

contacto conmigo para ofrecerme trabajo. El *Ara* era un diario en catalán que había nacido en 2010, cuando yo vivía en Afganistán, y que no había leído nunca. Tenía fama de progresista e independentista, pero también de romper moldes en innovación periodística. No conocía de nada a su directora, y en un principio pensé que me propondría escribir artículos desde Italia. Sin embargo, me ofreció ser la jefa de la sección de Internacional del diario. «Gracias, pero no me interesa. No me veo como jefa, encerrada en una redacción. Yo siempre he sido reportera», balbuceé en su despacho de Barcelona, totalmente descolocada. Decliné la oferta por inesperada.

En cuanto salí por la puerta del diario, empecé a darle vueltas a la cabeza. Lo que me interesaba era llegar a final de mes y dejarme de tonterías. Si no podía ser reportera, sería jefa o lo que hiciera falta, pero no podía continuar como estaba en Italia, en una situación que minaba mi economía y mi salud mental. Así, el 10 de mayo de 2017 aterricé en Barcelona después de mudarme a toda prisa desde Roma y al día siguiente empecé a trabajar en el *Ara*. De esta manera cerraba una etapa laboral de más de diez años en *El Mundo*, en los que me convertí en una periodista de referencia en Afganistán y crecí profesionalmente como nunca me hubiera imaginado.

La primera noticia que escribí para el *Ara* fue sobre un atentado en Afganistán. Era una sensación extraña tener que informar a miles de kilómetros de distancia, sin estar sobre el terreno. El 31 de mayo, un camión bomba cargado con mil quinientos kilos de explosivos estalló en las inmediaciones de la embajada alemana en Kabul. La detonación fue tan potente que se registraron daños a cuatro kilómetros a la redonda. La onda expansiva abrió un gran cráter en la calzada, reventó uno de los edificios de la sede diplomática y derrumbó por completo su muro exterior. También resultaron afectadas las legaciones de Francia, Irán, Turquía, China e India.

Más de ciento cincuenta personas murieron y unas trescientas fueron heridas. La mayoría, civiles. Fue el atentado más grave ocurrido en la capital desde el inicio de la intervención de Estados Unidos en 2001. Algunos testimonios hablaban de «terremoto», porque pareció que la tierra temblara bajo sus pies, y porque el ataque provocó tal conmoción que marcó un antes y un después en Kabul.

A pesar de eso nadie reivindicó el atentado. Los talibanes incluso lo condenaron. La llamada red Haqqani, vinculada a Al Qaeda y responsable de ataques especialmente mortíferos, no se pronunció. Tampoco lo hizo el Estado Islámico Provincia de Jorasán (ISIS-K). Fueran quienes fueran los autores, pretendían causar el máximo número de víctimas. La explosión tuvo lugar en hora punta, poco antes de las ocho y media de la mañana, cuando mucha gente estaba de camino al trabajo.

Muchos se preguntaban cómo pudo entrar en Kabul semejante cantidad de explosivos sin que nadie lo detectara. Estaban escondidos en un camión cisterna de recogida de aguas residuales que, sorprendentemente, la policía no registró y consiguió llegar a la entrada de la zona de las embajadas.

Si antes ya existía una total desafección por el Gobierno, tras el atentado muchos seguidores del partido islamista Jamiat-e-Islami, al que pertenecía el primer ministro Abdullah Abdullah, salieron a la calle a protestar. Pedían la dimisión del presidente Ashraf Ghani, pero también la del propio Abdullah, porque consideraban que su Administración era incapaz de garantizar la seguridad. La policía reprimió las protestas duramente, con tanques de agua y fuego real, y mató a nueve personas. Eso aumentó aún más la indignación.

El presidente Ghani intentó apaciguar los ánimos y convocó, con carácter de urgencia, una «conferencia de paz» con representantes de veinte países y organizaciones internacionales. No propuso ninguna solución, pero hizo un

llamamiento vehemente a la acción internacional contra el terrorismo. El problema es que en aquella época Occidente sufría atentados del Estado Islámico en su territorio, y ya tenía suficiente con resolver su propia papeleta.

El único a quien parecía preocuparle el terrorismo en Afganistán era Donald Trump, pero solo para utilizar el país como laboratorio de pruebas. Cuando llevaba menos de tres meses en la Casa Blanca, el presidente de Estados Unidos ordenó atacar Afganistán con un arma que nunca se había usado hasta entonces: la GBU-43/B MOAB, también conocida como «la madre de todas las bombas». Es el arma no nuclear más potente que existe. La bomba cayó en el distrito de Achin, en la provincia de Nangarhar, al este de Afganistán, el 13 de abril de 2017. Destruyó una red de túneles del ISIS-K y mató a noventa y cinco militantes yihadistas. Todo esto según la versión del Pentágono, que presentó la operación como un éxito rotundo y difundió un vídeo del momento en que el proyectil impactaba contra el suelo y levantaba una impresionante columna de humo, similar a la de una bomba atómica.

Dos semanas más tarde un periodista de la cadena británica BBC, Auliya Atrafi, se desplazó hasta el lugar donde había caído la bomba y comprobó que el ISIS-K continuaba activo en la zona. Según las fuerzas de seguridad afganas, el ataque de Estados Unidos no tuvo ningún impacto significativo en la dinámica del conflicto. Continuaron los atentados del ISIS-K y los de otros grupos terroristas. En mayo de 2018, la organización Human Rights Watch publicó el informe *No safe place* («Ningún lugar seguro»), que repasaba los principales ataques ocurridos en el país desde finales de 2016 hasta principios de 2018 y constataba que, efectivamente, no había ningún lugar seguro en Afganistán.

Barcelona también sufrió un atentado. El 17 de agosto de 2017 un terrorista irrumpió en el centro de La Rambla con una furgoneta, recorrió 530 metros en zigzag a gran velocidad y se llevó por delante a todas las personas que encontró en este emblemático paseo barcelonés. Dieciséis personas murieron y más de un centenar resultaron heridas. Horas más tarde se produjo un segundo atropello mortal en el municipio de Cambrils, en Tarragona, también protagonizado por terroristas. Murieron seis personas más. El Estado Islámico reivindicó ambos atentados.

Recuerdo la reacción de los periodistas en la redacción del *Ara* tras el ataque en La Rambla. Estaban conmocionados e intentaban recabar información de lo sucedido a toda prisa. Yo, en cambio, me quedé impasible, como si todo fuera un *déjà vu*. En aquella ocasión el atentado ocurría en mi ciudad natal, pero no me sobresalté. Hasta a mí me sorprendía mi apatía.

Continuaba yendo a terapia y tomando antidepresivos, aunque me habían reducido la medicación. Ya no estaba cansada y me sentía más animada, pero tenía un miedo terrible a recaer, como si una espada de Damocles colgara encima mío. Si me quedaba dormida viendo una película en el sofá de mi casa un sábado por la tarde, ya me saltaban todas las alarmas. No me permitía una siesta o una cabezada a deshora porque pensaba que eso era síntoma de depresión.

Después de los atentados en Barcelona y Cambrils, diversas ciudades españolas colocaron grandes jardineras o bloques de hormigón en el acceso a zonas peatonales para impedir la circulación de vehículos y evitar así otro posible ataque de las mismas características. El urbanismo de Kabul también se había ido transformando a base de atentados.

En 2006, cuando me instalé en la capital afgana, la calle de

la embajada de Estados Unidos era la única donde el tráfico de vehículos y personas estaba restringido. Después, a medida que aumentó la inseguridad, se creó la denominada zona verde. Aun así los atentados continuaron. Entonces protegieron los edificios oficiales con bloques de hormigón. Primero los bloques eran de medio metro de alto, pero después los sustituyeron por muros de hasta cuatro metros que conferían a los ministerios y a las embajadas el aspecto de bases militares. Sin embargo, esa protección tampoco impidió la masacre del 31 de mayo con un camión bomba. Ni los bloques de hormigón, ni las jardineras, ni absolutamente ninguna barrera física servían para frenar a un grupo de fanáticos, fuese en Kabul o en Barcelona.

Los sucesos del 17 de agosto no me desestabilizaron. Sí lo hizo el referéndum de autodeterminación que se celebró en Cataluña el 1 de octubre. Yo no me identificaba ni con el bando independentista ni con el españolista. Nunca he defendido ninguna bandera. Sin embargo, consideraba una irresponsabilidad que ambas partes tensaran tanto la cuerda. Eso podía romper los puentes de convivencia y con ello cualquier chispa podía provocar un incendio. Entonces no habría vuelta atrás, las consecuencias serían imprevisibles. Me daba pánico. Sabía lo que era vivir en un país en guerra.

Para evadirme de lo que pasaba en Cataluña me tomé unos días de vacaciones y viajé a Afganistán para hacer algunos reportajes. No era la mejor manera de desconectar pero sí una vía de escape. Sin embargo, para mi sorpresa, las televisiones y las emisoras de radio en Afganistán también hablaban de *Catalonia*, así en inglés, y del presidente de la Generalitat, Carles Puigdemont, cuyo nombre pronunciaban con mayor o menor acierto. «Si Cataluña se separa de España, ¿qué pasará con la Liga? No tiene ningún sentido si el Barça y el Madrid no juegan juntos», me dijo el dependiente de una tienda de

deportes en Kabul, Mohammad Daud Karimi, visiblemente preocupado por una posible independencia de Cataluña. Los afganos son unos forofos del fútbol. Les encanta el Barça y el Real Madrid y, si tienen electricidad, no se pierden ningún partido, aunque los retransmitan de madrugada. Para ellos, la independencia de Cataluña equivalía a quedarse sin espectáculo futbolístico.

En Kabul vi que habían proliferado las tiendas de ataúdes. «Antes morían cien personas en un año. Ahora mueren cien en un solo día con los atentados», me dijo un vendedor, Haji Reza Mohammad, para justificar el auge del negocio de la muerte. En Afganistán acostumbran a sepultar a los difuntos envueltos en una sábana blanca y directamente en la tierra. Sin embargo, los familiares de las víctimas de los atentados preferían enterrarlas dentro de una caja de madera, porque los cuerpos quedaban mutilados o hechos pedazos. Las tiendas de ataúdes eran pequeños comercios donde apenas había espacio, por lo que exhibían los ataúdes en la calle. Las víctimas eran sobre todo policías y soldados, aunque también había civiles. De hecho, las bajas entre las fuerzas de seguridad afganas se contaban por millares; solo en el mes de julio de 2016 murieron un total de 900 soldados. A partir de entonces el Ministerio de Defensa y el de Interior dejaron de publicar estadísticas de bajas, para no desmoralizar a las tropas.

El regreso de Gulbuddin Hekmatyar

En un intento de buscar una salida al conflicto, el Gobierno afgano firmó un acuerdo de paz con Hezb-e-Islami, el segundo grupo insurgente más numeroso del país después de los talibanes. El líder de Hezb-e-Islami era Gulbuddin Hekmatyar, un prominente señor de la guerra conocido con el sobrenombre

de «carnicero de Kabul» porque, en 1992, cuando era primer ministro, bombardeó indiscriminadamente la capital. Formaba parte de un gobierno de coalición, pero Hekmatyar siempre tuvo una gran facilidad para cambiar de bando. Según el Comité Internacional de la Cruz Roja, al menos mil personas murieron y ocho mil resultaron heridas durante los bombardeos.

Hekmatyar también era responsable de la desaparición forzosa de rivales políticos, del asesinato de intelectuales afganos y de ordenar ataques contra ONG que fomentaban la educación de las mujeres. En 2003, Estados Unidos lo incluyó en su lista de terroristas más buscados por su apoyo a los talibanes y Al Qaeda. A pesar de eso, el Gobierno de Ashraf Ghani y Abdullah Abdullah firmó el acuerdo de paz en septiembre de 2016, aunque Hezb-e-Islami tenía poco peso en la insurgencia en ese momento.

El acuerdo tuvo sobre todo un valor simbólico. Era el primero que el Gobierno firmaba sin la mediación internacional o de las Naciones Unidas, y se esperaba que abriera la puerta a una posible negociación con los talibanes. Hekmatyar se comprometió a dejar la lucha armada y a reconocer la Constitución afgana. A cambio, el Gobierno le garantizaba total inmunidad, participar en la vida política y retirar su nombre y el de Hezb-e-Islami de la lista negra de terroristas. Además, sus correligionarios encarcelados serían liberados, algunos incluso podrían enrolarse en las fuerzas de seguridad del país.

Hekmatyar regresó a Kabul el 4 de mayo de 2017 después de más de dos décadas en el exilio. Llegó en un vehículo blindado seguido de decenas de camionetas *pickup* con hombres armados que tocaban el claxon a modo de celebración. Un helicóptero del ejército nacional sobrevolaba la comitiva para garantizar su seguridad. La mayoría de los afganos recibieron a Hekmatyar con desconfianza. Quien había contribuido a destruir la capital

volvía como si fuera un interlocutor válido.

El presidente Ashraf Ghani le dio la bienvenida a Hekmatyar con todos los honores en el palacio presidencial. «Gracias por responder al llamamiento de paz», dijo en un discurso solemne que fue retransmitido en directo en las principales cadenas de televisión afganas. El representante especial de la Unión Europea en Afganistán, Franz-Michael S. Mellbin, también se reunió con Hekmatyar y se dejó retratar con él como si fuera un líder político, en vez de un criminal de guerra. Por su parte, en su primera alocución pública, Hekmatyar se presentó a sí mismo como la única persona capaz de mediar con los talibanes y de traer la paz y la estabilidad al país.

Cuando viajé a Kabul en octubre, Hekmatyar vivía en un complejo residencial que se extendía a lo largo de varias manzanas en la avenida de Darulaman y que decenas de milicianos custodiaban. El Gobierno financiaba tanto la casa como el dispositivo de seguridad. Quien había causado tanto sufrimiento en Afganistán disfrutaba ahora de todo tipo de privilegios. En cambio, las víctimas no tuvieron ni un reconocimiento. La directora de Human Rights Watch en Asia, Patricia Gossman, estaba convencida de que el acuerdo de paz con Hekmatyar no serviría en absoluto para que los talibanes dejaran las armas. Según ella, alimentaba todavía más la cultura de la impunidad que la comunidad internacional había fomentado desde el 2001.

Repatriaciones

A diferencia de Hekmatyar, los afganos deportados a Kabul desde Europa no eran recibidos con honores. En octubre de 2016 la Unión Europea había firmado un acuerdo con el Gobierno afgano según el cual Bruselas se comprometía a

mantener la ayuda económica a Kabul si a cambio el país aceptaba el regreso forzado de al menos 80.000 personas que no hubieran obtenido el asilo. El Gobierno de Afganistán dependía casi al cien por cien de la ayuda exterior, y la Unión Europea era uno de sus principales financiadores. Así que no tuvo más remedio que acceder al chantaje.

«Los deportados no os mováis y quedaos en el avión. Vendrán a recogeros», gritó un miembro de la tripulación mientras el resto de los pasajeros desembarcábamos. Los vuelos regulares de Turkish Airlines que cada día aterrizaban con puntualidad a las siete de la mañana en Kabul servían para trasladar a los repatriados.

Nadie tenía cifras exactas de cuántos afganos habían regresado a la fuerza. La Organización Internacional para las Migraciones (OIM) hablaba de unas siete mil personas en 2016. La asociación Afghanistan Migrants Advice & Support Organization (AMSO), que se había constituido precisamente para ayudar a quienes vivían esa situación, aseguraba que el goteo de repatriados era constante. «Noruega deporta cada semana entre tres y nueve afganos en vuelos regulares. Alemania, Austria, Suecia y Finlandia hacen deportaciones una vez al mes o cada dos meses y acostumbran a utilizar vuelos chárter», me explicó el responsable de la asociación, Abdul Ghafoor. Según decía, la mayoría de los repatriados eran chicos jóvenes que volvían sin nada, con una mano delante y otra detrás.

«A menudo no tienen documento de identidad ni pasaporte, han perdido el contacto con la familia o deben el dinero que les prestaron para llegar a Europa», detallaba. Algunos eran repudiados por sus familiares, que consideraban que si los habían devuelto a Afganistán era porque habían hecho algo malo en Europa. Otros no podían llegar a sus casas porque vivían en zonas rurales peligrosas. El resultado es que muchos

repatriados caían en la droga o intentaban regresar al continente europeo.

La Unión Europea sufragaba el alojamiento y la comida de los repatriados durante las dos primeras semanas en Kabul. Después se tenían que buscar la vida. La mayoría estaban alojados en el hotel Spinzar, en el centro de la capital, un establecimiento de habitaciones bastante dignas con lavabos compartidos. Allí conocí a Najibullah Hakimi, de treinta y ocho años, y a su hijo Ali Roza, de once. Los habían deportado desde Suecia después de vivir allí dos años y medio. «El niño ya sabía hablar sueco e inglés», lamentaba el padre, que no entendía que los hubieran metido en un avión y los hubieran devuelto a Afganistán de esta manera.

Había casos especialmente dramáticos, como el de Mortaza Mosabi, de veinticuatro años. Había nacido en Afganistán pero llevaba desde los cuatro años en Irán. Según decía, huyó a Europa porque Irán obligaba a los refugiados afganos a luchar en la guerra de Siria. Teherán fue uno de los principales aliados del dictador sirio Bashar al-Ásad. Mortaza vivió dos años en Suecia hasta que lo deportaron. En Afganistán no conocía a nadie. Toda su familia estaba en Irán. Estaba enfermo de tuberculosis y no tenía dinero ni para comprar medicamentos.

Esa política de deportaciones contrastaba con la decisión de la delegación de la Unión Europea en Kabul de evacuar a la mayoría de su personal extranjero tras el atentado con camión bomba que tanto conmocionó a la ciudad. A raíz del ataque, la sede del organismo se fortificó aún más. Para entrar había que cruzar tres grandes compuertas de acero, superar diversos controles y pasar por un arco y un escáner de seguridad.

«Si la Unión Europea evacúa a su personal, ¿por qué continúa deportando a afganos?», pregunté a un diplomático europeo, que solicitó mantener el anonimato porque no tenía permiso de Bruselas para hacer declaraciones a la prensa. «Es

bueno utilizar las palabras correctas. No estamos deportando. Estos individuos han entrado de manera irregular en Europa. No han conseguido el asilo porque no han podido demostrar que su vida corre peligro en Afganistán. Por lo tanto, nos limitamos a cumplir la ley», fue su respuesta. «Si los treinta millones de habitantes de Afganistán viven en el país, bien pueden hacerlo los deportados», añadió. No obstante, admitió que nunca había entrevistado a un repatriado, ni había visto en qué condiciones volvían, y aún menos cómo vivían una vez en Kabul.

En Alemania, que es uno de los países europeos con más refugiados afganos, se hicieron manifestaciones en contra de las deportaciones y grupos de activistas intentaron frenarlas sin éxito. No entendían que continuaran después del atentado que había destruido parte de la embajada alemana en Kabul. Además, las autoridades cometían errores de consideración. Uno que ocupó titulares en la prensa fue el caso de un afgano de veintiún años detenido de forma violenta el 31 de mayo de 2017. La policía utilizó porras, espray pimienta e incluso un perro. El chico estaba en clase, en una escuela de formación en Núremberg, y hacía cuatro años que vivía en Alemania. Tras la detención, el juez dictaminó que no había ningún motivo para repatriarlo.

En marzo de 2016, la Unión Europea también firmó un acuerdo con el Gobierno turco para deportar a ese país a los inmigrantes que llegaran a Grecia de forma irregular. A cambio, Turquía recibiría seis mil millones de euros para mejorar la situación humanitaria de los refugiados en su territorio y los ciudadanos turcos podrían viajar a Europa sin visado. De esta manera Bruselas pretendía frenar la llegada de refugiados, aunque eso supusiera financiar a un país que violaba los derechos humanos.

Viajé a Estambul en febrero de 2014, antes de la retirada de

la mayoría de las tropas internacionales de Afganistán y de la crisis de refugiados. Entonces el número de afganos que llegaban a Turquía y pedían asilo en la Agencia de las Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR) se había triplicado en los dos últimos años, y eran el segundo colectivo extranjero más numeroso después de los sirios.

La mayor parte de la comunidad afgana en Estambul vivía en Zeytinburnu, un barrio dormitorio formado por enormes bloques de pisos y plagado de maquilas, talleres de confección clandestinos donde afganos y sirios trabajaban en condiciones infrahumanas. Toda la producción era para exportación, para abastecer las tiendas que en España y otros países europeos venden ropa *made in* Turquía.

Los afganos trabajaban diez horas al día, seis días a la semana, por un sueldo de 650 liras turcas al mes, una cifra que en aquella época equivalía a unos 216 euros y que a duras penas daba para comer y vivir en un piso. El sueldo mínimo interprofesional en Turquía era entonces de 800 liras.

Tuve la oportunidad de entrar en una de esas maquilas. Estaba en una calle estrecha cerrada al tráfico. Desde el exterior parecía un local abandonado. Dentro trabajaban ocho afganos bajo la luz de tubos fluorescentes, rodeados de montones de ropa. Un fuerte olor a pegamento impregnaba el ambiente, y no había ningún tipo de ventilación. «Es que trabajamos con retales de cuero y los pegamos sobre telas para confeccionar cazadoras», me aclaró uno de ellos. «El encargado no me deja sentarme en todo el día y solo me permite ir al lavabo una vez», se quejaba Mumtaz, un joven que trabajaba en otro de esos talleres cargando bultos. Había llegado a Turquía hacía dos meses y medio con un visado de estudiante que estaba a punto de expirar y no le daba derecho a trabajar y, por lo tanto, tampoco a quejarse si lo trataban como un animal. El visado lo había conseguido en Kabul de forma ilegal,

tras pagar cuatro mil dólares.

Lógicamente ningún afgano quería quedarse en Turquía. Todos aspiraban a llegar a Europa. Hacerlo de forma legal era imposible. La única opción era cruzar el río Évros, que está en la frontera con Grecia, o llegar a la isla de Lesbos en una patera. En Zeytinburnu era fácil encontrar traficantes que los llevaran por dos mil dólares. Sin embargo, tanto si escogían una alternativa u otra, lo más probable es que acabaran en centros de internamiento o campos de refugiados en Grecia, donde las condiciones de vida eran iguales o más terribles que en Turquía.

Choque cultural

Para mi amiga Azita Rafat, que llegó de forma legal a Suecia con sus cuatro hijas, la vida tampoco era fácil. Fue a parar a Söderhamn, una localidad a 250 kilómetros al norte de Estocolmo, donde en invierno las temperaturas descienden a treinta grados bajo cero, la nieve se acumula hasta llegar al metro y medio de alto, y a duras penas hay cinco horas de luz solar al día. Söderhamn se había convertido en el tercer municipio de Suecia con más refugiados, tenía 12.000 habitantes y, según el Ayuntamiento, acogía a 2.500. Sobre todo eran sirios, afganos y somalíes. En el pasado hubo allí una fábrica de Ericsson y una base militar aérea y, por lo tanto, la localidad disponía de muchas casas y apartamentos vacíos. La mayor parte de su población era gente de edad avanzada.

Azita recibía ayudas del Gobierno y había conseguido un trabajo como profesora de niños afganos en un colegio de la zona. Les impartía clases de su lengua natal. Eso le permitía tener unos ingresos mínimos y vivir con sus hijas en una pequeña casa de alquiler. Estaba satisfecha en ese sentido. Lo

peor, según decía, era el choque cultural de vivir en Suecia. Ella era una persona de mentalidad abierta, estaba acostumbrada a viajar a países occidentales. Sus hijas hablaban inglés y ya veían canales de televisión extranjeros en Kabul. A pesar de eso, se sentían totalmente desubicadas. «Si esto nos ha pasado a nosotras, ¿qué les debe de pasar a otras familias refugiadas que llegan a Europa?», se preguntaba.

Fui a visitarla en julio de 2017 y sus hijas adolescentes habían cambiado por completo. Ya no llevaban velo en la cabeza, vestían al estilo occidental, usaban ropa ajustada y se habían vuelto unas consentidas que no se responsabilizaban de nada, y a menudo no hacían caso a su madre. «Tienen una percepción errónea de Europa. Piensan que aquí todo el mundo es bueno, y que no les puede pasar nada ni corren ningún peligro. ¡Estoy harta de decirles que no se fíen!», lamentaba Azita.

Su hija Mehranguiz, de quince años, afirmaba que lo que más le sorprendía de Suecia era que los profesores trataran tan bien a los alumnos. «Se preocupan de que lo entendamos todo en clase y no nos pegan. En Afganistán nos golpeaban con una regla en la palma de la mano si nos equivocábamos», aseguraba. También le impresionaba que los hombres dieran besos a las mujeres en público. Eso era impensable en Afganistán.

En cambio, lo que había causado más sensación a las gemelas Benafsha y Beheshta, de diecisiete años, eran las clases de educación sexual en el instituto. Ninguna de las dos había visto nunca a un hombre desnudo antes de llegar a Suecia, ni siquiera en una fotografía. No tenían ni idea de cómo era la anatomía masculina. «Aquí nos han explicado qué es un condón y nos han enseñado a ponerlo. Hemos hecho prácticas con una estructura de plástico», relataban con una risa nerviosa, entre divertidas y escandalizadas. También aseguraban que les

habían enseñado cómo era «la postura del perro».

Azita reconocía que, tras varios días de «clases magistrales» de educación sexual, no aguantó más y se plantó en el instituto de sus hijas para quejarse. «No tengo ningún inconveniente en que tengan información, pero hay que dosificarla. Las niñas en Afganistán ni siquiera van al colegio con niños. Una gota de agua es mucho para ellas, que vienen de una cultura tan diferente. ¿Cómo quieren que lo filtren todo si les están ofreciendo un océano?», se preguntaba.

La hija menor de Azita, Mahnush, de trece años, que había llegado a Suecia vestida de niño, ahora llevaba ropa de niña pero tenía problemas psicológicos. Había caído en una depresión y no le satisfacía nada. Tanto ella como sus hermanas se quejaban de que les costaba mucho tener amigas y amigos suecos. Solo se relacionaban con otros refugiados. Azita se lamentaba de lo mismo. Según decía, vivir en una especie de gueto hacía imposible la integración.

Años 2018 y 2019
Las últimas elecciones

El 23 de febrero de 2018, el presidente afgano, el presidente turkmeno, el primer ministro pakistaní y el ministro de Asuntos Exteriores indio sellaban ante las cámaras, con un apretón de manos y una sonrisa de oreja a oreja, el inicio de las obras de construcción de un gasoducto en Afganistán que debía conectar los cuatro países y solucionar buena parte de sus problemas. Turkmenistán, cuarto país con las reservas de gas más importantes del mundo, podría ampliar su mercado, hasta entonces limitado a China y a Rusia. Por su parte, Afganistán, Pakistán e India resolverían su problema de escasez energética.

El proyecto se conocía como TAPI, en referencia a las iniciales de los cuatro países implicados. Se trataba de un gasoducto de 1.814 kilómetros de longitud, cuya construcción había sido planteada ya en los años noventa, durante el primer régimen de los talibanes. Por eso Afganistán tenía tanto interés estratégico. Por aquel entonces el Gobierno turkmeno llegó a negociar la materialización del proyecto directamente con el mulá Mohammad Omar, entonces líder de los talibanes. Sin embargo, los atentados del 11-S del 2001, la posterior intervención estadounidense en Afganistán y la creciente inseguridad en el país la hicieron inviable.

En 2018, los talibanes se mostraron a favor del gasoducto e incluso aseguraron que lo protegerían en las zonas que estuvieran bajo su control. Tal vez ya preveían entonces que el Gobierno afgano caería tarde o temprano, que ellos volverían al poder y por lo tanto serían los grandes beneficiarios de esta obra de ingeniería monumental. Su coste ascendía a los diez mil millones de dólares y el Banco de Desarrollo Asiático estaba

dispuesto a financiarla casi en su totalidad. Se calculaba que los trabajos de construcción durarían cerca de dos años.

Una vez acabado, el gasoducto generaría como mínimo 25.000 puestos de trabajo en Afganistán y el Gobierno obtendría ingresos anuales de aproximadamente cuatrocientos millones de dólares en concepto de impuestos por el paso de la tubería por territorio afgano. El gas permitiría también el funcionamiento de tres nuevas centrales eléctricas que contribuirían a solucionar uno de los problemas endémicos del país: la falta de electricidad.

Entre 2008 y 2014 el Gobierno de Estados Unidos gastaba unos cien millones de dólares al año para proporcionar electricidad con generadores a la ciudad de Kandahar, en el sur. Esa lluvia de millones cesó con la marcha de la mayoría de las tropas internacionales. En consecuencia, Kandahar se quedó casi sin suministro eléctrico y muchas fábricas pequeñas cerraron. La situación en el resto de Afganistán era igual o peor. Por lo que decía el Gobierno, todos estos problemas quedarían resueltos con el gasoducto. Era la gallina de los huevos de oro.

El gran apagón

En enero de 2018 el programa de televisión *Salvados*, de La Sexta, dedicó una edición a hablar de la depresión. «Uno de cada cinco» era el título del reportaje. Varias personas que habían sufrido la enfermedad o habían convivido con ella explicaban su experiencia. Me impactó el testimonio de Carmen, una joven cuya madre se había suicidado. Carmen aclaraba que su madre no se había matado. La enfermedad lo había hecho. «Mi madre no quería hacerlo. Otra gente muere de cáncer. Ella murió por suicidio, por culpa de una

enfermedad de la que no pudo salir», dijo. Me pareció la mejor manera de explicar por qué la depresión te lleva a la muerte.

Otro de los testimonios era el del cantautor Iván Ferreiro, que también había sufrido la enfermedad. «Estoy totalmente curado de la depresión. Casi podría decir que no volveré a caer», afirmó. Yo había salido ya del pozo, pero no podía asegurar de forma tan rotunda que estaba curada o que no recaería. No tener la clarividencia de Ferreiro me asustó. ¿Eso significaba que podía hundirme otra vez?

Mi psiquiatra me retiró toda la medicación y me dio el alta en junio de 2018, tras cuatro años de tratamiento. A pesar de mis temores, estaba curada. Vivir en Barcelona, pasar tiempo con la familia, salir con los amigos y tener un salario fijo contribuyeron a mi recuperación. También influyó mucho hacer deporte con frecuencia.

Poco más de un año después, en septiembre de 2019, viajé de nuevo a Afganistán como enviada especial del diario *Ara* con motivo de las elecciones presidenciales. Regresar al país me generó cierta ansiedad, pero lo gestioné sin necesidad de medicación. Ahora el principal inconveniente para trabajar como periodista allí eran los atentados. Continuaban a la orden del día y los reporteros éramos un objetivo. El 30 de abril de 2018, un terrorista suicida en motocicleta se inmoló en el barrio de Shash Darak, cerca del cuartel general de la OTAN en Kabul. Media hora más tarde, cuando los reporteros acudieron al lugar del ataque para informar de lo ocurrido, otro terrorista que llevaba una cámara para hacerse pasar por periodista detonó una segunda carga explosiva. Nueve reporteros murieron y otros seis resultaron heridos de gravedad. Fue el mayor ataque indiscriminado contra la prensa en Afganistán desde la caída del primer régimen talibán. El Estado Islámico reivindicó la autoría.

Llegué a Kabul en un momento en el que la ciudad entera

estaba sin electricidad. Los talibanes habían atacado cuatro torres de alta tensión que servían para importar energía de los países vecinos de Tayikistán y Uzbekistán, y habían dejado a oscuras la capital y diez de las treinta y cuatro provincias del país. El único sitio donde había luz era en la sede central de la Compañía Nacional de Electricidad de Afganistán, a la que fui para recabar información. La iluminación allí era incluso obscena. En el despacho del jefe de comunicación, Wahid Tawhidi, entraba suficiente luz natural por las ventanas y aun así había tres placas fluorescentes más una decena de focos encendidos.

«Por fin los talibanes han permitido que nuestros operarios accedan a las torres de alta tensión», me aseguró Tawhidi, que no dejaba de recibir llamadas de los medios de comunicación afganos para saber cuándo se restablecería el servicio. No podía dar una fecha. Era imprevisible determinar cuándo estaría arreglada la avería. De todas formas la normalidad tampoco era la panacea. Habitualmente solo el 45 por ciento de la población afgana disponía de acceso a la red eléctrica. El resto tenía que espabilarse con generadores, y eso si podían comprar combustible para tenerlos en marcha.

En el hotel donde me alojé en Kabul había generador, así que la falta de electricidad no me supuso un gran problema. Mi antigua casa era ahora la sede de una empresa. Mi dormitorio se había convertido en un despacho, con mesas y sillas de oficina.

LA DEMOCRACIA EN UN *IMPASSE*

Las elecciones parlamentarias tenían que celebrarse en 2015. Sin embargo, se aplazaron a 2016, y las acabaron convocando el 20 de octubre de 2018, con más de tres años de retraso. Las

desastrosas votaciones presidenciales de 2014, marcadas por el fraude, habían provocado una crisis institucional sin precedentes que evidenció la urgencia de una reforma electoral antes de la convocatoria de nuevos comicios. El problema era que el presidente Ashraf Ghani y el primer ministro Abdullah Abdullah no se ponían de acuerdo en cómo hacer esa reforma.

Uno de los principales escollos era la Comisión Independiente Electoral, el organismo encargado de la organización de las votaciones. Ghani se oponía a sustituir a los integrantes que formaban dicha comisión porque le habían dado la victoria en las presidenciales. En cambio, Abdullah defendía la renovación total del organismo. Ante la falta de consenso, y como medida de presión para forzar la reforma, la comunidad internacional dejó de financiar la comisión, cuyo presupuesto dependía en un 80 por ciento de la ayuda extranjera. La consecuencia inmediata fue que la democracia entró en un *impasse*. De ahí que los comicios se celebraran con tanto retraso.

Finalmente se hicieron algunas tímidas reformas y las elecciones parlamentarias se celebraron. Por ejemplo, obligaron a que los votantes se registraran de nuevo para solventar la falta de censo electoral y paliar los efectos perniciosos de la falsificación de los carnés de voto que se había detectado en convocatorias electorales anteriores. Un total de 8,9 millones de personas se inscribieron como votantes. A cada una se le asignó un colegio electoral. Eso era otra novedad: en anteriores comicios podían votar en cualquier centro.

Aun así las votaciones no estuvieron exentas de complicaciones. Cuando faltaban menos de veinticuatro horas para la apertura de los colegios electorales, el Gobierno suspendió los comicios en Kandahar. Dos días antes los talibanes habían asesinado al jefe de la policía de esta provincia y al responsable de su servicio de inteligencia en un

atentado que también estuvo a punto de llevarse por delante al general estadounidense Scott Miller, responsable de la OTAN en Afganistán. Miller era la persona con más protección armada del país y salió ileso de milagro.

Las elecciones también se aplazaron por falta de seguridad en la provincia de Ghazni, en el este. Y muchos colegios electorales no abrieron en todo el país a causa de las amenazas de los talibanes.

Se presentaron 2.565 candidatos para los 250 escaños del Parlamento. Todos eran independientes. El recuento de votos duró una eternidad y los resultados se dieron a conocer el 14 de mayo de 2019, casi siete meses después de las elecciones. «*Afghan led, afghan owned*» era el lema de las Naciones Unidas para definir el proceso electoral. Es decir, las elecciones pertenecen a los afganos y ellos las dirigen. O, en otras palabras, ellos se lo guisan y ellos se lo comen, y la comunidad internacional se lava las manos a pesar de financiar los comicios, que costaron unos cuarenta y cinco millones de dólares.

Con este precedente, las elecciones presidenciales que tenían que celebrarse en 2019 no auguraban nada bueno. También se realizaron con retraso: el 28 de septiembre de 2019. La convocatoria electoral coincidió con el inicio de negociaciones de paz entre Estados Unidos y los talibanes. Washington esperaba firmar un acuerdo con los islamistas para que decretaran un alto al fuego y se sentaran a dialogar con el presidente Ashraf Ghani. El objetivo era que los talibanes formaran parte de un Gobierno interino y no se celebraran los comicios. Por eso la campaña electoral fue tan atípica.

En Kabul casi no había carteles electorales en las calles y los candidatos apenas hicieron mítines. Algunos porque realmente creían que no habría elecciones, y otros porque se propusieron boicotear los comicios. Se quejaban de que Ashraf Ghani y

Abdullah Abdullah, que se presentaron a la reelección, utilizaban recursos del Gobierno para hacer campaña. Y tenían toda la razón. Asistí a un mitin de Ghani en Kabul y la cantidad de recursos públicos puestos a su servicio era escandalosa. Sin ir más lejos, el mitin se celebró en el palacio presidencial, y los centenares de personas que asistimos fuimos agasajadas con un copioso almuerzo a costa de las arcas públicas.

Sin embargo, el candidato más polémico era sin duda Gulbuddin Hekmatyar, el sanguinario señor de la guerra con quien el Gobierno había firmado un acuerdo de paz un año antes. A pesar de haber bombardeado Kabul a principios de los años noventa, Hekmatyar se presentaba a los comicios como si fuera un político respetable.

«Querida Mònica, mi padre ha recorrido dos mil kilómetros para visitar Kunduz, Badakhshan, Takhar y Baghlan, aunque todas estas provincias están en guerra y los talibanes han cortado las carreteras. Ningún otro candidato podría haber hecho esto. En todas ellas lo recibieron con entusiasmo», me escribió el hijo mayor de Hekmatyar, Habiburrahman, con quien intercambié diversos mensajes de WhatsApp en los que me daba a entender que su padre era el único aspirante a presidente que podía conseguir la paz con los talibanes.

Habiburrahman se encargaba de la relación con la prensa y de las acreditaciones para asistir a los mítines de su padre. Me citó en la entrada del complejo residencial donde Hekmatyar vivía en Kabul. Allí celebrarían el mitin final de campaña.

Decenas de milicianos con kaláshnikov custodiaban la entrada. Sin embargo, me permitieron acceder sin problemas en cuanto les mostré mi carné de prensa. El recinto, formado por diversos edificios, era tan grande que no se avistaba su perímetro. En una explanada había una carpa gigante y centenares de sillas para los asistentes.

Unas dos mil personas participaron en el mitin, de las cuales

solo una cincuentena eran mujeres. El resto eran hombres barbudos que vestían con el tradicional *shalwar kameez* musulmán, formado por un blusón y pantalones bombachos. Algunos también llevaban turbante. Era impactante que un criminal de guerra tuviera tantos seguidores.

Yo iba toda de negro, con *chapán* hasta los pies y un pañuelo en la cabeza. Aun con la vestimenta islámica me sentí observada en todo momento. Los asistentes a los que entrevisté me respondieron amablemente y aceptaron que les tomara fotografías o los filmara. Tras más de una hora de espera, Hekmatyar apareció por fin en el estrado y sus simpatizantes lo vitorearon poniéndose en pie. «Allahu Akbar» («Dios es grande»), gritaban algunos con el puño en alto.

Hekmatyar tenía setenta y un años. Con su barba blanca de viejecito indefenso no parecía ser alguien que hubiese matado a tantas personas. Un par de metros más atrás, también en la tarima, estaba su hijo Habiburrahman con un traje de chaqueta oscuro que le daba un aire occidental disonante con el look general del público. «Os aseguro que expulsaremos a los extranjeros de este país y no permitiremos que interfieran en las elecciones. Si hay fraude, la guerra volverá a Afganistán», dijo el criminal de guerra. Habló con voz calmada a pesar de la beligerancia de sus palabras.

«¡Nosotros somos tus proyectiles!», gritó un exaltado poniéndose en pie. El resto de los asistentes lo ovacionaron. «¡Muerte a América!», clamó otro haciéndose oír entre los aplausos. Un tercero incluso pidió las cabezas de Ashraf Ghani y Abdullah Abdullah a la vez que mostraba una pancarta con sus retratos. Lo más surrealista es que todo esto sucedía porque la comunidad internacional financiaba las elecciones.

Los comicios fueron un desastre una vez más. Como en convocatorias anteriores, Kabul estuvo desierta durante toda la jornada electoral. Casi no circulaban vehículos por las calles,

las tiendas estaban cerradas y había controles policiales por todas partes. Pocos electores acudieron a las urnas y muchos de los que lo hicieron no pudieron votar porque unas modernas máquinas biométricas que servían para la identificación de los votantes no funcionaban bien.

En Afganistán se calcula que hay unos 37 millones de habitantes, pero solo 9,6 millones se registraron para participar en las presidenciales. Votaron 1,8 millones. Eso significa que la participación fue de un escaso 18,8 por ciento. Estaba previsto que los resultados se hicieran públicos el 7 de noviembre, pero el año 2019 acabó sin saber quién sería el nuevo presidente.

Matrimonios a ciegas

Sameem trabajó para mí como traductor en 2014 en la remota provincia de Nimroz, al sudoeste del país, de donde era originario. Me lo había recomendado una amiga, así que era una persona de confianza. Poco después se trasladó a vivir a Kabul. Cada vez que yo viajaba a Afganistán, Sameem pedía un par de semanas de vacaciones en su trabajo habitual para ser mi traductor y ganar un dinero extra. Tenía veintiocho años, estudios superiores, hablaba inglés perfectamente y era responsable de proyectos en la ONG estadounidense Mercy Corps. Se le veía un chico bonachón y sensible. A menudo criticaba las tradiciones de su país, que consideraba retrógradas y machistas. Se declaraba un defensor de los derechos de las mujeres. De hecho, financiaba con su salario los estudios universitarios de sus dos hermanas. Estaba convencido de que tener formación superior les abriría puertas.

Cuando viajé a Kabul en 2019, me enteré de que Sameem se había casado. Flirteaba con una chica desde hacía tiempo, así que no me extrañó. Sin embargo, el joven no contrajo

matrimonio con la chica que le gustaba, sino con otra que no conocía de nada y que sus padres escogieron para él. No la vio, ni habló con ella; ni siquiera se intercambiaron una fotografía antes de la boda. O sea, Sameem llegó al lugar de la ceremonia sin saber cómo era su futura esposa. Fue literalmente un matrimonio a ciegas. Me sorprendió que una persona como él, con formación y mentalidad abierta, hubiera accedido a un enlace de aquellas características.

«Un día mi padre me llamó desde Nimroz y me dijo que había encontrado una mujer para mí —me explicó para justificar la boda—. Al principio pensé que era una broma». Pero el padre no bromeaba, hablaba muy en serio.

En Afganistán es tradición que los padres elijan la esposa o el marido de sus hijos e hijas. Los matrimonios por amor casi no existen y, de hecho, está mal visto casarse con alguien que la familia no ha escogido. Va en contra de las convenciones sociales, de la misma manera que en Occidente chocaría que un hijo pidiera a su padre que le busque una esposa.

La persona elegida por el padre suele ser de la familia: normalmente un primo hermano o un primo segundo. En otro caso, se trata de alguien de la misma etnia o clase social. Eso es precisamente lo que argumentó el padre de Sameem: «La chica es maestra y hermana de un antiguo profesor tuyo. Su familia es honrada y humilde como la nuestra. Yo no la he visto, pero tu madre sí, y dice que es guapa», le detalló por teléfono.

Sameem llamó entonces a su madre para pedirle que organizara un encuentro con la joven. «Hijo, eso no es posible. Ya sabes cómo es nuestra cultura. Las mujeres no se muestran ante un extraño», le contestó. «¿Y ver una foto?», insistió él. A la madre le pareció buena idea, pero la familia de la chica se negó por pudor.

«Yo no quería casarme, pero me llamaron tantas y tantas veces que no me pude negar. ¿Quién se atreve a decir “no” a

unos padres?», lamentaba Sameem. En Afganistán oponerse a la voluntad de la familia supone quedarse sin su apoyo, que es lo único con lo que se cuenta en un país donde el Gobierno no ofrece ningún tipo de ayuda ni prestación, ni siquiera garantiza una pensión de jubilación.

Sameem pagó 400.000 afganis, unos 4.600 euros, por aquella chica. Una cantidad nada desdeñable en un lugar donde el salario medio de un funcionario es alrededor de 200 euros mensuales. El hombre en Afganistán siempre tiene que abonar dinero a la familia de la mujer con quien se casa. Es como adquirir una propiedad. Cuanto más paga, más valor tiene la chica. Tras la boda, se convierte en su amo y señor. Decide en todos los aspectos de su vida.

En 2019, después de dos años de matrimonio y un hijo en común, Sameem decía que empezaba a enamorarse de su esposa. Lo que más le gustaba de ella es que se había adaptado muy bien a su familia política. El matrimonio vivía en la casa de los padres de él, como manda la tradición.

El caso de Sameem no era excepcional. Islam, otro traductor que trabajó para mí durante los años que viví en Kabul, también se casó con una chica que sus padres escogieron para él. Sus familias eran relativamente progresistas y permitieron que los novios se conocieran antes de la boda: se vieron un par de veces acompañados de sus respectivas familias y hablaron por teléfono. De hecho, las semanas previas al casamiento, Islam se pasaba el día enganchado al móvil.

La novia debe llegar virgen al matrimonio en Afganistán. La noche de bodas dos mujeres representantes de la familia de la novia y dos de la del novio extienden un pañuelo blanco sobre la cama de los cónyuges y esperan fuera de la habitación a que la pareja consume el matrimonio. Una vez que han acabado, el novio sale del dormitorio para lavarse y las mujeres examinan el pañuelo para comprobar que efectivamente hay restos de

sangre que confirman que la novia era virgen.

Islam pidió a su madre que no esperara fuera de la habitación durante la noche de bodas. «Le he dicho que yo ya me encargaré de enseñarle las pruebas», me explicó. El problema es que no tenía ninguna prueba para enseñar porque no había mantenido relaciones sexuales con su esposa. «Cuando me acerco a ella se pone a llorar. Tiene miedo a que le haga daño. ¿Hay alguna medicina que pueda tomar para que no le duela?», me soltó un día, cuando ya hacía más de una semana que se había casado. Su confesión me descolocó. Nunca antes había compartido ninguna intimidad conmigo. Tenía que estar muy desesperado para hacerlo. «Islam, no hay una medicina para esto. ¿Qué te aconsejan tus amigos que hagas?», le pregunté. «Mis amigos dicen que las mujeres siempre lloran, que no haga caso y siga adelante». La respuesta me puso los pelos de punta.

Un poco de vaselina tal vez les podría ayudar, pensé. Recorrí con Islam un sinfín de farmacias y supermercados de Kabul. Puedo dar fe de que en todos los establecimientos había Viagra, pero fue imposible encontrar vaselina, cosa que dice mucho del país. En plena búsqueda del ansiado producto, un colega periodista que tenía previsto viajar a la capital afgana, Antonio Pampliega, me escribió para preguntarme si necesitaba algo de España. «Por favor, tráeme dos tubos de vaselina», le contesté sin dudar.

La vaselina obró el milagro. Islam y su esposa consumaron el matrimonio. «Mi mujer está muy agradecida por el medicamento que nos has dado», me dijo Islam solemnemente, colocando una mano en el pecho y haciendo una ligera reverencia, como si yo fuera una eminencia en medicina. Aun así el joven no estaba del todo conforme. Se quejaba de que su mujer no había sangrado lo suficiente. «Soy un chico de mentalidad abierta y no diré nada, pero otro habría montado

un escándalo», reconoció. Las mujeres que no sangran en su primera relación sexual son repudiadas por el marido y devueltas a su familia como si fueran un paquete de Amazon.

No ser virgen es una deshonra, hasta el punto de que si violan a una mujer antes del matrimonio la familia la obliga a casarse con el violador. De lo contrario, ¿qué otro hombre la querría?

Mientras vivía en Italia, me enteré de que hasta el año 1981 el Código Penal italiano establecía que un hombre podía evitar la cárcel por un delito de violación o abusos sexuales si se casaba con su víctima. Lo llamaban «matrimonio reparatorio».

Franca Viola fue la primera italiana que se negó a casarse con su violador, en contra de las tradiciones de la época y del qué dirán. Fue en 1965, en Alcamo, Sicilia. Su decisión fue el primer paso para cambiar la legislación retrógrada del «matrimonio reparatorio». En 2017 viajé a Sicilia y la entrevisté. Seguía viviendo en su localidad natal, a pesar de haber sido señalada por todos sus vecinos. Las malas lenguas continuaban culpándola de lo sucedido e incluso decían que la relación sexual había sido consentida.

«Antes era una deshonra que violaran a tu hija porque se creía que, si habían abusado de ella, era por algo. Algunos padres incluso echaban a la hija de casa si se negaba a casarse con el violador», me explicó Franca. Según ella, esa tradición no se basaba en ninguna religión. Era puro machismo.

Así pues, estas aberraciones no solo sucedían en Afganistán. En Europa, las mujeres hemos tenido acceso a la educación, hemos ganado derechos y ha habido una evolución. En Afganistán la guerra, la pobreza y la falta de formación han hecho inviable cualquier avance. Según datos del Ministerio de Educación, en el año 2019 había 13,1 millones de menores en edad escolar en el país, solo 9,4 millones iban al colegio, de los

cuales 3,5 millones eran niñas. Es decir, solo una de cada dos niñas estaba escolarizada tras casi dos décadas de la caída del primer régimen talibán y a pesar del dinero invertido por la comunidad internacional. No obstante, si la situación de las mujeres había cambiado tanto en Italia, ¿por qué no podía cambiar en Afganistán? Tal vez solo era cuestión de tiempo.

El patriarcado afgano

Otros chicos afganos no tenían tanta consideración como Islam. Muchas chicas llegaban a la maternidad Malalai de Kabul con desgarros vaginales provocados por las penetraciones forzadas de sus maridos durante su primera relación sexual tras la boda. «El problema es que el chico no sabe hacerlo», afirmaba la directora de la maternidad y presidenta de la Sociedad de Obstetricia y Ginecología de Afganistán, la doctora Nasrin Oryakhil.

La ginecóloga catalana Laia Ferrer Ventura trabajó en 2018 en un hospital de Médicos sin Fronteras en la provincia de Khost, al este del país. «Las mujeres llegan con sangrado abundante y mucho dolor. Lo más sorprendente es que las trabajadoras y las comadronas del hospital se ríen. No se dan cuenta de que detrás de aquello hay una realidad muy dura, una violación», me explicaba.

Laia había vivido situaciones tan bestias que superaban lo que yo conocía de primera mano sobre las mujeres en Afganistán. El hospital donde trabajó tenía el sobrenombre de «fábrica de bebés», porque cada mes atendía unos dos mil partos. Eso significa unos 24.000 partos anuales, cifra que está a años luz de las de España. Por ejemplo, en hospitales como Vall d'Hebron o el Clínic de Barcelona, se hacen más o menos tres mil partos al año.

Las mujeres tienen tantos hijos en Afganistán que a menudo no les da tiempo a recuperarse entre embarazo y embarazo. En consecuencia, no disponen de leche para amamantar a la criatura. Es un problema grave. Muchas no saben cómo alimentar al bebé por falta de recursos económicos o por simple desconocimiento. La malnutrición infantil es un mal endémico en el país. De hecho, en todos los hospitales infantiles de Afganistán hay una unidad de malnutrición y, por desgracia, siempre está llena.

El marido lo controla todo. Laia explicaba que era el hombre el que decidía si hacían una cesárea. No podían intervenir a la mujer sin su permiso. Si el marido se negaba, la criatura moría dentro del útero de la madre. «Preguntan si es niño o niña. Nosotras nunca contestamos», aseguraba la ginecóloga. La predilección de la familia era siempre tener un varón. «En Afganistán creen que las cesáreas son malas porque muchas mujeres mueren cuando les hacen una. Los hospitales son muy precarios. Así que hay un cierto miedo», añadía para justificar que existieran tantas reticencias a esa operación.

Para otras intervenciones de urgencia también se necesita el consentimiento del esposo aunque la mujer se esté desangrando. «A veces el marido trabaja en el extranjero y tienes que esperar a que un familiar lo localice para obtener el permiso, mientras ves que la mujer se está muriendo y cada minuto que pasa cuenta», lamentaba Laia.

No tener hijos también es un drama. La función principal de la mujer es traer criaturas al mundo, a poder ser varones. Si una mujer no se queda embarazada a los pocos meses de casarse empiezan los problemas. El marido se plantea entonces contraer matrimonio con una segunda mujer. La poligamia es legal en Afganistán.

Eso es lo que le ocurrió a uno de los porteros de mi casa, Mama Jan, un hombre adorable de etnia hazara, servicial y

discreto, que no conseguía tener hijos. Llevó a su esposa a Irán para que los médicos la examinaran y la curaran, como si la infertilidad fuera algo que pudiera solucionarse con una varita mágica. No le dieron ningún remedio, de modo que a los pocos meses se casó con una segunda mujer. Tampoco hubo manera de que su nueva esposa se quedara embarazada, y Mama Jan acabó separándose de ella porque mantener a dos mujeres era demasiado caro. Mi teoría era que quien tenía problemas de infertilidad era él, y no sus esposas, pero este tema nunca se planteaba en Afganistán. Lo que me descolocaba más es que un hombre tan amable y solícito en mi casa tratara a sus esposas como si fueran un pañuelo de usar y tirar.

Esta mentalidad extremadamente patriarcal no era exclusiva de los hombres. Las mujeres pensaban igual. Najiba, una amiga afgana, trataba a sus nueras como si fueran esclavas, a pesar de que ella trabajaba en proyectos a favor de los derechos de las mujeres en una ONG. Sus tres hijos, con sus respectivas esposas y criaturas, vivían con ella y su marido en una casa de tres plantas. Me quedé a dormir allí en más de una ocasión. Las nueras apenas salían de la vivienda y se encargaban de todas las tareas domésticas. Cocinaban, limpiaban, cuidaban de las criaturas y atendían solícitas cualquier demanda de sus maridos y suegros. Eran como criadas. «Yo tuve que hacer lo mismo cuando me casé, así que ahora les toca a ellas», justificaba Najiba.

Muchas activistas afganas a favor de los derechos de las mujeres estaban solteras. Era fácil deducir por qué. Aun así continuaban dependiendo de un hombre: del padre, de un hermano... En Afganistán está mal visto que una mujer viva sola, aunque tenga formación, un trabajo bien remunerado y una carrera profesional meteórica. Siempre debe estar vinculada a una figura masculina. De hecho, ni en las lápidas de los cementerios hay nombres de mujeres. La fórmula que se

utiliza es «esposa de», «madre de» o «hija de» un hombre, por supuesto. La invisibilización de las mujeres es total. Va mucho más allá del burka, aunque eso sea lo más llamativo para nosotros en Occidente. Por cierto, el burka ya existía en Afganistán antes de que los talibanes llegaran al poder en 1996 e impusieran su uso obligatorio. Durante la presencia de las tropas internacionales pocas mujeres lo llevaban en Kabul o en otras grandes ciudades del norte, pero continuaba siendo habitual en el resto del país.

En las partidas de nacimiento tampoco aparecía el nombre de la madre. Solo el del padre. En 2017 un grupo de activistas afganas hicieron una campaña en redes sociales con el *hashtag* #WhereIsMyName? («¿Dónde está mi nombre?») para reivindicar la identidad de las mujeres. No sé si esa campaña influyó, pero un año más tarde el nombre de la madre ya aparecía en las partidas de nacimiento si la familia inscribía a la criatura en el registro civil.

Ese era otro de los inconvenientes: en el año 2019 solo el 42 por ciento de los nacimientos en Afganistán se registraban, a pesar de ser obligatorio. El hecho de no hacerlo no tenía consecuencias penales. Debido a esto muchos afganos no saben su edad, y dan respuestas vagas como esta: «Tendré unos treinta y tres o unos treinta y cinco años». Según la ley, las chicas no pueden casarse antes de los dieciséis años, pero ¿cómo controlarlo si no se sabe la edad?

VISOS DE MODERNIDAD

El presidente Ashraf Ghani tomó algunas iniciativas a favor de las mujeres, como por ejemplo el nombramiento de cuatro ministras en su Gobierno en 2015, una cifra reducida, teniendo en cuenta que había veinticinco carteras, pero que aun así

doblaba la representación femenina de anteriores gabinetes. La medida que llamó más la atención fue que la esposa de Ghani asumió un rol activo de primera dama desde que él llegó al ejecutivo, a diferencia de la mujer de su predecesor, Hamid Karzai, que apenas apareció un par de veces en público y nunca salió en una foto durante los trece años en que este fue presidente.

La esposa de Ghani ya se había dejado ver durante la campaña electoral, y el propio Ghani le dedicó unas palabras de agradecimiento cuando juró el cargo de presidente tras ganar los comicios en 2014. «Quiero aprovechar esta oportunidad para agradecer el apoyo de mi mujer, Bibi Gul», dijo. Fue un escándalo. En Afganistán no es habitual que un esposo reconozca a su mujer, y menos en público.

El nombre real de la nueva primera dama era Rula Ghani, pero se la conocía con el apodo persa de «Bibi Gul», que significa «señora de las flores». Era de origen libanés y conoció a Ghani durante sus años de estudiante en la Universidad Americana de Beirut. Hablaba inglés, francés, árabe y persa perfectamente. Sin embargo, tenía una pega: era cristiana, y muchos afganos consideraban que una «infiel» no debía residir en el palacio presidencial.

La animadversión contra ella fue en aumento cuando en las redes sociales se difundió una foto en la que aparecía sin velo, con el cabello al descubierto, al lado de su esposo en el palacio presidencial. Emulaba así a la reina afgana Soraya, que en 1920 impulsó tantos cambios a favor de la educación de las mujeres en Afganistán. A pesar de las críticas, Rula Ghani participaba en la vida pública y asistía a eventos institucionales. Muchas afganas veían en ella una esperanza para salir del ostracismo al que estaban condenadas.

Con la llegada de Ashraf Ghani al poder, en Kabul se multiplicaron los cafés y restaurantes de comida rápida de

estilo occidental donde chicos y chicas compartían mesa y charlas, en contra de las convenciones sociales. Eran la generación Z de Afganistán, jóvenes que habían nacido durante el primer régimen talibán o después de los atentados del 11-S en Estados Unidos. No querían saber nada de guerra ni de yihadistas. Les encantaba la música y la televisión, y tenían teléfonos móviles con conexión a internet. Por fin el acceso a la red era barato.

En 2008, en mi casa de Kabul pagábamos unos seiscientos dólares al mes por la conexión a internet vía satélite. En 2019, con la llegada de la fibra óptica a muchas provincias del país, el precio bajó drásticamente. La velocidad de conexión seguía sin ser ninguna maravilla, pero era suficiente para buscar amistades en las redes sociales.

Facebook era la red social que causaba más furor. Se convirtió en la nueva herramienta para ligar. «¿Cómo te llamas en Facebook?», era una pregunta recurrente de los chicos. Esperaban encontrar en la red las amigas que no podían tener en la vida real. Ellas solían colgar en su perfil la foto de una cantante o una actriz famosas, o la de una flor o un pájaro, para que no las identificaran. Los jóvenes también hacían trampas. Abrían cuentas de Facebook con un nombre femenino y una identidad falsa para intentar entablar amistad con chicas.

La red social también se convirtió en la principal fuente de noticias. Los jóvenes se informaban a través de Facebook, y expresaban allí sus sentimientos. Por ejemplo, cuando había un atentado, ponían crespones negros o banderas afganas en su perfil en señal de luto.

Qahar Ahamdi, de veinticuatro años, era uno de esos jóvenes de la generación Z. En 2019 se dedicaba a hacer tatuajes en Kabul. Toda una transgresión. Sus clientes eran hombres que básicamente se tatuaban los brazos con la imagen de algún animal: la cara de un lobo o un león. «Aprendí a tatuar en

Irán», me explicó el chico. El país vecino era la principal fuente de inspiración. Estaba a años luz de Afganistán.

También había chicas que cantaban rap, hacían grafitis, jugaban al fútbol o practicaban boxeo. Eran una minoría y una excepción, pero su simple existencia suponía un halo de esperanza y demostraba que los cambios sociales eran posibles en Afganistán, aunque de forma muy lenta.

En 2019 se inauguró una pequeña sala de cine en Kabul donde hombres y mujeres podían sentarse juntos para ver una película a oscuras. Eso también fue revolucionario. Fue iniciativa de la directora de cine afgana Diana Saqeb.

En el pasado, Afganistán había tenido hasta treinta y siete cines y teatros, dieciocho de ellos en Kabul. La gente iba en familia. Eran lugares de buena reputación. Toda esa oferta cultural se fue al garete a principios de los años noventa con la guerra de los muyahidines y el posterior régimen de los talibanes. Con la llegada de las tropas internacionales, a finales del 2001, el panorama cambió poco. En la capital había media docena de salas que languidecían sin apenas público. Las películas de estreno llegaban con dos años de retraso y las reposiciones podían ser de hace una década. La mayoría eran filmes indios, paquistaníes o estadounidenses que se proyectaban en versión original, sin subtitular, así que los espectadores no entendían ni una palabra. Las películas que tenían más éxito eran las de acción, porque era posible seguir el argumento sin comprender los diálogos.

La nueva sala se llamaba Ikhanom Cinema, tenía unas sesenta butacas y ofrecía cinco proyecciones a la semana. Una de ellas era solo para mujeres y otra para un público infantil. Fui a una sesión con Sameem, mi traductor. Se emocionó con tan solo entrar. Nunca había estado en un cine. La película en cartelera era *Hava, Maryam, Ayesha*, de la directora afgana Sahraa Karimi, premiada en el festival internacional de cine de

Venecia en 2019. El film denunciaba el drama de los matrimonios forzados en Afganistán.

Sameem salió impactado de la proyección. No podía creer que la pantalla mostrara con tanta precisión lo que él había vivido. «Todos los afganos tendrían que ver esta película», afirmaba. Posiblemente eso es lo que faltaba en Afganistán: más cultura.

Años 2020 y 2021
Los talibanes toman el poder

La Comisión Independiente Electoral publicó los resultados de las elecciones presidenciales el 18 de febrero de 2020. Es decir, casi cinco meses después de los comicios. Ashraf Ghani ganó con el 50,64 por ciento de los votos, mientras que Abdullah Abdullah quedó segundo, con el 39,52 por ciento. La participación fue la más baja de la historia del país. Solo el 18,8 por ciento del electorado acudió a las urnas. Eso significa que apenas el 9,4 por ciento votó *de facto* por Ghani. ¿Qué legitimidad tenía entonces para formar gobierno?

Abdullah se negó a aceptar los resultados. Ya había quedado segundo en las presidenciales del 2009 y en las del 2014, y no estaba dispuesto a continuar siendo el eterno perdedor. Así que anunció que esta vez él sería presidente sí o sí.

El mismo día y a la misma hora en que Ghani era investido jefe de Gobierno en una ceremonia en el palacio presidencial de Kabul, Abdullah juraba el cargo en un acto paralelo en otro punto de la capital. Las cadenas de televisión emitieron ambas ceremonias de forma simultánea. Parecía una locura. A la investidura de Ghani asistieron el enviado especial de Estados Unidos en Afganistán, Zalmay Khalilzad; el responsable de las tropas de la OTAN en el país, el general Scott Miller, y otros representantes diplomáticos. Abdullah, en cambio, no contó con apoyo internacional. A pesar de eso, y aunque suene surrealista, el país pasó a tener entonces dos presidentes.

En este contexto de total vulnerabilidad institucional, el 29 de febrero de 2020 Estados Unidos firmó un acuerdo con los talibanes «para traer la paz a Afganistán». Ese era el nombre literal del pacto, aunque no estaba claro que sirviera para

poner fin a las hostilidades. La firma se materializó en Doha, la capital de Qatar, donde los islamistas tenían una oficina política desde 2018.

Según el especialista alemán Thomas Ruttig, cofundador del prestigioso centro de estudios Afghanistan Analysts Network (AAN), el acuerdo con los talibanes fue una consecuencia más de la política del «*America first*» («América primero») que tanto caracterizó la presidencia de Donald Trump. El inquilino de la Casa Blanca se había comprometido en su campaña electoral de 2016 a retirar todas las tropas estadounidenses de Afganistán. En noviembre de 2020 volvía a haber elecciones presidenciales en Estados Unidos, y Trump necesitaba cumplir su promesa como fuera. ¿Qué mejor excusa para hacerlo que firmar un acuerdo de paz con los talibanes? De esta manera Estados Unidos dejaba Afganistán a merced de los radicales, aseguraba Ruttig.

En el acuerdo de paz, Washington proponía retirar todas sus tropas en un plazo de catorce meses. También se irían el resto de las fuerzas de la OTAN, los asesores militares y los contratistas de seguridad privada. Es decir, la policía y el ejército afganos se quedarían solos ante el peligro. Asimismo, Estados Unidos aceptaba retirar las sanciones a determinados líderes talibanes y liberar a cinco mil presos islamistas.

Por su parte, los talibanes prometían romper relaciones con Al Qaeda y otros grupos yihadistas e impedir que Afganistán se convirtiera en un santuario de terroristas que fueran una amenaza para Estados Unidos y sus aliados. El objetivo era evitar que asilaran a terroristas internacionales, como habían hecho con Osama bin Laden durante su primer régimen. Los radicales también aceptaban decretar un alto el fuego y sentarse a negociar con el Gobierno afgano, algo que no habían hecho hasta entonces ya que consideraban a este una simple «marioneta» de Estados Unidos.

Donald Trump presentó la firma del acuerdo de paz como si fuera el fin de la guerra en Afganistán. Nada más lejos de la realidad. De hecho, el 2 de marzo de 2020, dos días después de la rúbrica, el portavoz de los talibanes, Zabihullah Mujahid, declaró: «Nuestros muyahidines no atacarán a las fuerzas extranjeras, pero mantenemos las operaciones contra los efectivos de la Administración de Kabul». En otras palabras, los talibanes cesaron las hostilidades contra las tropas internacionales, pero aumentaron su ofensiva contra las fuerzas de seguridad locales, ahora blanco exclusivo de sus ataques. A pesar de eso, el Gobierno afgano se vio obligado a liberar a cinco mil talibanes de las cárceles en cumplimiento del acuerdo de paz. De esta manera los radicales aún ganaron más fuerza.

El 12 de septiembre de 2020 empezaron las negociaciones entre el Gobierno y los talibanes en Qatar. En ese momento faltaban menos de ocho meses para la retirada de las tropas de Estados Unidos y la OTAN, según el acuerdo de Doha. Si Washington incumplía el calendario, los talibanes también podían quebrantar su parte del pacto. Si lo respetaba, el Gobierno afgano partía de una posición de debilidad en la mesa de diálogo ya que debían llegar a un acuerdo de paz con los talibanes en menos de un año. En Afganistán hay un refrán que dice: «Los occidentales tienen reloj, los afganos tienen tiempo». Los talibanes sabían que el tiempo corría a su favor. Solo tenían que esperar.

La pandemia

La Corte Penal Internacional tomó una decisión histórica el 5 de marzo de 2020: dio luz verde para investigar posibles crímenes de guerra y contra la humanidad perpetrados por soldados de Estados Unidos y miembros de la CIA en

Afganistán. La fiscal jefe del tribunal, Fatou Bensouda, argumentó que había «base razonable» para creer que los militares habían cometido delitos de tortura. Afganistán ratificó en 2003 el estatuto de la Corte Penal Internacional, por lo tanto los crímenes cometidos por soldados extranjeros en su territorio pueden ser perseguidos por la justicia internacional. El problema es que Estados Unidos no lo hizo y, como era de esperar, la Casa Blanca se opuso a que interrogaran a sus tropas y servicios de espionaje.

Donald Trump aprobó una serie de medidas para dificultar la investigación. Ordenó que se denegara el visado para Estados Unidos a los funcionarios del Tribunal Penal Internacional, de manera que no pudieran viajar hasta allí y hacer los interrogatorios. También autorizó la aplicación de sanciones económicas, como bloquear las propiedades de estos funcionarios que estuvieran bajo jurisdicción estadounidense.

Todo esto, una clara obstrucción de la justicia, ocurrió durante el año de la pandemia. El único tema de interés informativo en ese momento era cómo frenar el coronavirus. Lo que pasara o dejase de pasar en Afganistán no interesaba a nadie. Lo comprobé el 12 de mayo de 2020. Ese día tuvo lugar una de las matanzas más deleznables que ha vivido Afganistán en las últimas dos décadas: unos terroristas irrumpieron en la maternidad de Médicos sin Fronteras en el barrio de Dasht-e-Barchi en Kabul y mataron una a una a las mujeres que esperaban para parir. Incluso dispararon contra una niña de solo dos horas de vida. Veinticuatro personas murieron y veinte más resultaron heridas. Las madres asesinadas eran hazaras, una etnia minoritaria en Afganistán descendiente de los mongoles que se caracteriza por tener los ojos rasgados. Los hazaras son musulmanes chiíes, a diferencia de la mayoría de la población afgana, que es suní. Nadie reivindicó el atentado.

A pesar de la brutalidad del ataque, la noticia pasó

inadvertida en los medios de comunicación españoles. Para mi sorpresa, no informaron de lo ocurrido o, si lo hicieron, fue de forma escueta. Si el atentado hubiera tenido lugar en un país occidental habría abierto todos los informativos. Pero en ese momento Afganistán nos quedaba demasiado lejos, no nos preocupaba, de la misma manera que tampoco nos preocupó el coronavirus mientras afectaba a los chinos en Wuhan y no había llegado a nuestras casas.

El coronavirus también causaba estragos en Afganistán. En Kabul, una ciudad de cinco millones de habitantes, había un único hospital público para los enfermos de covid, con solo doce camas de cuidados intensivos y cuatro respiradores. Apenas se hacían PCR, por lo que se desconocía el impacto real de la pandemia. Las muertes por covid no quedaban reflejadas en las estadísticas.

La otra pandemia

Cuando vivía en Afganistán, aprovechaba mis visitas a Barcelona para hacerme un chequeo médico anual. Iba al ginecólogo y al dentista, y me hacía un análisis de sangre. De esta manera esperaba no tener que acudir al médico en Afganistán. Cuando me trasladé a vivir a Barcelona, continué haciéndome revisiones cada año.

El 28 de enero de 2021 tenía hora para una mamografía. Estuve a punto de faltar. Hacía solo un año que me había hecho una y el coronavirus no invitaba a pisar un centro sanitario si no era estrictamente necesario. A pesar de eso fui a la cita. «¿Qué te cuesta?», pensé.

La cara se me transformó cuando la doctora me pidió que me desnudara de nuevo para hacerme una segunda mamografía. «He visto algo extraño en un pecho», me dijo. Instintivamente

mi cuerpo se puso en alerta. Se me nubló la vista y empecé a respirar con dificultad. «Tranquila, tranquila, bebe un poco de agua. No pasa nada», me decían las enfermeras que me sentaron en una silla al ver que perdía el equilibrio. Pero sí que pasaba. No sé cuántas mamografías me hicieron. Muchas. Y también dos biopsias. Cuando me dieron el resultado no lo entendí, porque estaba escrito con términos demasiado técnicos, pero ya deduje que no era nada bueno y rompí a llorar. El médico confirmó mis temores: tenía cáncer de mama, aunque me encontraba perfectamente y no tenía ningún bulto perceptible en el pecho. ¿Cómo era posible?

De la sorpresa inicial pasé al miedo. Un miedo diferente al que había vivido en Afganistán en situaciones de riesgo. Allí siempre creí que no me pasaría nada, que no tendría tan mala suerte de que me tocara a mí. En esta ocasión, en cambio, no existía ninguna variable que cambiara mi sino. Tenía un tumor y lo único que podía hacer era ponerme en manos de los médicos.

Tres semanas más tarde me hicieron una resonancia magnética para comprobar si el cáncer se había extendido a otras partes del cuerpo. Cuando me metieron en la máquina pensé que si fuera afgana y estuviera en Afganistán no viviría para contarlo. En Afganistán nunca he visto un aparato para hacer resonancias. Tampoco había mamógrafos hasta 2016. Ese año, tras quince de presencia extranjera en el país, llegó a Kabul la primera máquina para hacer mamografías gracias a una campaña contra el cáncer que impulsó Shinkai Karokhail, una de las diputadas más combativas y populares del Parlamento afgano. El mamógrafo estaba en un hospital privado, en el Instituto Médico Francés. Solo quien tenía dinero podía costearse las pruebas.

Shinkai tuvo cáncer de mama. Le extirparon los dos pechos. «Fui a una conferencia en Nepal y de paso me hice una

mamografía. Allí ya me detectaron algo extraño», me explicó. Shinkai aprovechaba sus viajes al extranjero como diputada para someterse a los controles médicos que no podía hacerse en Afganistán. En Nepal no le diagnosticaron un tumor, pero le dijeron que estuviera atenta a los posibles cambios que notara en sus pechos.

Al cabo de unas semanas se percató de que tenía un pecho más grande que el otro y recurrió a una de las mejores doctoras de Afganistán para que la examinara. «Me aseguró que no tenía nada, que podía estar tranquila». Así que la diputada se quedó tranquila hasta que viajó de nuevo al extranjero, a Washington, para participar en una ponencia. Allí uno de sus pezones empezó a sangrar. Le diagnosticaron un cáncer de mama que se había extendido a ambos senos. Los médicos no sabían si le podrían salvar la vida.

Contra todo pronóstico Shinkai se recuperó, regresó a Afganistán y en 2015 fundó la Afghanistan Cancer Foundation. Un año después inauguraba la primera unidad oncológica pública del país, con sesenta y seis camas. Faltaban, sin embargo, un laboratorio patológico, equipos de radioterapia y fármacos para la quimioterapia. Si a un paciente le hacían una biopsia, él mismo debía llevar la muestra a un laboratorio privado y pagar para que la analizaran. Lo mismo ocurría con la quimioterapia: era el enfermo quien tenía que comprar el tratamiento en la farmacia. Por eso el oncólogo Kifayatullah Safi reconocía que a los pacientes les compensaba viajar a Pakistán, India o Irán. El tratamiento les costaba lo mismo que en Afganistán y en esos países había más avances médicos.

Por suerte el cáncer que me detectaron no se había extendido a otras partes del cuerpo. Al menos los ganglios de la axila no parecían infectados, aunque los médicos no podían garantizarlo hasta que me operaran. Tampoco sabían si necesitaría radioterapia y quimioterapia. Lo que sí era seguro es que tenían

que hacerme una mastectomía. Así, de la noche a la mañana, mi vida cambió por completo. El 7 de abril de 2021 me amputaron un pecho. Tumbada en la camilla de camino al quirófano pensé en las contradicciones de la existencia: mientras tuve la depresión me quería morir, y ahora, en cambio, moría por vivir.

Tuve una suerte increíble. Los médicos extirparon todo el tumor y no necesité radioterapia ni quimioterapia. Eso sí, la intervención me dejó algunas secuelas al principio. Durante un tiempo no pude cargar peso, ni hacer movimientos bruscos, ni levantar demasiado el brazo derecho. Tampoco podía conducir porque sentía un dolor agudo en el pecho cada vez que intentaba cambiar de marcha. Además estaba el dolor emocional. Tenía que acostumbrarme a mi nuevo aspecto, y una ruptura sentimental pocas semanas después de la operación no ayudó a mi autoestima. Así, volví a caer en un estado de apatía y temí hundirme en una nueva depresión.

No sabría decir qué me daba más miedo, si la depresión o el cáncer. Una colega periodista que también sufrió ambas enfermedades aseguraba que la depresión era peor. «Cuando tienes cáncer los médicos te dicen qué tienes que hacer para curarte. Con la depresión estás tú sola con tus propios pensamientos», afirmaba. Yo no tengo una respuesta. Siempre he creído que, por suerte, tuve un cáncer fácil de tratar. En ese sentido me siento muy afortunada. Lo que sí que cambiaba era el estigma social. A diferencia de cuando sufrí la depresión, no tuve ningún inconveniente en decir que tenía cáncer de mama. Las muestras de cariño que recibí fueron abrumadoras.

La caída de Kabul

Para no volver a hundirme en un pozo tenía claro que

necesitaba mantenerme ocupada, relacionarme, salir de casa. Cualquier cosa menos quedarme sola y darle vueltas a la cabeza. Por eso pedí el alta voluntaria para volver al trabajo. En ese momento yo ya no era la responsable de Internacional del diario *Ara*. A raíz de la pandemia pasé a ser reportera de la sección de grandes reportajes e investigación, cosa que agradecí, era un trabajo que me gustaba más.

Pero tras la intervención quirúrgica volvía a estar en blanco y no me apetecía escribir. Cualquier otra persona me hubiera enviado a casa, pero la directora del *Ara*, Esther Vera, se mostró comprensiva y me encargó un trabajo fácil: preparar un suplemento especial sobre el veinte aniversario de los atentados del 11-S contra Estados Unidos. Lo podía hacer en el horario que me conviniera y sin prisas.

Por eso, en julio de 2021, entrevisté al periodista pakistaní Ahmed Rashid, autor de *Los talibán*. En el libro analiza los orígenes de este movimiento islámico y su organización política y militar. Rashid, posiblemente el mayor especialista en los talibanes, auguraba que Afganistán caería en una nueva guerra civil con la retirada de las tropas estadounidenses: los muyahidines y los radicales se enfrentarían, como lo habían hecho a final de los años noventa.

En Estados Unidos se había producido un terremoto político: Donald Trump ya no era presidente y el demócrata Joe Biden había llegado a la Casa Blanca. Eso, sin embargo, no cambió los planes. Biden mantuvo la decisión de Trump de retirar las tropas estadounidenses de Afganistán. Únicamente la aplazó unos meses. Anunció que los militares empezarían a irse en mayo y que para el 11 de septiembre no quedaría ni un solo soldado, coincidiendo con el veinte aniversario de los atentados contra las Torres Gemelas de Nueva York.

El anuncio de Biden fue el pistoletazo de salida para que los talibanes iniciaran una ofensiva sin precedentes en mayo y, en

cuestión de semanas, se hicieran con el control de casi la mitad del país. Eso provocó desplazamientos de población y que muchas familias buscaran refugio en Kabul para huir de la guerra. En el norte, un millar de soldados afganos desertaron. Era el preludio de lo que pasaría poco después.

Ya entonces Jawad Hossaini, un fisioterapeuta afgano que trabajaba en Herat y que me hacía de traductor cada vez que yo viajaba hasta allí, me pidió ayuda. Los talibanes estaban a pocos kilómetros de Herat y temía que lo arrestaran si entraban en la ciudad. Contacté con un par de abogados canadienses especializados en derecho de asilo, pero me contestaron que no podían hacer nada por Jawad y su familia. El 12 de agosto de 2021 los temores del fisioterapeuta se hicieron realidad: los talibanes invadieron Herat, la tercera ciudad más grande de Afganistán.

Ese mismo día un alto cargo del Ministerio de Defensa español me llamó: «Estamos preparando un vuelo militar para evacuar a personal afgano que ha trabajado para nosotros. ¿Necesitas sacar a alguien?», me preguntó. Sus palabras me parecieron un regalo caído del cielo. Claro que necesitaba evacuar a gente. Por ejemplo, a Jawad y su familia, pero también a otras personas que tanto me habían ayudado mientras viví en Afganistán y que no podía dejar en la estacada.

Tres días más tarde, el 15 de agosto de 2021, los talibanes entraron en Kabul sin pegar ni un solo tiro. Las fuerzas de seguridad afganas desertaron en masa tras quedarse sin el apoyo aéreo de Estados Unidos. Hasta entonces los helicópteros norteamericanos les habían defendido de los ataques talibanes. Yo, sinceramente, habría hecho lo mismo. No me hubiera quedado a luchar por un gobierno formado por una pandilla de corruptos o criminales de guerra.

El presidente Ashraf Ghani huyó precipitadamente del país

en helicóptero con al menos quinientos mil dólares en efectivo y viajó a Emiratos Árabes Unidos. También se fueron los señores de la guerra, que Ahmed Rashid había vaticinado que plantarían resistencia a los talibanes. No lo hicieron.

El 15 de agosto por la noche, después de que los talibanes tomaran Kabul, miles de afganos desesperados asaltaron el aeropuerto para subir a los aviones comerciales aparcados en la pista y huir del país. Algunos hasta se encaramaron en las alas de las aeronaves militares. No querían quedarse en Afganistán. No veían futuro con los talibanes. Durante las dos semanas siguientes la avalancha de gente continuó. Las embajadas occidentales también evacuaron a todo su personal. No dejaron ni a un solo representante diplomático.

Decenas de afganos me llamaron, me enviaron correos electrónicos, mensajes de WhatsApp, Facebook... A algunos los conocía, pero a la gran mayoría no. Todos querían que les ayudara a salir de allí. Me entrevistaron en infinidad de medios de comunicación y empecé a publicar en el *Ara* a diario. Incluso el presidente de la Generalitat, Pere Aragonès, me telefoneó para preguntarme qué podía hacer el Gobierno catalán por la población afgana. Estaba tan solicitada y desbordada que tuve que dejar de lado mis problemas personales y ponerme las pilas.

Afganistán, que en los últimos años no había suscitado ningún interés informativo, era de golpe el foco de atención de todos los medios de comunicación. De la noche a la mañana aparecieron supuestos expertos que pontificaban sobre un país que no habían pisado en su vida o hablaban de los muchos derechos que las afganas perderían con los talibanes, cuando las mujeres allí siempre han sido ciudadanas de segunda. También surgieron espontáneos de todo tipo que decían estar conmocionados con lo ocurrido y elaboraban sus propias *listas de Schindler*, es decir, listados con nombres de afganos y

afganas que, según ellos, era necesario evacuar porque su vida corría peligro.

Yo observaba todo el despliegue informativo y esa ola de solidaridad repentina con perplejidad y escepticismo. ¿Cuánto duraría?

Los países de la OTAN organizaron una evacuación de urgencia. En cuestión de quince días, sacaron del país a más de cien mil personas en vuelos militares. La mayoría eran afganos cuya vida estaba en riesgo, pero también diplomáticos o civiles extranjeros. La operación se caracterizó por el caos y puso en tela de juicio el poder de Estados Unidos. ¿Por qué no habían evacuado a toda esa gente antes? Habían tenido más de seis años para hacerlo desde que la mayoría de las tropas internacionales se retiraron de Afganistán a finales de 2014.

Un minuto antes de la medianoche del 31 de agosto, el último avión militar estadounidense despegó del aeropuerto de Kabul. De esta manera Estados Unidos ponía fin a la guerra más larga de su historia, y volvía a dejar Afganistán en manos de los talibanes. Millares de muertos, millones de dólares invertidos y veinte años de dolor y sacrificio, para volver a la casilla de salida.

Viaje al Afganistán de los talibanes

Lo último que hicieron los estadounidenses antes de abandonar el país fue dejar inoperativo el aeropuerto de Kabul. Destruyeron los radares. Durante días ningún avión pudo aterrizar o despegar. No me quedó más remedio que viajar a Afganistán por tierra. Era la primera vez desde el 2014 que realmente tenía ganas de regresar, para ver cómo era el país con los talibanes.

El 14 de septiembre, casi un mes después de la llegada de los

islamistas al poder, crucé sola a pie el paso fronterizo de Torkham, entre Pakistán y Afganistán, con una pequeña maleta de mano. Debido a la operación reciente no podía cargar más peso. No tenía ni idea de cómo recibirían los talibanes a una mujer periodista. Los oficiales pakistaníes revisaron el equipaje y me hicieron un montón de preguntas sobre el dinero que llevaba encima. Declaré tener dos mil dólares en efectivo, aunque en realidad tenía diez mil. No sabía cuánto dinero necesitaría para salir de Afganistán, ni los imprevistos que me encontraría. En cambio, para mi sorpresa, al otro lado de la frontera los talibanes tan solo apuntaron mi nombre y el de mi periódico en una libreta y me dejaron pasar sin siquiera sellarme el pasaporte.

En territorio afgano, mi amigo Wahid y su yerno Rahim me esperaban con un coche para llevarme a Kabul. Debíamos recorrer unos 225 kilómetros, un trayecto que ya hice en el año 2000, durante mi primer viaje a Afganistán. Entonces tardé más de ocho horas. La carretera estaba llena de socavones como consecuencia de la guerra. Esta vez, en cambio, el viaje nos llevó la mitad de tiempo. La presencia internacional había servido para reconstruir el país y mejorar algunas de sus infraestructuras. Todo ese legado lo disfrutaban ahora los talibanes.

En Kabul, la característica bandera talibán de color blanco ondeaba en todos los ministerios, en las rotondas y en algunos parques. También había una bandera de dimensiones descomunales pintada en el muro exterior de la antigua embajada de Estados Unidos, para dejar claro que ahora eran los talibanes los que mandaban y no los norteamericanos. Incluso los vendedores ambulantes ofrecían en las calles banderolas con el logo islamista porque si algo han aprendido los afganos durante tantos años de guerra es a poner la capa según sopla el viento.

Los milicianos talibanes armados con kaláshnikov estaban por todas partes en la capital. Realmente impresionaba verlos con sus turbantes, barbas y melenas. Parecían sacados de una película. Ahora eran ellos los responsables de la seguridad. Estaban apostados en la entrada de todos los edificios oficiales, hospitales y mezquitas, e incluso se encargaban de la protección del lujoso hotel Serena, el mismo que habían atacado en el pasado en diversas ocasiones. Se apoderaron de todos los vehículos, equipos y armas que las tropas internacionales habían proporcionado a las fuerzas de seguridad, y se movían con las camionetas *pickup* de la antigua policía y ejército afganos. De hecho, algunos talibanes parecían militares profesionales: iban pertrechados con uniforme, chaleco antibalas, cartuchera, rodilleras de protección, casco militar con cámara integrada y fusil M16 estadounidense.

El tráfico había disminuido ligeramente y era más fácil circular por la capital. Por las calles había movimiento de gente, se veían mujeres paseando con un simple velo en la cabeza, sin necesidad del burka, y los comercios estaban abiertos. No parecía que hubiera grandes cambios en la ciudad. Lo único que llamaba la atención es que las fotografías de rostros que antes se veían en los escaparates de algunas peluquerías y centros de estética ahora estaban cubiertas con espray. También habían sustituido los bonitos grafitis a favor de la paz, la educación y los derechos de la mujer con los que el grupo de artistas afgano ArtLords había decorado paredes de la capital durante los últimos años, con máximas a favor del Emirato Islámico o en contra de la ocupación estadounidense.

Shor Bazar era una calle emblemática de Kabul donde la mayoría de los músicos tenían su estudio, los fabricantes de instrumentos tradicionales, sus talleres, y donde los cantantes impartían clase. Todos esos establecimientos habían cerrado o se habían reconvertido en barberías, talleres de confección o

cualquier otro negocio que no tuviera nada que ver con la cultura. «Los talibanes no han prohibido la música oficialmente, pero todos sabemos cómo se las gastan», me dijo Ahmad, un cantante que se acercó como si me quisiera vender droga, hablando entre dientes y vigilando que no hubiera una patrulla talibán cerca, cuando en realidad solo pretendía ofrecerme sus servicios como músico. En su primer régimen los talibanes destruyeron los instrumentos musicales y persiguieron a cantantes y músicos. Por eso los profesionales preferían no arriesgarse y dedicarse a otra cosa.

«Los periodistas extranjeros son bienvenidos en Afganistán, así que puede informar de lo que quiera e ir donde desee», me dijo Shafiq, el afable asistente del portavoz de los talibanes, en su oficina del Ministerio de Información y Cultura en Kabul tras entregarme una carta oficial que decía que las autoridades debían facilitarme el trabajo allá donde fuera. Me sorprendió. Realmente era más fácil trabajar como periodista con los talibanes que con el Gobierno anterior.

Los milicianos se dejaban fotografiar sin problemas y permitían que los reporteros extranjeros subieran a sus vehículos militares para filmarlos mientras daban vueltas por Kabul armados hasta los dientes, como si fuera un parque temático. Incluso estaban abiertos a entrevistas, aunque la mayoría eran parcos en palabras. «Hace cuatro años que trabajo para el Emirato», me dijo un talibán de veinte años que hacía guardia en la entrada de la zona de las embajadas, donde antes estaban el cuartel general de la OTAN y las principales legaciones occidentales y ahora solo había edificios vacíos. «Quiero un gobierno islámico de verdad en Afganistán y odio a los extranjeros», siguió explicando, mientras yo ponía cara de póquer.

Algunos talibanes admitían no saber leer ni escribir y haberse formado únicamente en escuelas islámicas. De hecho,

la mayoría solo hablaban pastún, una de las dos lenguas oficiales de Afganistán, y tenían serias dificultades para comunicarse con la población en Kabul, que principalmente habla darí. Para muchos era la primera vez que estaban en la capital. Si habían ido antes era de forma puntual para perpetrar un atentado.

Los talibanes dejaron en libertad a los presos de las cárceles y ocuparon las casas de los señores de la guerra que habían desempeñado cargos en las instituciones afganas. Eran mansiones con todo tipo de lujos, construidas con el dinero recibido de la comunidad internacional. También pasaron a dirigir todos los ministerios, pero los funcionarios del antiguo Gobierno continuaron trabajando y teniendo las mismas responsabilidades. Unos y otros mantenían una relación aparentemente cordial. Los talibanes necesitaban a los funcionarios para garantizar el funcionamiento de la Administración, y los funcionarios a los talibanes para conservar su empleo. El interés era mutuo.

Más restricciones para las mujeres

Había una única cosa sobre la que los periodistas teníamos prohibido informar en el Afganistán de los talibanes: las manifestaciones de mujeres o de la disidencia. El 30 de septiembre de 2021 un grupo de mujeres convocaron una protesta en Kabul para reivindicar sus derechos. La organizaron de forma clandestina. Yo me enteré porque formaba parte de un grupo de WhatsApp de activistas afganas. No era la primera manifestación que organizaban. Anders Somme Hammer, un colega noruego que había asistido a una, me advirtió que fuera con cuidado porque los talibanes reprimían las protestas sin contemplaciones y agredían a los periodistas. A él le habían

golpeado y retenido durante un buen rato. Me planteé si debía ir o no. Me daba miedo que me dieran un golpe en el pecho, que aún tenía delicado.

Finalmente decidí asistir porque el objetivo de mi viaje era informar sobre las violaciones de derechos humanos de los talibanes. No tenía ningún sentido quedarme en el hotel. Además, mi traductor estaba dispuesto a acompañarme a pesar del riesgo. Debo admitir que fui a la protesta con el corazón a mil.

La manifestación estaba convocada para las ocho de la mañana, pero media hora antes ya había en la zona más de una decena de camionetas repletas de talibanes armados y varias calles estaban cortadas. Menos mal que la protesta era clandestina, pensé. Allí había más talibanes que manifestantes. De hecho, solo se presentaron seis mujeres. También vi a otros periodistas extranjeros, cosa que me tranquilizó.

Una de las manifestantes llevaba una pancarta doblada. Dudé que tuviera el valor de desplegarla. Al menos yo no lo habría hecho con tantos talibanes armados, pero para mi sorpresa la extendió. Las otras mujeres también sacaron entonces carteles con eslóganes reivindicativos. Los mostraron apenas un minuto porque los talibanes se los arrebataron de malas maneras, aunque fue suficiente para que los reporteros tomáramos algunas imágenes. Los radicales, enfurecidos, intentaron quitarnos las cámaras y a un fotógrafo incluso le dieron un golpe de culata. Algunos echamos a correr. Otros forcejearon. Un talibán disparó al aire, y todos nos quedamos quietos.

«¿Vosotros veis a algún periodista afgano? ¿Verdad que no? Eso quiere decir que la manifestación es ilegal. De la misma manera que en vuestros países no informáis de manifestaciones ilegales, aquí tampoco podéis hacerlo», nos amonestó como si fuéramos niños el mulá Nasratullah, que dijo ser el responsable del servicio de inteligencia talibán en Kabul. Nos retuvo un

rato, nos advirtió que no lo volviéramos a hacer y nos dejó marchar.

Las mujeres protestaban por la pérdida de derechos. Con la llegada de los islamistas al poder, las casas de acogida para mujeres maltratadas fueron clausuradas. Había pocas en el país y pertenecían a ONG locales. Quienes conseguían una plaza allí eran contadas. Ahora ni siquiera esas pocas afortunadas tenían adónde ir. Las dependencias del antiguo Ministerio de la Mujer, otro lugar al que acudir a pedir ayuda, se habían reconvertido en la sede del nuevo Ministerio de la Propagación de la Virtud y la Prevención del Vicio, encargado de imponer la interpretación talibán de las reglas islámicas.

Los talibanes también decretaron que el grueso de las funcionarias no acudiera a sus lugares de trabajo, aunque hicieron excepciones en algunos ministerios, como el de Salud Pública o Educación. Lo mismo ocurrió en otros sectores. Oficialmente las mujeres no tenían prohibido trabajar, a diferencia de lo que había ocurrido durante el primer régimen talibán, pero en la práctica muchas fueron expulsadas de sus empleos.

Sin embargo, lo que más protestas suscitaba eran las restricciones en la educación. Tras varias semanas en las que los centros estuvieron cerrados, los institutos de educación secundaria reabrieron únicamente para los chicos. Las niñas solo podían cursar hasta sexto de primaria. El portavoz talibán, Zabihullah Mujahid, dio a entender que se trataba de una situación temporal porque estaban reorganizando las clases para que chicas y chicos fueran a aulas separadas. Una justificación que no tenía ningún sentido ya que los jóvenes de distinto sexo nunca compartieron aula en los institutos públicos durante los años en que las tropas internacionales estuvieron en el país.

Los talibanes arguyeron lo mismo para justificar el cierre de

las universidades públicas, pero en realidad había otra razón de peso. La mayoría de los profesores habían huido del país durante la evacuación estadounidense y no había quién impartiera las clases.

«No tengo noticia de que los talibanes hayan prohibido ninguna asignatura. Pero, para ser sincera, con el anterior Gobierno ya había muchas materias que no se impartían. Como Educación Física, porque la mayoría de las escuelas no tenían instalaciones deportivas, o Inglés, porque no había profesores preparados», me explicó por teléfono la activista afgana Rangina Hamidi, que fue ministra de Educación en el Gobierno de Ashraf Ghani. Intentaba desmitificar la imagen idílica que algunos medios de comunicación daban sobre el Afganistán anterior a los talibanes. Ella era especialmente crítica y no tenía pelos en la lengua.

Por ejemplo, denunciaba que durante el Gobierno anterior los alumnos de primaria y secundaria tuvieran solo dos o tres horas de clase al día y cursaran nueve o más asignaturas. «La prioridad tendría que haber sido que los niños aprendieran a leer y a escribir, y matemáticas. Mi propuesta era centrarnos en las necesidades educativas básicas para conseguir los mejores resultados con los recursos que teníamos y las horas de clase que se hacían». Pero no tuvo tiempo de materializarlo porque fue ministra durante poco más de un año. En agosto de 2021 huyó del país con la llegada de los talibanes.

En definitiva, la educación en Afganistán siempre tuvo importantes carencias. En 2021, tras dos décadas de presencia extranjera en el país, el 43 por ciento de la población continuaba siendo analfabeta, según informes de la Unesco. Con los talibanes, ese porcentaje aún aumentaría más.

Castigo público

Los vuelos domésticos se retomaron poco a poco, y viajé de Kabul a Herat. En el aeropuerto de Kabul, hombres fornidos, de piel morena y vestidos al estilo occidental vigilaban que los trabajadores escanearan correctamente el equipaje de mano. También controlaban la entrada de los pasajeros a los aviones. Me sorprendió porque a simple vista parecían estadounidenses. Me acerqué a uno de ellos para preguntarle de dónde era. «De Qatar», me contestó. Qatar ayudaba a los talibanes con la gestión del aeropuerto de la capital.

Herat era uno de los motores económicos del país. Tenía un polígono industrial que albergó hasta cuatrocientas fábricas entre 2005 y 2010. El declive económico empezó en 2014, con la retirada de la mayoría de las tropas internacionales, pero la estocada final fue con los talibanes. Por ejemplo, la fábrica de patatas fritas Mana, famosas en todo Afganistán, redujo su plantilla de 400 a 112 trabajadores con la llegada de los islamistas al poder. «Ya no hay mercado para nuestros productos», lamentaba su director, Humayun Mohmand, que me recibió en su despacho con una taza de té y un plato a rebosar de patatas fritas. Afganistán había caído en una profunda crisis económica y lo último que la gente compraba en esas circunstancias eran bolsas de patatas.

El presidente de la Cámara de Industrias y Minas de Herat, Hamidullah Khadem, atribuía la crisis al hecho de que centenares de miles de personas se habían quedado sin trabajo: soldados, policías, profesores, periodistas… Era una bola de nieve. Pero también al bloqueo financiero impuesto por la comunidad internacional al nuevo régimen talibán, que dificultaba hacer transferencias internacionales y, en consecuencia, importar materias primas. Todas las reservas de Afganistán en el extranjero quedaron congeladas. Eso hizo que la Administración no tuviera dinero y los funcionarios no cobraran durante meses. Sin embargo, continuaron yendo al

trabajo por temor a perderlo.

Los bancos tenían poco efectivo e impusieron un corralito: solo era posible sacar veinte mil afganis a la semana, unos doscientos euros. Cada día se formaban colas kilométricas delante de las entidades financieras de todo el país. La gente tenía miedo de no recuperar su dinero o de que sus ahorros se quedaran en nada. La moneda afgana no dejaba de devaluarse. «He estado ahorrando toda mi vida y ahora no puedo ni sacar mi dinero para huir de este país», me dijo rompiendo a llorar Nayera Kohistani, que hacía cola delante de un banco. Era profesora y se había quedado sin trabajo.

El día que aterricé en Herat me encontré con una situación inesperada. Los talibanes colgaron los cuerpos sin vida de cuatro presuntos secuestradores en plazas públicas de la ciudad y los mantuvieron expuestos al sol durante horas. Era la primera vez que hacían algo así desde su llegada al poder en agosto de 2021, aunque ese castigo había sido habitual en su primer régimen. En Herat, los secuestros de empresarios locales por bandas criminales estaban a la orden del día. Los raptaban durante unas horas o unos días para conseguir el rescate. Se habían convertido en uno de los principales problemas de la ciudad durante los últimos años, y esta era la manera elegida por los talibanes para dar una lección a todo el mundo.

En una de las plazas, uno de los cadáveres colgaba completamente ensangrentado de una grúa y tenía un cartel enganchado en el pecho que decía: «Todos los secuestradores sufrirán este castigo». No me impresionó verlo porque estaba tan rígido que parecía un maniquí, pero lo que sí me chocó es que centenares de hombres acudieran hasta allí para contemplar el macabro espectáculo. Muchos filmaban la escena con sus móviles, y la mayoría estaban satisfechos de que los supuestos criminales hubieran sido ajusticiados. «Me parece muy bien lo que han hecho los talibanes y tendrían que hacerlo

más a menudo. Así cambiarían las cosas», me dijo Abdul Tawa, un empresario de la construcción de treinta y cuatro años. «Si el anterior Gobierno hubiera hecho lo mismo, ahora no tendríamos tantos problemas», opinó Qabir Ahmad, un militar retirado de cincuenta y siete años.

Unos cuantos talibanes hacían guardia al pie de la grúa. «La operación ha tenido lugar a las diez de la mañana. Hemos matado a un secuestrador y hemos capturado a los otros tres», me dijeron para justificar que el cuerpo estuviera en esas condiciones lamentables. Me permitieron hacer fotos, a pesar de que yo era la única periodista extranjera y la única mujer.

A media tarde la grúa empezó a dar vueltas por la ciudad con el cuerpo colgando, mientras decenas de hombres la seguían en motocicleta para filmar la dantesca escena. Los afganos estaban hartos de tanta impunidad y también les iba el morbo. Puede que los talibanes se esforzaran por dar una imagen de moderación, pero estaba claro que seguían siendo tan bestias como siempre.

Años 2022 y 2023
Olvido internacional

Con el inicio de la guerra en Ucrania en febrero de 2022, Afganistán cayó en el olvido. Los medios de comunicación dejaron de hablar de los talibanes y de los derechos de las mujeres afganas. La gran solidaridad exhibida hacia los refugiados afganos también desapareció por arte de magia. Ahora la gente se movilizaba, pero por otros refugiados más cercanos a nosotros culturalmente: los ucranianos.

Para mí Ucrania tenía cierto paralelismo con Afganistán. Las tropas rusas habían invadido el país, y los estados de la Unión Europea apoyaron al Gobierno ucraniano con el envío de armas. En Afganistán, en 1979, miles de soldados soviéticos también ocuparon el país y la respuesta de Estados Unidos fue similar: armó a los muyahidines, que entonces se consideraban «los buenos de la película», los únicos que podían frenar el avance de la URSS. Años más tarde esos mismos muyahidines contribuyeron a la destrucción de Afganistán y cometieron todo tipo de atrocidades. Las guerras son así: las armas enviadas para un objetivo pueden acabar en manos de cualquiera y utilizarse para otro.

La directora del diario *Ara* me propuso ir a Ucrania a informar sobre la guerra. Al principio no supe qué contestar. Me asaltaron un montón de dudas. Durante los casi ocho años que viví en Afganistán prioricé mi vida profesional frente a la personal, y me llevé un fiasco. Mi esfuerzo no me garantizó una estabilidad laboral y arrastré secuelas psicológicas durante años. Por eso, una vez restablecida en Barcelona, me prometí a mí misma que mi vida personal sería siempre lo primero. «Mònica, te están pidiendo que vayas a Ucrania unas semanas,

no que te quedes allí toda la vida», me dijo mi amigo Gervasio Sánchez para hacerme entender que tal vez lo estaba sobredimensionando. Y tenía toda la razón. Ucrania no tenía por qué ser como Afganistán.

Tras mi viaje al Kabul de los talibanes en septiembre de 2021, recuperé toda la movilidad y fuerza del brazo derecho gracias al deporte y a sesiones de fisioterapia. Lecturas tan motivadoras como el libro de Irene Villa *Los ochomiles de la vida* me ayudaron emocionalmente. Si Irene Villa, que había perdido las dos piernas en un atentado de ETA, lo había superado, ¿no iba a superar yo la amputación de un pecho?

En diciembre de 2021 me hicieron una segunda operación de reconstrucción del seno, y di algunos pasos atrás física y anímicamente. Durante los meses posteriores no podía vestir ropa ajustada y, por supuesto, no podía ponerme un chaleco antibalas. Algo que, por cierto, oculté a la directora del *Ara* porque no me habría permitido ir a Ucrania. Si la situación se ponía muy fea y tenía que escoger entre mi pecho o mi vida, lógicamente me decantaría por mi vida y me pondría el chaleco. Así que al final acepté ir a la guerra. Tuve la suerte de viajar con un colega, el periodista freelance David Meseguer, que entonces trabajaba para el diario vasco *Gara* y que me ayudó a cargar con mi equipaje cuando yo no podía.

En Ucrania había zonas totalmente arrasadas por la guerra. Por ejemplo, la localidad de Irpín, a pocos kilómetros de Kiev, la capital. O barrios enteros de la ciudad de Járkov, en el noreste. Ese paisaje de destrucción me recordaba al Kabul que conocí en el año 2000. Allí también había fachadas con marcas de metralla o decenas de edificios derruidos, con boquetes en las paredes y tejados hundidos como consecuencia del impacto de los proyectiles. Otras ciudades ucranianas, como Leópolis o Kiev, continuaban casi intactas. Entonces hacía menos de un mes que la guerra había empezado en esa zona de Ucrania. En

Afganistán llevaba más de cuatro décadas.

En 2019, coincidiendo con el cuarenta aniversario del inicio del conflicto en Afganistán, entrevisté a la escritora Ana Briongos y al filósofo Josep Ramoneda, que viajaron al país por carretera en los años sesenta del siglo pasado, cuando era un destino turístico. Briongos vivió allí después de forma intermitente, entre 1968 y 1978. «En Afganistán iba como en Barcelona: con tejanos, camisetas de manga corta e incluso algún vestidito por encima de la rodilla. Muchas afganas, sobre todo las estudiantes de instituto y de la universidad, también vestían al estilo occidental y sin pañuelo en la cabeza», me explicó la escritora, que narró su experiencia en el libro *Un invierno en Kandahar*. Actualmente sería impensable que una mujer llevara manga corta o mostrara las pantorrillas en Afganistán, aunque fuera extranjera.

Ramoneda me aseguró que en su primera visita nunca se habría imaginado que allí podría haber una guerra: «Era un lugar tranquilo y seguro. Visitamos los Budas gigantes de Bamiyán e incluso dormimos en tiendas de campaña en medio del campo». Ahora, en cambio, solo se asocia a guerra y radicalismo islámico. Es increíble cómo un conflicto cambia un país. Por esa razón a mí no me cabe en la cabeza que se alimenten las guerras con armas, en lugar de intentar detenerlas por la vía diplomática.

Veto a los periodistas en el Afganistán de los talibanes

En 2022 los talibanes reabrieron las universidades públicas con una condición: chicas y chicos no podían compartir aula, ni siquiera coincidir en el campus. En consecuencia, en la Universidad de Kabul se asignaron unos días de clase para las chicas y otros para los chicos. Ellas iban los lunes, miércoles y

sábados. Y ellos, los martes, jueves y domingos. Las clases que antes hacían en seis días ahora se concentraban en tres. Los institutos de educación secundaria, en cambio, continuaron cerrados para las jóvenes.

En agosto, coincidiendo con el primer aniversario de los talibanes en el poder, Afganistán reapareció en los medios de comunicación pero de forma fugaz, durante pocos días. También resultó efímera la presencia de las mujeres en las universidades. En octubre, los talibanes les prohibieron matricularse en las carreras de periodismo, ingeniería, veterinaria, agricultura y geología. Y, a partir de diciembre, las vetaron directamente de todos los estudios superiores. Ese mismo mes también les prohibieron trabajar para ONG nacionales e internacionales.

A principios de diciembre la Asamblea de las Naciones Unidas había rechazado por segunda vez que los talibanes representaran a Afganistán ante la ONU. El representante permanente del país continuaba siendo Naseer Faiq, un miembro del anterior Gobierno. Con las nuevas restricciones a las mujeres, los talibanes demostraban que, aunque su régimen no fuera reconocido por la comunidad internacional, quienes realmente mandaban dentro de sus fronteras eran ellos.

La mayoría de las embajadas de Afganistán en el extranjero también continuaban en manos del Gobierno anterior. Los talibanes solo controlaban las legaciones de las capitales de Rusia, China, Pakistán, Irán, Qatar y Turkmenistán. Así se daba la contradicción de que, aunque los radicales eran las autoridades *de facto* en su territorio, apenas disponían de representación diplomática en el extranjero. En cambio, el Gobierno de Ashraf Ghani, que ya no tenía ningún poder, seguía siendo el titular de casi todas las embajadas y consulados.

La embajada de Afganistán en Madrid no era una excepción.

A principios de 2023 llamé para informarme de los pasos a seguir para obtener un visado de periodista para viajar a Afganistán, y me aseguraron que el trámite era fácil y rápido. «¿Entonces los talibanes siguen sin poner trabas a los periodistas extranjeros para trabajar?», pregunté. «No lo sabemos. Los funcionarios del Ministerio de Asuntos Exteriores nos facilitan el visado. Nosotros no estamos en contacto con los talibanes», me contestó Noor Ayoubi, uno de los trabajadores de la embajada. La cuenta bancaria de la legación ya no estaba operativa y Noor me pidió que enviara por correo postal cien euros dentro de un sobre para pagar el visado. Dinero que, supongo, contribuiría a cubrir los gastos de una embajada que no conseguí aclarar quién financiaba. El visado lo obtuve en un tiempo récord de solo cuatro días. Nunca antes había tardado tan poco.

En marzo de 2023 viajé de nuevo a Afganistán. No me hacía especial ilusión ir, pero en los últimos meses habían sucedido demasiadas cosas en el país y desde Barcelona era difícil saber qué estaba pasando realmente. Me sentía con la obligación moral de volver para informar con conocimiento de causa. Nunca he entendido a los periodistas que han estado en Afganistán en contadas ocasiones y hablan desde la distancia como si fueran expertos, a pesar de que la situación allí puede cambiar radicalmente en cuestión de meses.

En marzo también empezaba el curso escolar en buena parte de Afganistán y era importante estar allí para ver si las adolescentes serían readmitidas en las aulas. Además, se habían retomado los vuelos internacionales a Kabul, por lo tanto esta vez sería mucho más fácil viajar a la capital.

El viaje fue en efecto más fácil, pero extremadamente caro. El vuelo desde Barcelona costó 1.800 euros. Esperaba ir casi sola en el avión porque ¿quién quiere viajar al Afganistán de los talibanes? Sin embargo, delante de los mostradores de

facturación de la compañía afgana Kam Air, en el aeropuerto de Dubái, me encontré una cola larga de hombres con maletas y bultos enormes. Todos vestían el tradicional blusón ancho y pantalón bombacho musulmán, y llevaban un casquete islámico en la cabeza. Algunos también lucían una larga cabellera, típica de los talibanes. En la sala no había ninguna otra mujer, y me sentí tan observada e intimidada que allí mismo abrí la maleta y me puse el *chapán*, la túnica negra hasta los pies que siempre he vestido en Afganistán. Era la primera vez que me «disfrazaba» antes de aterrizar en el país.

El vuelo de Kam Air que enlazaba Dubái con Kabul iba casi lleno. Y eso que era un avión de los grandes, de los que hacen vuelos transoceánicos. Las filas delanteras del avión estaban reservadas para las pocas mujeres, niños y extranjeros que viajábamos. «Trabajamos para la ONU y vivimos en Kabul. Bueno, si a eso se le puede decir vivir...», me dijeron otras dos extranjeras que iban en el vuelo, dando a entender que siempre estaban encerradas en el recinto de las Naciones Unidas. Dos azafatas nos sirvieron la comida, cosa que me sorprendió. ¿Entonces los talibanes no eran tan estrictos y las mujeres podían trabajar?

En el aeropuerto de Kabul también había alguna trabajadora mujer y los funcionarios que revisaban los pasaportes eran los de la Administración anterior, así que me estamparon el sello de entrada sin hacerme ni una pregunta. La recogida de equipajes continuaba siendo tan caótica como siempre, y los controles igual de laxos. Los operarios que debían revisar las maletas estaban distraídos hablando y miraban a cualquier parte excepto la pantalla del escáner. Si lo hubiera sabido me habría llevado jamón serrano envasado al vacío, ¡me hubiera sido muy útil durante el Ramadán! El mes sagrado del islam estaba a punto de empezar y los restaurantes de Kabul estarían cerrados durante el día.

En el hotel donde me alojé también eran mujeres las que limpiaban las habitaciones, y me dieron ganas de coger la maleta y regresar a casa. ¿Qué hacía allí si aparentemente no había cambiado nada? ¿Para qué volvía a un país que tanto me alteraba? Sin embargo, dejé la maleta y me fui al Ministerio de Asuntos Exteriores a solicitar una acreditación de prensa a los talibanes. Esperaba que el trámite fuera fácil, porque ya me habían dado permiso para trabajar un año y medio antes. Además, yo era periodista de un diario regional que, me gustara o no, tenía poca repercusión internacional.

Naser Ahmad Karimi, el asistente del portavoz talibán del Ministerio de Asuntos Exteriores, me reprendió por no haber pedido la acreditación antes de aterrizar y de solicitar el visado. O, mejor dicho, reprendió a mi traductor, porque a mí no me dirigió la palabra en ningún momento, a pesar de que sabía inglés y podía hablar conmigo sin intermediarios. Acabó diciendo que un comité formado por altos cargos talibanes decidiría si me daban la acreditación o no. «¿Cuál es la condición para conseguirla?», pregunté. «No hay ninguna condición. El comité es el que decide», contestó.

En definitiva, la decisión era arbitraria. Así me lo confirmaron dos de los pocos periodistas extranjeros que quedaban en Afganistán. Los talibanes denegaban el permiso a la mayoría de los reporteros, y difícilmente lo renovaban a quienes eran corresponsales en el país. «Cada vez que queremos salir de Kabul e ir a otra ciudad, tenemos que pedirles un permiso especial y especificar sobre qué queremos informar», me dijo una periodista de la Agencia France-Presse. Los talibanes ya no recibían a los periodistas extranjeros con alfombra roja como habían hecho en el 2021, cuando pretendían dar una buena imagen internacional para ser reconocidos como gobierno legítimo. Ahora los reporteros éramos observadores incómodos.

La situación era todavía peor para los periodistas locales. Uno de los jefes de sección de Tolo News, la única televisión afgana de noticias que emitía veinticuatro horas, aseguraba que los talibanes le llamaban cada dos por tres para exigirle que no difundiera determinadas noticias. A otra reportera de la misma cadena, que cada día salía a la calle a buscar información, le había pasado de todo. Una vez los talibanes le quitaron la cámara y borraron las imágenes cuando intentaba informar sobre una manifestación de mujeres en Kabul. En otra ocasión la detuvieron por hacer una simple entrevista a una vendedora ambulante. «Me dijeron que me arrestaban por dar una mala imagen del país».

De hecho, las cadenas de televisión se habían transformado totalmente. Ya no emitían películas, ni series, ni música, y apenas había anuncios. La parrilla estaba llena de programas religiosos o debates tediosos en los que solo participaban hombres con turbante y barba. Las mujeres habían desaparecido casi por completo de la pequeña pantalla y, si salían, era siempre con velo y una mascarilla que les tapaba la cara.

Finalmente los talibanes me denegaron el permiso de prensa y me dijeron que me fuera del país. Sabían en qué hotel me alojaba y me planteé mudarme a otro, pero no irme de Afganistán. Ahora que me prohibían informar, yo tenía más ganas de quedarme que nunca.

Colapso económico

Era sorprendente la metamorfosis que había experimentado la población afgana en poco más de año y medio, desde que los talibanes llegaron al poder en agosto de 2021. Ahora en Kabul no se veía ni a un solo hombre vestido al estilo occidental.

Todos iban con el *shalwar kameez* musulmán y se habían dejado crecer la barba, algunos también la cabellera. Las mujeres llevaban túnica negra hasta los pies, velo en la cabeza y mascarilla, aunque no había ningún brote de coronavirus. Era la nueva imposición de los talibanes para obligarlas a cubrirse la cara, más aceptada en Occidente que el burka. Para mí la nueva norma fue una ventaja. Vestida de afgana y con mascarilla, era muy difícil que alguien me reconociera como extranjera. Eso me facilitó moverme por Kabul y recabar información a pesar de no tener el permiso de prensa.

El centro comercial Gulbahar, uno de los más populares de la capital, también había cambiado. Apenas quedaban tiendas de trajes de chaqueta para hombre, antes muy numerosas, y las que había no tenían clientela. «Si vendo algún traje, es para alguna boda o para alguien que se va al extranjero», me dijo Khesh Raw, uno de los comerciantes que no sabía qué hacer con tanto stock.

Pasearse por el centro comercial resultaba inquietante. Los maniquís de todos los escaparates tenían la cabeza tapada con una bolsa de plástico o cinta aislante. «Los talibanes consideran que son antiislámicos y nos ordenaron que les cortáramos la cabeza. Así que se la hemos cubierto como hemos podido», me dijo Sabaun Rahmani, el propietario de una tienda de ropa de niño donde todos los artículos estaban rebajados entre un cincuenta y un setenta por ciento. «Es que la gente no compra, no tiene dinero. Si no hacemos rebajas, no vendemos nada», lamentaba. En casi todas las tiendas había descuentos.

La profunda crisis económica continuaba en el país. En Kabul los obreros se ofrecían en la calle como mano de obra barata. Se plantaban en una esquina con sus herramientas de trabajo: picos, palas, brochas, rodillos... a esperar que algún empresario los contratara aunque fuera por una jornada. El sector de la construcción había quedado paralizado con la marcha de los

extranjeros. No era el único.

Las Naciones Unidas calculaban que unas setecientas mil personas habían perdido el empleo; unos veinte millones, casi la mitad de la población, vivían al día sin saber si tendrían algo para comer, y otros seis millones estaban a un paso de la hambruna. En Kabul algunas ONG repartían arroz, harina, aceite y otros alimentos básicos, y enseguida se formaban largas colas de mujeres ansiosas por recibir ayuda.

A pesar de eso, se veían pocas personas mendigando por la calle. Corría el rumor de que los talibanes habían prohibido pedir limosna. Su estrategia era esconder los problemas. Eso es lo que hicieron con los cuatro mil drogadictos que fumaban o se inyectaban heroína en los parques o parterres de la capital. Los trasladaron a la fuerza a una antigua base militar estadounidense reconvertida en hospital para, en teoría, someterlos a un tratamiento de desintoxicación. Sin embargo, los médicos del hospital aseguraban que allí era imposible tratarlos porque no tenían medicinas ni suficiente personal. «Tenemos orden de no darles de alta», me dijo uno de los facultativos.

El único sector que prosperaba era el de la minería. Las exportaciones de carbón y piedra de talco aumentaron drásticamente, según el subdirector de la Cámara de Comercio de Afganistán, el conocido empresario Jan Khan Alkozai. Informes de las Naciones Unidas también lo corroboraban. «Antes no nos salía a cuenta explotar las minas porque teníamos que pagar comisión a los talibanes, a los líderes locales y al Gobierno. Ahora solo pagamos a los talibanes», argumentó Alkozai. Los radicales se habían convertido en los principales promotores de la economía.

Sin embargo, el bloqueo financiero internacional seguía estrangulando cualquier avance. El corralito se mantenía en los bancos, aunque ya no se formaban colas delante de las

entidades financieras porque la gente se había acostumbrado a no poder sacar el dinero que quería. La imposibilidad de hacer transferencias bancarias desde el extranjero afectaba incluso a las Naciones Unidas, que cada mes trasladaban a Afganistán unos cuarenta millones de dólares en efectivo dentro de un avión para financiar sus proyectos.

La ley del silencio en Kandahar

A pesar de no tener permiso de prensa también viajé a Kandahar, considerada como la capital de los talibanes en el sur. Mi traductor, Rahim, vivía entonces allí y me ofreció alojarme en su casa. Mi amigo Wahid también estaba dispuesto a llevarme en coche hasta Kandahar, con lo cual mi nombre no quedaría registrado en ninguna compañía aérea ni en ningún hotel, y los talibanes no sabrían que había salido de Kabul. No podía desperdiciar una oportunidad así.

Wahid pidió a dos de sus nietos adolescentes que viajaran con nosotros en el vehículo para que pareciéramos una familia y no levantáramos sospechas. A diferencia de otros trayectos que había hecho por carretera en el pasado, esta vez no me puse el burka. «Si los talibanes te preguntan algo y no sabes responder tendremos un problema. Es mejor que no te lo pongas», me recomendó Wahid. En el trayecto nos encontramos una decena de controles. Paraban el coche y comprobaban a través de las ventanillas quién viajaba dentro. En ningún control me identificaron como extranjera. Con el *chapán*, el velo y la mascarilla, pensaron que era afgana.

Llaman autopista Kabul-Kandahar a la principal vía que une la capital afgana con el sur del país, pero en realidad es una carreterucha en malas condiciones de dos carriles y doble sentido. Durante los años en que las tropas internacionales

estuvieron en Afganistán también se la conocía con el sobrenombre de «carretera de la muerte», porque circular por allí era demasiado peligroso. Los talibanes la atacaban a diario. Colocaban artefactos explosivos en las canalizaciones de agua, es decir, en los tubos enormes que cruzan la carretera de lado a lado por debajo de la calzada para permitir el paso del agua de la lluvia. El asfalto en esos lugares estaba ahora levantado. Las torres de alta tensión que transcurrían paralelas al trazado de la carretera también estaban dañadas, con los cables descolgados. Los talibanes incluso habían dinamitado cuatro puentes y ahora los vehículos debían buscar un camino alternativo. Impresionaba su gran capacidad de destrucción.

Ahora, en cambio, la autopista Kabul-Kandahar y la mayoría de las carreteras de Afganistán eran seguras, porque los talibanes ya no las atacaban sino que las vigilaban. Aun así continuaba habiendo atentados, la mayoría eran obra del Estado Islámico Provincia de Jorasán (ISIS-K), que mantenía células terroristas en el país y rivalizaba con los talibanes.

El viaje a Kandahar duró nueve horas. Las pésimas condiciones de la carretera hicieron eterno el trayecto de casi quinientos kilómetros. En la ciudad esperaba encontrarme banderas del régimen por todas partes y talibanes apostados en cada esquina. Sin embargo, apenas había símbolos islamistas y la vigilancia talibán era discreta. A simple vista pocas cosas habían cambiado: continuaba el bullicio de gente y, como siempre, se veían pocas mujeres por la calle, y las que salían iban cubiertas con el burka. En la plaza principal de Kandahar, la de Shahidan, habían colocado un letrero luminoso que decía: «Haibatullah Akhunzada te recuerda que debes rezar con puntualidad cinco veces al día». Haibatullah Akhunzada era el líder de los talibanes.

Lo que sí había cambiado era que ahora la gente tenía miedo de hablar. En la ciudad se había acuñado un término en pastún,

bagué, para referirse a los que criticaban al Gobierno. Nadie quería ser un *bagué* para no tener problemas con los talibanes.

«Los talibanes controlan la entrada y la salida del hospital, y el director también es talibán. Si descubren que eres periodista y que no tienes permiso de prensa te detendrán y a nosotros nos matarán. Nuestro coche es muy fácil de identificar», me dijo Wahid cuando propuse ir al hospital Mirwais, el más importante de Kandahar, para entrevistar a algunos pacientes. Entonces me di cuenta de algo en lo que no había reparado: todos los vehículos de Kandahar iban sin matrícula y tenían el volante a la derecha, porque los importaban de forma ilegal desde Pakistán. Nuestro coche era el único con identificación y con el volante a la izquierda.

Entrevisté a un enfermero, pero fuera del hospital. Me describió una situación dramática por la falta de personal médico. También hablé con un catedrático de la Universidad de Kandahar, que me aseguró que en la ciudad casi no quedaban profesores porque la mayoría se habían exiliado durante la evacuación estadounidense. Un agricultor que plantaba opio accedió a que le entrevistara dentro del coche, él sentado en el asiento del copiloto y yo en el asiento trasero cubierta con un burka, mientras Wahid conducía por Kandahar, para no llamar la atención de los talibanes. El agricultor aseguró que los talibanes habían prohibido el cultivo del opio, pero no su venta. Afganistán continuaba siendo el primer productor de adormidera del mundo, y la droga, la principal fuente de financiación de los talibanes.

Excluidas de las aulas

Tradicionalmente el 21 de marzo es festivo en Afganistán porque se celebra el inicio del año nuevo persa. Ese día las

familias se reúnen y van de pícnic aprovechando la llegada de la primavera. Los talibanes, sin embargo, eliminaron la festividad y decretaron que el 21 de marzo empezaba el curso escolar y era un día laborable. Las oficinas del Gobierno, las escuelas y los lugares oficiales estaban abiertos en Kabul. En cambio, para mi sorpresa, casi todas las tiendas tenían la persiana bajada y poca gente circulaba por la calle. Era emocionante ver la ciudad así, resistiendo silenciosamente. La población no podía decir más alto y más claro que se oponía a la imposición de los talibanes.

«Claro que hoy iré al colegio. No quiero tener problemas. Pero supongo que los alumnos no se presentarán», me dijo Nilofar, una profesora de una escuela pública de Kabul que ese día debía trabajar aunque le fastidiara. Tenía razón. El 21 de marzo el profesorado acudió a las aulas, pero los alumnos no.

Nilofar era profesora de educación secundaria en una escuela de chicas pero, desde que los talibanes llegaron al poder, se quedó sin alumnas y pasó a hacer tareas de auxiliar. Pude constatar que la prohibición temporal de que las jóvenes estudiaran había pasado a ser permanente. Las chicas no volvieron a pisar las aulas ni del instituto ni de la universidad. Los talibanes solo permitían que las niñas cursaran hasta sexto de primaria. Era el único país del mundo en el que pasaba algo así.

«Ahora las alumnas de sexto intentan suspender para repetir», me aseguró Nilofar. Así podían continuar yendo al colegio. De lo contrario, su único futuro era casarse. De hecho, según la profesora, a muchas de sus antiguas alumnas las habían obligado a contraer matrimonio con solo catorce o quince años, algo que ya pasaba durante la presencia de las tropas internacionales, pero que ahora sería más frecuente todavía. Eso es lo que parecían querer los talibanes, que las jóvenes se casaran cuanto antes, se convirtieran en puras

máquinas de engendrar hijos y se dedicaran exclusivamente a las tareas de casa.

La prohibición de los talibanes generaba consternación en Kabul. En cualquier conversación salía a colación el tema y era fácil que niñas o mujeres rompieran a llorar de impotencia. «Yo no pude estudiar y mi sueño era que mis hijas lo hicieran», me dijo entre lágrimas Breshna, madre de una niña de trece años y otra de diez que ya habían completado la educación primaria y, por lo tanto, no podían ir más a la escuela. Era la generación nacida después de la caída del primer régimen talibán en 2001 que por primera vez en muchos años había tenido acceso a la educación sin restricciones. Ahora regresaban al ostracismo.

Un día me planté delante de la Universidad de Kabul hacia el mediodía, a la hora en que muchos alumnos salían de clase, para preguntarles sobre la prohibición de los talibanes. Lógicamente todos los estudiantes eran varones. Me sorprendió su respuesta. La mayoría decían sentir mucho que sus compañeras de clase ya no pudieran ir a la universidad, pero que ellos no podían hacer nada porque no querían tener problemas. Aún me descolocó más la reacción de uno de los nietos de Wahid, Hamid, de dieciséis años. Todavía iba al instituto, y cuando le planteé si estaría dispuesto a salir a la calle a protestar porque sus hermanas ya no podían estudiar me dijo encogiéndose de hombros: «Es que yo no tengo ninguna razón para protestar. Estudio, juego al fútbol, salgo con los amigos y voy al parque y al zoo». La vida de las mujeres había cambiado, pero la de los hombres no.

Como en el primer régimen talibán, surgieron clases clandestinas para chicas. Las jóvenes se reunían en casas particulares y una profesora les enseñaba a escondidas. «Es arriesgado venir aquí, pero ¿qué podemos hacer si no?», me dijo Fatima, de dieciocho años. «A los talibanes les hacemos creer que es una madrasa», me explicó Zuhal, la coordinadora

de una asociación que organizaba las clases.

Los radicales no permitían que las chicas estudiaran ni en el instituto ni en la universidad, pero sí en escuelas islámicas. Los altavoces de las mezquitas sonaban a más volumen que nunca en Kabul cuando llamaban a la oración, y los viernes se cortaba el tráfico de algunas calles para que los hombres pudieran rezar en medio de la calzada. La sociedad afgana se estaba islamizando aún más si cabe y el analfabetismo y la falta de cultura la hacían fácilmente manipulable. Era un caldo de cultivo demasiado peligroso.

En una ratonera

Las entrevistas siempre acababan igual: «Por favor, ayúdame a salir de Afganistán». Todo el mundo quería irse y esperaban que yo obrara el milagro. Afganistán se había convertido en un estado policial. Se producían detenciones arbitrarias y ejecuciones extrajudiciales. Pero sobre todo aumentaron los castigos físicos. Los talibanes apedreaban o azotaban con varas y látigos a los acusados de cometer «delitos morales», como beber alcohol, mantener relaciones sexuales fuera del matrimonio o robar. También apaleaban a activistas de derechos humanos, periodistas, artistas…, a cualquiera que cuestionara su régimen. Incluso los guardias urbanos en el centro de Kabul llevaban ahora unas porras largas para golpear la carrocería de los vehículos si los conductores no hacían caso a sus órdenes. No me extraña que los afganos quisieran irse.

Huir, sin embargo, no era fácil. Conseguir un pasaporte era una odisea. Las oficinas que los expedían estuvieron cerradas durante un año y, cuando reabrieron en 2023, las colas eran kilométricas. Aparte del pasaporte, los afganos necesitaban un visado para viajar al extranjero. Los países de la OTAN, que

durante dos décadas tuvieron tropas en Afganistán, no reabrieron sus embajadas tras la evacuación precipitada en agosto de 2021. Turquía fue la única excepción. Si un afgano quería solicitar asilo en Estados Unidos, Canadá o un país europeo, necesitaba primero un visado para viajar a los países limítrofes de Pakistán o Irán y, una vez allí, pedir la protección internacional en la embajada correspondiente. Las legaciones occidentales acostumbraban a denegar las peticiones, y Pakistán e Irán tampoco facilitaban la entrada en su territorio. Por su parte, Turquía no concedía visados, y en el mercado negro se vendían por cuatro mil dólares.

Las agencias de las Naciones Unidas continuaban teniendo oficina en Afganistán, pero el acceso a sus representantes era difícil, incluso para mí como periodista. El portavoz del Programa Mundial de Alimentos fue el único que me recibió en su despacho en Kabul. «Los talibanes pretenden supervisar a quién ayudamos y quedarse parte de la comida. Cada vez que ocurre algo así, paralizamos la distribución. No aceptamos interferencias», me aseguró extraoficialmente. Aun así el Programa Mundial de Alimentos había asistido a más de la mitad de la población afgana, veintitrés millones de habitantes, en el 2022.

La Misión de Asistencia de las Naciones Unidas en Afganistán (UNAMA) todavía lo tenía más difícil para trabajar. De hecho, sorprendía que continuaran en el país. Su mandato era apoyar al Gobierno, y allí ya no había ningún gobierno al que apoyar. La comunidad internacional no reconocía al régimen talibán. «Los talibanes utilizan a las mujeres como arma de presión. Imponiéndoles cada vez más restricciones, esperan que la comunidad internacional ceda y los reconozca como gobierno legítimo», me dijo su responsable de prensa de forma extraoficial. Tenía toda la lógica. De hecho, en abril de 2023 los talibanes dieron un paso más y prohibieron a las mujeres

trabajar para las Naciones Unidas. Reconocer al régimen talibán suponía dar alas a su radicalismo religioso. No hacerlo aislaba a la población afgana y la condenaba al bloqueo económico. No sé cuál era la mejor opción.

El mandato de ONU Mujeres en Afganistán también estaba en entredicho. Su función era empoderar a las mujeres en un país cuyas autoridades, con las que convenía llevarse bien, promovían todo lo contrario. Los talibanes se encargaban de la protección exterior de todas las oficinas de la ONU. «Trabajamos con personal esencial y limitado. No podemos conceder entrevistas a periodistas extranjeros», es la respuesta que recibí por correo electrónico de la delegación de la Unión Europea en Kabul, que también había reabierto su oficina. Me aconsejaban que me pusiera en contacto con uno de sus portavoces en Bruselas. «Los estados miembros de la UE recomiendan no viajar a Afganistán por el riesgo y la falta de asistencia consular», añadían.

La Unión Europea tenía una encargada de negocios en Kabul, Raffaella Iodice, que no estaba disponible para entrevistas pero era muy activa en Twitter y a menudo colgaba fotos suyas vestida con ropa tradicional afgana y tocada con un velo a juego. Esos tuits me sacaban de quicio. ¿En serio la representante de la UE no tenía nada más importante que hacer que enseñarnos sus modelitos? No quiero ni imaginar cómo les sentaría a los afganos atrapados en un país que era una ratonera.

Insistí hasta que uno de los portavoces de la Unión Europea en Bruselas, Peter Stano, me concedió una entrevista por teléfono. «La Unión Europea continúa comprometida en el apoyo al pueblo afgano», aseguró. Financiaba proyectos humanitarios y había hecho diversas declaraciones institucionales de condena al régimen talibán. El dinero y la condena estaban muy bien, pero ¿por qué no concedía asilo a

los afganos que continuaban encerrados en los campos de refugiados de la isla griega de Lesbos? Stano no me dio una respuesta. ¿O por qué no hacía nada para que juzgaran a los muyahidines que tantas atrocidades habían cometido? Mientras estuvieron en Afganistán era imposible porque la ley de amnistía les garantizaba inmunidad, pero ahora estaban todos en el extranjero, excepto Gulbuddin Hekmatyar.

Para mí el compromiso de la Unión Europea con el pueblo afgano eran palabras vacías, y su defensa de la justicia y los derechos humanos, una hipocresía. Si la historia se había repetido con el regreso de los talibanes al poder, ¿por qué no podía repetirse con la aparición de otro terrorista internacional que atentara contra Occidente? Afganistán debía preocuparnos aunque fuera, como casi siempre, por nuestro propio interés.

Privilegiados

El centro cultural donde vi aquella película que tanto emocionó a Sameem, mi traductor, en 2019 estaba irreconocible. Habían clausurado la sala de cine, y la biblioteca con centenares de libros, pinturas y esculturas era ahora un lugar deprimente donde apenas quedaban unos cuantos ejemplares cubiertos de una capa de polvo. «Los jueves hacíamos recitales de poesía. Al principio venían chicas y chicos, pero los talibanes nos advirtieron que las mujeres no podían asistir y entonces solo participaban los hombres», me explicó el responsable del centro, un escritor que intentó mantener la actividad cultural a pesar de los talibanes. Hasta que le propinaron una paliza y dejó de organizar eventos. Ahora quería irse del país como tantos otros afganos y maldecía a los extranjeros.

Entendía su rabia. Los extranjeros les habíamos prometido la panacea y ahora les dejábamos tirados y pretendíamos que

resolvieran sus problemas sin ayuda. Casi la mitad de la población afgana era analfabeta, pasaba hambre y no tenía electricidad, y solo un 23 por ciento tenía acceso a internet. Los talibanes se habían apoderado de las armas de la policía y del ejército, y la comunidad internacional había alimentado el conflicto desde el principio con armamento y una cultura de la impunidad. ¿De verdad ahora les exigíamos que lideraran una revolución contra los talibanes ellos solos?

El escritor me regaló uno de sus libros, un poemario crítico con los talibanes, que no me llevé a Barcelona. Si lo encontraban en mi maleta podía tener problemas. Sin embargo, la salida del país fue tan fácil como la entrada. Esta vez los funcionarios del aeropuerto tampoco me hicieron preguntas. En la sala de embarque decenas de personas esperaban para subir al avión. Había familias enteras, con niños y abuelos. Algunos pequeños correteaban por la sala con gran alboroto. Niñas y niños juntos. Qué pena que de pequeños sean iguales y de mayores sus vidas difirieran tanto.

Una vez en Barcelona, publiqué diversos reportajes sobre Afganistán firmados con mi nombre, a sabiendas de que eso tal vez me impediría volver a un país donde había vivido tantos años. Regresar me ha generado ansiedad en los últimos viajes, pero saber que quizá no podré volver aún me angustia más.

Con la imagen de un Afganistán sometido por los talibanes todavía en la retina, participé en una mesa redonda de la Universidad Autónoma de Barcelona. Era mediodía y muchas estudiantes leían o tomaban el sol en el césped del campus. «¿Sabéis lo afortunadas que sois?», me hubiera gustado gritarles. Así me siento yo, una afortunada. Aunque me siguen persiguiendo mis fantasmas, una herida en el alma que dudo que pueda cicatrizar nunca, y el miedo a quedarme en blanco ante la pantalla del ordenador, a no encontrar las palabras justas.

Días más tarde, una emisora de radio importante de Cataluña se interesó en entrevistarme: «Te llamaremos a las nueve y media de la mañana», me dijeron. Pero la llamada no llegó. Consumieron todo el tiempo en antena hablando de una *rave* que se celebraba cerca de Barcelona y de un joven que había matado a un hombre en un club de tiro. Eso era más importante que los millones de chicas que no pueden estudiar, los miles de niños que mueren de hambre o las decenas de activistas apaleados por los talibanes en Afganistán. Nada ha cambiado, pensé. Continuamos mirándonos el ombligo y Afganistán nos importa un comino. Al menos por ahora, a no ser que otro atentado ponga en riesgo nuestra integridad.

Agradecimientos

Los años que viví en Afganistán fueron duros, pero aún lo fueron más los posteriores a mi marcha del país. No los habría superado ni habría continuado trabajando como periodista sin la ayuda de una larga lista de personas.

Mi padre y mi madre, Isabel Fernández y Faustino Bernabé, que me devolvieron la estabilidad emocional que necesitaba tras mi regreso a Barcelona, a quienes debo ser como soy, y de quienes tanto he aprendido. De mi madre he heredado la energía y redaños. De mi padre, su iniciativa y dedicación al trabajo.

Mi hermano, Víctor Bernabé, que siempre reniega cuando le pido algo, pero después es el primero que me ayuda en todo y relativiza los problemas con su ironía.

Mis sobrinos, Eva y Pol Bernabé, que me dan alegría y me hacen reír con sus ocurrencias.

Mi amiga María Cilleros, que me ayudó a mantenerme a flote durante el último año que viví en Afganistán y a mudarme a Italia, y me ha acompañado emocionalmente y cuidado en los momentos más difíciles de mi vida. No tengo palabras suficientes para agradecerle todo lo que ha hecho por mí.

Mi amigo Gonzalo Sánchez, con quien siempre puedo contar, y es la primera persona a la que llamo cuando estoy baja de moral porque me desternillo con su sentido del humor y fina ironía.

El periodista y fotógrafo Gervasio Sánchez, que me animó a establecerme como reportera en Afganistán y de quien tanto he aprendido. Sin su ayuda y consejos profesionales, no habría

llegado donde estoy. Le estaré eternamente agradecida.

La directora del *Ara*, Esther Vera, por confiar en mí y en mi trabajo, y ofrecerme la oportunidad de crecer como periodista en un diario que al principio pensé que me daría pocas satisfacciones profesionales y, sin embargo, me ha abierto infinidad de posibilidades. Su apuesta por mí cambió mi vida. También quiero dar las gracias al director adjunto del *Ara*, Ignasi Aragay, y a la subdirectora Catalina Serra. Y especialmente a la periodista Cristina Mas por su amistad y ayuda en la redacción, y en mis viajes al extranjero como reportera.

Mi pareja, Jorge Díez Güemes, mi mejor cómplice y compañía, por su sensibilidad, cariño, apoyo y comprensión, y por aportarme serenidad, confianza y alegría.

Anna Giralt, por su amistad durante más de cuatro décadas, por su ironía y por ilusionarme haciéndome madrina de su hija Irene.

Roser Royo, mi gran amiga de la universidad, por estar pendiente de mí en mis peores momentos.

Yris Sánchez, por estar siempre dispuesta a apuntarse a un bombardeo y acompañarme donde le proponga.

Sonia Vicente, mi terapeuta, por no cejar hasta sacarme del pozo a pesar de mi resistencia.

Azita Rafat, mi amiga afgana en quien confío ciegamente, y sin la que no habría podido hacer mi trabajo en Afganistán. Por sus contactos, ideas, consejos y risas. Su humor negro ha sido una tabla de salvación.

Mi prima Mercedes Martínez, por sus risas y porque siempre está cuando la necesito.

Enric Prades (Mosfoten), por ser un lector incondicional de mi trabajo, el mejor crítico y hacerme reír a carcajadas.

David Redondo Bravo, por cuidarme cuando tuve cáncer.

Àngels Castuera, Alba Galí, Ana y María Palenzuela,

Meritxell Freixas, Iratxe Rojo, Marta Font, Vicky Cardiel, Eva Fernández y Karlos Zurutuza, por su amistad, ayuda y compañía.

Khoshal, Tofan, Sameem, Jawad Hossaini, Jawad Fazil Razban, Mumtaz, Shakila Ibrakhim Khil y Rangina Hamidi, por su apoyo en Afganistán.

El periodista Josep Morell, por su profesionalidad y sensibilidad, y por promocionarme con el documental *Vestida de negre*.

El almirante Teodoro López Calderón, por confiar en mí y ayudar a tantas familias afganas.

Xisca Mas, por ser la mejor editora y porque, sin ella, este libro no sería lo que es.

La editorial Debate y, en concreto, Miguel Aguilar, por insistir en que escribiera este libro a pesar de mis reticencias.

A todos ellos, mi más sincero agradecimiento.

Lista de acrónimos y siglas

AAN: Afghanistan Analysts Network (Red de Análisis sobre Afganistán).
ACNUR: Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados.
AECID: Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo.
AIHRC: Afghanistan Independent Human Rights Commission (Comisión Independiente de Derechos Humanos de Afganistán).
AMSO: Afghanistan Migrants Advice & Support Organization (Asesoramiento para los Migrantes en Afganistán y Organización de Apoyo).
ASDHA: Asociación por los Derechos Humanos en Afganistán.
CIA: Central Intelligence Agency (Agencia Central de Inteligencia).
CICR: Comité Internacional de la Cruz Roja.
ISIS: Islamic State of Iraq and Syria (Estado Islámico de Irak y Siria).
ISIS-K: Islamic State-Khorasan Province (Estado Islámico Provincia de Jorasán).
MOAB: Massive Ordnance Air Blast or Mother of All Bombs (Artillería de Explosión Masiva o Madre de Todas las Bombas).
MRAP: Mine-Resistant Ambush Protected (Vehículo protegido resistente a las minas y a las emboscadas).
OIM: Organización Internacional para las Migraciones.
ONG: organización no gubernamental.
ONU: Organización de las Naciones Unidas.
OTAN: Organización del Tratado del Atlántico Norte.
PNUD: Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo.
PP: Partido Popular.
UE: Unión Europea.
UNAMA: United Nations Assistance Mission in Afghanistan (Misión de Asistencia de las Naciones Unidas en Afganistán).
UNESCO: United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization (Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura).

UNODC: United Nations Office on Drugs and Crime (Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito).

Mònica Bernabé, la única corresponsal española que ha vivido en Afganistán, ofrece en este libro el relato sobrecogedor de lo sucedido en el país durante los últimos diez años.



«Las desgracias en Afganistán eran una llovizna fina que me iba calando poco a poco y me había empapado sin darme cuenta. Más allá de la guerra que narraba en mis artículos, otra batalla en la que la tristeza ganaba cada vez más espacio se libraba dentro de mí».

La reportera Mònica Bernabé vivió durante ocho años en un país en guerra. Con el rigor y la honestidad que caracterizan su periodismo, presenta una crónica sobre los años posteriores a un conflicto que conoce muy bien, y da su voz a aquellos a los que quedaron silenciados: refugiados que huyen desde el infierno de Oriente Medio hasta Europa; mujeres abusadas a las que se les niega el derecho a la educación, a decidir sobre su vida y su propio cuerpo, y una población maltratada impunemente por un sistema fundamentalista que los intereses geopolíticos de Occidente han ayudado a encumbrar.

Pero defenderlos derechos humanos y prestar tu voz para informar al mundo tiene un precio. *Crónica de un fracaso* es un reportaje íntimo y valiente en el que la periodista denuncia a

políticos y dirigentes de todos los países. Habla de feminicidios, salud mental, migración y libertad de prensa, pero también de la batalla interna que inevitablemente se desata al vivir y cubrir en directo los desastres de un país en guerra.

Mònica Bernabé Fernández (Barcelona, 1972) vivió en Afganistán durante casi ocho años, entre 2006 y 2014, y trabajó como periodista freelance para el diario *El Mundo*. La primera vez que viajó a este país asiático fue en el año 2000 durante el dominio de los talibanes. A su regreso fundó la Asociación por los Derechos Humanos en Afganistán (ASDHA), entidad que presidió durante quince años, y desde entonces mantuvo contacto constante con organizaciones de mujeres afganas. Tras su marcha de Afganistán en 2014, ha regresado al país en diversas ocasiones por lo que ha sido testigo permanente de su evolución. En 2010 fue galardonada con el premio Julio Anguita Parrado, y en el 2013 con el Premio Cirilo Rodríguez a la mejor corresponsal extranjera. También ha trabajado como periodista freelance en Italia durante más de dos años y en la actualidad es reportera en el diario *Ara*.



Primera edición: septiembre de 2023

Diseño de portada: Penguin Random House Grupo Editorial / Andreu Barberan
Fotografía de portada: © Gervasio Sánchez

ISBN: 978-84-1939-963-2

Compuesto en: www.acatia.es

Facebook: PenguinEbooks
acebook: debatelibros
Twitter: @debatelibros
Instagram: @debatelibros
YouTube: penguinlibros
Spotify: PenguinLibros

«Para viajar lejos no hay mejor nave que un libro.»

EMILY DICKINSON

Gracias por tu lectura de este libro.

En **Penguinlibros.club** encontrarás las mejores recomendaciones de lectura.

Únete a nuestra comunidad y viaja con nosotros.



Penguinlibros.club



Penguin
Random House
Grupo Editorial

 Penguinlibros

Índice